



**Consejo Económico
y Social**

Distr.
GENERAL

E/1994/104/Add.22
23 de julio de 1998

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

Período sustantivo de sesiones de 1998

APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Tercer informe periódico presentado por los Estados partes
de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto

Adición

AUSTRALIA */ **/

[15 de junio de 1998]

*/ El segundo informe periódico sobre los derechos comprendidos en los artículos 6 a 9 (E/1984/7/Add.22) y los artículos 10 a 12 presentados por el Gobierno de Australia fueron examinados por el Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales del Período de Sesiones sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus períodos de sesiones de 1985 (véase E/1985/WG.1/SR.17-18 y 21) y 1986 (véase E/1986/WG.1/SR.10-11 y 13-14), respectivamente. El segundo informe periódico sobre los derechos comprendidos en los artículos 13 a 15 (E/1990/7/Add.13) fue examinado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su octavo período de sesiones (véase E/C.12/1990/SR.13, 15 y 20) en 1993.

Los anexos y apéndices a que se refiere el presente informe pueden consultarse en la secretaría del Comité.

**/ La información presentada por Australia de conformidad con las directrices relativas a la parte inicial de los informes de los Estados partes figura en el documento básico (HRI/CORE/1/Add.44).

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. INTRODUCCIÓN	1 - 5	3
Artículo 1: El derecho a la autodeterminación	6	3
Artículo 2: El derecho a la no discriminación	7 - 29	3
Artículo 3: El derecho de hombres y mujeres al goce de derechos en condiciones de igualdad.	30	7
Artículo 6: El derecho al trabajo.	31 - 55	8
Artículo 7: El derecho a condiciones de trabajo favorables	56 - 106	13
Artículo 8: El derecho a afiliarse a sindicatos y a fundarlos	107 - 125	22
Artículo 9: El derecho a la seguridad social	126 - 166	26
Artículo 10: Protección y asistencia para la familia	167 - 206	35
Artículo 11: El derecho a un nivel de vida suficiente.	207 - 227	45
Artículo 12: El derecho a gozar de salud física y mental	228 - 263	49
Artículo 13: El derecho a la educación.	264 - 321	57
Artículo 15: El derecho a participar en la vida cultural; el derecho a gozar de los beneficios de la tecnología y sus aplicaciones	322 - 365	70
Anexo		80

I. INTRODUCCIÓN

1. Australia firmó El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 18 de diciembre de 1972 y lo ratificó el 10 de diciembre de 1975. Entró en vigor para Australia el 10 de marzo de 1976.

2. De conformidad con los artículos 16 y 17, Australia presenta a continuación su informe sobre las medidas que ha adoptado y los progresos realizados en el logro de la observancia de los derechos reconocidos en el Pacto.

3. El presente es el primer informe completo de Australia al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y abarca el período de 1990 a 1997.

4. En la preparación del informe, se ha seguido, en términos generales, la forma de presentación utilizada en las directrices generales revisadas para la presentación de informes (E/C.12/1991/1). Australia ha tratado de precisar las cuestiones clave que se suscitan en relación con cada artículo más afines a la protección de los derechos humanos en Australia. Estas cuestiones se han tratado de manera temática y evaluativa y se apoyan en la información estadística de los apéndices.

5. El material contenido en el informe debería examinarse en el contexto de las estructuras generales de tipo constitucional y legislativo vigentes en Australia. La información general sobre el marco jurídico de protección de los derechos humanos y las medidas adoptadas para promover dichos derechos en el país figura en el documento básico presentado por Australia. El documento básico también brinda información sobre el territorio, la población y la estructura política de Australia, por lo que debería leerse conjuntamente con el presente informe.

Artículo 1

El derecho de libre determinación

6. Sírvanse remitirse al artículo 1 del cuarto informe de Australia sobre el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (que se adjunta como apéndice 1). Véanse también los apéndices 2 a 4.

Artículo 2

El derecho a la no discriminación

7. El Gobierno federal está plenamente empeñado en proteger cada uno de los derechos garantizados por el Pacto. Los derechos en él contenidos pueden ser garantizados por cualquiera de las fuentes de derecho reconocidas en Australia. Como se esboza en el documento básico, el derecho se deriva en Australia de las siguientes fuentes: el common law, la legislación y la legislación subordinada del Parlamento Federal y de cualquiera de los parlamentos de los seis estados o los tres territorios que gozan de autonomía.

8. Los acuerdos de cooperación entre los gobiernos federal y de los estados han permitido que las ideas de un ámbito competencial sean compartidas con otros. Además, la cooperación de los gobiernos de los estados es indispensable para preparar los informes previstos en el Pacto, a efectos de poder presentar una exposición refundida del derecho y la práctica australianos.

9. El régimen legislativo de la isla de Norfolk carece de normas que garanticen los derechos humanos. La legislación federal no comprende la isla a menos que así se diga expresamente en la legislación de que se trate. El Commonwealth se ha comprometido a consultar con el Gobierno de la isla de Norfolk la posible extensión a la isla de las leyes de Commonwealth, inclusive las referentes a los derechos humanos.

10. En el documento básico se detallan los mecanismos institucionales que protegen los derechos reconocidos en el Pacto, junto a un esbozo de la legislación que los establece. Cabe observar, no obstante, que el Gobierno federal ha anunciado recientemente grandes cambios en esos mecanismos, inclusive una reorganización de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. La reorganización comprenderá la introducción disposiciones legales para que la Comisión cambie su nombre por el Comisión de Derechos y Responsabilidades Humanas, con una estructura simplificada y unas funciones principales más definidas. La estructura ejecutiva de la nueva Comisión consistirá en un Presidente y tres Vicepresidentes, todos los cuales estarán encargados de proteger y fomentar los derechos humanos de todos los australianos. Cada uno de estos Vicepresidentes tendrá además a su cargo una temática específica: uno se ocupará de la justicia social y la raza, otro examinará la discriminación por razones de sexo y la igualdad de oportunidades, y el terero se ocupará de los derechos humanos y la discapacidad.

11. La nueva Comisión conservará una función central en la tramitación de las quejas presentadas conforme a la legislación federal sobre discriminación. Más adelante, bajo el epígrafe "no discriminación" se dan más detalles sobre esta función. Aparte de su papel en la tramitación de las quejas, las funciones principales de la Comisión se centrarán, empero, en la educación, la difusión de información sobre los derechos humanos y la asistencia a las empresas y a la comunidad -por ejemplo, mediante el desarrollo de directrices para ayudar a la gente a cumplir la legislación contra la discriminación. Cada Vicepresidente tendrá además por misión ayudar al Tribunal Federal *commissarius curiae* en las actuaciones suscitadas por las quejas de discriminación ilícita conforme a la legislación federal contra la discriminación.

12. El Proyecto de Ley de Modificación de la Legislación sobre los Derechos Humanos de 1998, por la que se harán efectivos los cambios estructurales en la Comisión, fue presentada al Parlamento federal el 4 de abril de 1998.

13. En los informes presentados por Australia conforme a otros artículos del Pacto puede hallarse también un comentario más detallado del artículo 2. En consecuencia, el comentario sobre mecanismos legislativos concretos se inserta en el análisis siguiente sobre los diversos derechos y libertades garantizados por el Pacto.

14. La discriminación por diversos motivos fue declarada ilícita por la Ley Federal sobre la Discriminación Racial de 1975, la Ley Federal sobre la Discriminación por Razones de Sexo de 1984 y la Ley Federal sobre la Discriminación por Discapacidad de 1992. Los motivos por los que se declara ilícita la discriminación son: raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, estado civil, embarazo o posible embarazo, responsabilidades familiares y deficiencia física o mental, existente, anterior, o posible en el futuro o atribuida a una persona. Hay una serie de excepciones a

esta legislación y se disponen medidas especiales como las destinadas a fomentar la igualdad de todos los elementos de la sociedad australiana.

15. El Gobierno federal ha promulgado también la Ley sobre la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de 1986, que habilita a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades a investigar todo acto o práctica del Gobierno federal que pueda ser incompatible con un derecho humano reconocido en la Ley o contrario a él.

16. Actualmente, las quejas conforme a la legislación mencionada son investigadas y conciliadas por la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. Si no puede lograrse la conciliación, el Comisionado competente puede remitir la queja a la Comisión para que se celebre una vista pública al respecto. Si la Comisión considera que la queja está justificada, adoptará la determinación apropiada. Si las partes no cumplen con la determinación, deberán instaurarse nuevas actuaciones en el Tribunal Federal, que está facultado para examinar el asunto y hacer cumplir su determinación.

17. Conforme a las modificaciones propuestas por el Proyecto de Ley de Modificación de la Legislación sobre los Derechos Humanos, las quejas por discriminación ilícita formuladas de conformidad con la Ley sobre la Discriminación por Discapacidad de 1992, la Ley sobre la Discriminación Racial de 1975 y la Ley sobre la Discriminación por Razones de Sexo de 1984 seguirán presentándose ante la Comisión, que las investigará y tratará de conciliarlas. La responsabilidad por la eficacia y la oportunidad de la tramitación de la queja recaerán en el Presidente de la Comisión. Pero la principal diferencia es que, cuando la Comisión no pueda resolver las quejas mediante conciliación, podrá dirigirse al Tribunal Federal para obtener una vista y una determinación.

18. Estos cambios en los procesos de tramitación de quejas y observancia de las determinaciones pertinentes en la esfera de los derechos humanos se hicieron necesarios por una decisión del Tribunal Supremo de Australia de 1995. Enandy v Human Rights and Equal Opportunity Commission (1995) 183 CLR 245, el Tribunal Superior sostuvo que el sistema anterior para hacer cumplir las determinaciones de la Comisión registrándolas en el Tribunal Federal de Australia y hacerlas ejecutar como mandamientos de ese Tribunal, era inconstitucional. El Tribunal Superior estimó que el sistema infringía el principio constitucional de la separación de los poderes judicial y ejecutivo, consagrado en el Capítulo III de la Constitución del Commonwealth.

19. La legislación contra la discriminación se analiza en detalle en relación con el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A los efectos presentes, es conveniente limitarse a enumerar los principales textos de la legislación federal y de los estados. (Véase el anexo.)

20. Todas las jurisdicciones de los estados australianos, con la excepción de Tasmania, han promulgado una amplia legislación contra la discriminación. Con todo, se ha presentado al parlamento tasmano el Proyecto de Ley contra la Discriminación de 1997, cuyo objeto es dotar a Tasmania de una completa legislación contra la discriminación.

21. Cabe observar, sin embargo, que Australia no cree que todos los asuntos relativos a los derechos humanos deban abordarse recurriendo a las sanciones

legales tradicionales. En muchos casos, los derechos se fomentan más prontamente con un proceso menos formal, a menudo vinculado con la investigación, la conciliación y el informe. Métodos como los comités parlamentarios especiales o las comisiones reales pueden ser adecuados para determinar el equilibrio entre derechos y obligaciones que es parte integrante del método mediante el cual se protegen y promueven los derechos y libertades humanos. Desde luego, cuando un asunto es susceptible de definición legislativa precisa y de observancia de la ley por los medios tradicionales, también se tiene en cuenta esta vía.

22. Para un análisis y un panorama más amplios de la legislación federal y estatal australiana contra la discriminación, sírvanse remitirse específicamente a los artículos 2 y 26 del informe de Australia conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a los artículos 2 y 15 del tercer informe periódico de Australia conforme a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y al artículo 2 del informe de Australia de 1996 conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño. (Véanse los apéndices 5 a 12 para información complementaria sobre la protección de este derecho.)

Aportaciones específicas de los estados: Australia Occidental

23. En el sector público de Australia Occidental, se desalientan las prácticas discriminatorias en el empleo conforme a lo dispuesto en la Ley de Gestión del Sector Público de 1994. El artículo 21 de esta Ley requiere de la Comisión de Normas del Sector Público (PSSC) que produzca un conjunto de normas relativas a una serie de prácticas de gestión de los recursos humanos en el sector público de Australia Occidental. Las normas han de reformar esas prácticas haciéndolas más flexibles y equitativas. Conforme al artículo 21, cada órgano del sector público debe elaborar su propio Código de Conducta y un conjunto de procedimientos internos de reclamación mediante los cuales se pueda examinar dentro de cada organismo los presuntos quebrantamientos del Código. También se requiere de los organismos que informen anualmente al Comisionado para las Normas del Sector Público sobre el cumplimiento del respectivo Código de Conducta y muestren qué medidas se han adoptado para fomentar entre sus empleados la conciencia de la existencia del Código e impartirles educación y capacitación a su respecto.

24. La parte VI A de la Ley de Relaciones Laborales de 1979 tipifica como delito el discriminar contra una persona en razón de su pertenencia o no pertenencia a una organización. Se prevén penas para las siguientes acciones cuando éstas se basan en la pertenencia o no pertenencia de una persona a una organización: negarse a emplear a una persona; negarse a utilizar o a acordar utilizar los servicios ofrecidos por una persona; negarse a suministrar o a acordar suministrar bienes y servicios a una persona.

25. El artículo 70 de la Ley de Acuerdos en el Lugar de Trabajo de 1993 tipifica como delito que un empleador despida a un empleado; modifique la situación de un empleado en perjuicio suyo; se niegue a ascender o dañe de otro modo a un empleado, cuando éste rehusa aceptar un acuerdo. El artículo 71 tipifica como delito el que alguna persona cause un perjuicio a los empleados basándose en que sean o no partes en un acuerdo en el lugar de trabajo.

Victoria

26. Victoria ha emprendido una gran iniciativa política en forma de un proyecto, el Proyecto de Seguridad Económica, orientado a sensibilizar a las mujeres ante la necesidad de proveer a su propia seguridad económica. Esta iniciativa nació visto el alto grado de dependencia de las mujeres de los beneficios de la seguridad social, particularmente en la vejez. Aunque la mujer parece actualmente considerarse socialmente "igual" al hombre, las investigaciones efectuadas en Victoria apoyan la tesis de que las mujeres siguen poniendo en primer lugar las responsabilidades familiares y sus relaciones al adoptar decisiones sobre su futuro financiero. La campaña está en marcha y un primer paso fue la publicación de un resumen de las conclusiones de la investigación señaladas a la atención de los proveedores de servicios financieros.

Nueva Gales del Sur

27. En 1997, el Gobierno de Nueva Gales del Sur (NGS) publicó su Declaración de Compromiso con el Pueblo Aborigen. En esa Declaración, el Gobierno reconoció que el desarrollo económico es un paso importante en el camino de la autodeterminación y se comprometió a mejorar los servicios de asesoramiento empresarial para las pequeñas empresas aborígenes, ayudar a las empresas a entrar en los servicios turísticos, trabajar con eCommonwealth y con otros niveles de gobierno para mejorar las oportunidades de empleo, y aumentar las oportunidades de empleo de aborígenes en el Gobierno de NGS. El Gobierno emitió además un documento sobre el empleo con nuevas estrategias para aumentar el de los aborígenes y fomentar el desarrollo de sus empresas.

28. La Ley de Derechos Aborígenes sobre la Tierra estableció consejos de tierras elegidos por aborígenes, encargados de adquirir tierras, facilitar alojamiento y negociar la restitución de los parques nacionales a los aborígenes. La Ley de Modificación del Régimen de los Parques Nacionales y la Vida Salvaje (Propiedad Aborigen) prevé un proceso por el cual ciertas tierras que figuran en listas como de importancia cultural para los aborígenes podrán transferirse a los Consejos de Tierras aborígenes, para arrendarlos luego al Gobierno de NGS para que los destine a parques. Prevé también un papel permanente de los dueños tradicionales en la gestión de esos parques.

29. En la esfera de los servicios sanitarios, la tendencia es fomentar la participación aborigen en la concepción y la prestación de los servicios. El Gobierno de NGS ha celebrado un acuerdo de asociación con la Cooperativa Aborigen de Recursos Sanitarios de NGS que reconoce los principios de autodeterminación, un enfoque participativo y la colaboración intersectorial. El acuerdo considera que la Cooperativa y al Gobierno de NGS están asociados para el mejoramiento de la sanidad aborigen y que la función de la asociación es aumentar y apoyar el control de la comunidad aborigen en la prestación de servicios sanitarios.

Artículo 3

El derecho de hombres y mujeres al goce de iguales derechos

30. Está subsumido en el análisis del artículo 2.

Artículo 6

El derecho al trabajo

31. Conforme al Acuerdo sobre la Autoridad Nacional Australiana de Formación Profesional (ANTA) entre el Commonwealth y los gobiernos de los estados y territorios, se creó en 1992 un sistema cooperativo nacional de Educación y Formación Profesional (VET). El sistema lo integran la Autoridad Nacional Australiana de Formación (ANTA) y los gobiernos de Commonwealth y de los estados y territorios. Objetivo clave del Acuerdo sobre la ANTA es velar por que todos los australianos, incluidos los grupos desfavorecidos, tengan acceso a una formación que alcance resultados de alta calidad y conduzca en definitiva al empleo.

32. Los gobiernos de los estados y los territorios aportan el grueso de la financiación del sistema VET. El Commonwealth proporciona financiación a los estados y territorios por conducto de la ANTA. Los estados y territorios distribuyen la financiación entre los proveedores del VET, que pueden ser Institutos de Educación Técnica y Postecolar de carácter público, organizaciones de educación de adultos y comunidades y organizaciones de formación profesional del sector privado. Los programas de formación para personas sin empleo e inmigrantes recientes son financiados y administrados directamente por el Commonwealth, el cual además alienta con pagos incentivos a los empleadores a que contraten aprendices y capacitandos.

33. En 1998 se pondrá en funcionamiento un nuevo Marco Nacional de la Formación Profesional. El Marco proporcionará mecanismos simplificados de seguro de calidad y tiene por fin lograr el registro reconocido en el plano nacional de las organizaciones de formación profesional, el reconocimiento recíproco de la formación profesional en toda Australia y un sistema más flexible para impartir la formación.

34. Más de un millón de australianos participan cada año en el sistema de formación profesional. Clientes de ambos sexos se apuntan a los programas de VET, de todos los grupos de edad y con diversos antecedentes socioeconómicos y culturales. Las organizaciones dedicadas a la formación ofrecen una amplia gama de programas de formación profesional para empleos comerciales, técnicos, profesionales y paraprofesionales, así como de educación para adultos (incluidas lectura y escritura y aritmética elemental) y formación preparatoria.

35. La Estrategia Nacional de Educación y Formación Profesional, definida mediante acuerdo entre el Commonwealth y los gobiernos de estados y territorios, fija las metas y estrategias a largo plazo para el sector de la VET. Éstas comprenden una gama de medidas de equidad para garantizar que los grupos desfavorecidos puedan acceder más fácilmente, elegir con más amplitud y conseguir mejores resultados.

36. La Estrategia Nacional de Educación y Formación Profesional de la Mujer se estableció igualmente mediante acuerdo entre el Commonwealth y los gobiernos de los estados y territorios. Prevé una estrategia nacional para los gobiernos, la industria y los proveedores de VET hasta el año 2000. La finalidad de esa estrategia es garantizar que las necesidades de la mujer se tengan constantemente en cuenta como cuestión prioritaria en la elaboración de políticas, la planificación, el aprovechamiento de recursos, la ejecución y la

vigilancia. Comprende iniciativas para eliminar la discriminación indirecta contra la mujer en el sector de la VET y crear un entorno de aprendizaje que sirva de apoyo para todas las mujeres.

37. Se han realizado reformas para modernizar el sistema de aprendizaje y formación profesional. El objetivo es adecuarlo mejor a las necesidades de la industria y los destinatarios. Se están creando más oportunidades mediante nuevos acuerdos flexibles y la ampliación de los aprendizajes y formaciones en zonas con limitada formación estructurada, como también en nuevas industrias.

38. Además de los diversos programas en el plano de los estados y territorios, hay varias iniciativas en el plano nacional dirigidas a mejorar la participación de los desfavorecidos. Entre los programas nacionales figuran la formación preprofesional para personas desfavorecidas en el mercado de trabajo, actividades para fomentar carreras no tradicionales entre las muchachas que asisten a escuelas secundarias, la investigación para desarrollar modelos de capacitación según las mejores prácticas e incentivos a los empleadores para que contraten a personas desfavorecidas. Por ejemplo, el Programa de Idioma Inglés y Alfabetización en el Lugar de Trabajo proporciona a los trabajadores formación en el idioma inglés y alfabetización. El Programa de Apoyo a los Salarios de los Aprendices con Discapacidades facilita apoyo financiero a los empleadores que contratan a un aprendiz o a un capacitando afectado de una discapacidad.

39. El sistema nacional de Educación y Formación Profesional (VET) funciona en el marco de un Acuerdo entre el Commonwealth y los estados y territorios. Uno de los objetivos centrales de este Acuerdo es mejorar la participación y los resultados de grupos específicos de destinatarios, como las personas con discapacidades. Dentro de estos planes, el Commonwealth proporciona financiación a la Autoridad Nacional Australiana de Formación Profesional (ANTA) para que la distribuya entre los estados y territorios y administre los programas nacionales. Los estados y territorios se encargan de impartir la VET dentro de sus límites y ellos financiado toda una gama de iniciativas para asistir a las personas con discapacidades.

40. La ANTA administra varios proyectos nacionales para asistir a personas discapacitadas, inclusive la Estrategia de Demostración de Medidas Equitativas del Rendimiento, que procura mejorar la participación y los resultados de la formación para grupos infrarrepresentados en la formación y/o el empleo. Entre los proyectos financiados en el marco de esta Estrategia figuran: un programa de formación en cuidados infantiles para niños sordos o con deficiencias auditivas (NGS); un modelo de apoyo a la formación y el empleo en los servicios agrícolas, mineros, turísticos, hospitalarios y comunitarios (Vic) para personas con una discapacidad; un programa de formación preprofesional acreditado para personas con una discapacidad física o sensorial (Vic); intermediación y apoyo en materia de formación para personas con discapacidades respecto del comercio al por menor, el turismo y los hospitales (Tas); el desarrollo y prestación de un módulo complementario acreditado de formación de los formadores y paquete de recursos para el personal que trabaja en los talleres con personas afectadas de una discapacidad (ACT); y la definición de hasta qué punto se necesitan programas de educación y formación profesional para personal que trabaje con personas sordas y/o ciegas (Vic). La ANTA ha creado además un Foro sobre la Discapacidad para prestar asesoramiento sobre las necesidades en materia de formación de personas con discapacidades.

41. El Departamento de Empleo, Educación, Formación Profesional y Asuntos de la Juventud del Commonwealth (DEETYA) financia diversos programas destinados a asistir a personas con discapacidades, entre ellos: el Programa de Apoyo a los Salarios de Aprendices con Discapacidades, que proporciona una subvención semanal a los salarios a aquellos empleadores que ocupen a una persona discapacitada para un aprendizaje oficialmente reconocido. La asistencia puede prolongarse durante todo el aprendizaje. Es posible obtener ayuda adicional para efectuar las modificaciones necesarias en el lugar de trabajo, arrendar equipo especial o contratar servicios de intérpretes; el Programa de Acceso, que facilita asistencia previa al aprendizaje y a la formación de personas desfavorecidas en el mercado de trabajo que necesitan una formación preliminar; y el Programa de Subvenciones para Proyectos de Formación Profesional, dirigido a apoyar a la industria y el desarrollo de paquetes de formación nacionales, integrados y flexibles.

42. Se han financiado, en el marco de este programa, las Becas de Aprendizaje de Gobiernos Locales de Australia para Jóvenes Muy Desfavorecidos y Personas con Discapacidades; un programa piloto y material didáctico desarrollado por la Endeavour Foundation con el fin de introducir en sus Dependencias de Servicios Empresariales una formación en el lugar de trabajo acreditada para adultos intelectualmente discapacitados; y un proyecto para desarrollar, adaptar y transcribir el Aprendizaje del Apoyo a los Usuarios de Comunicaciones utilizando tecnología adaptativa (Braille, cintas audio y materiales en letra grande) con miras a facilitar la participación de mujeres con deficiencias visuales en los cursos de formación y aprendizaje del Territorio de la Capital de Australia.

43. El DEETYA trabaja también en el desarrollo de normas sobre educación (incluida la educación y formación profesional) con referencia a la Ley sobre la Discriminación por Discapacidad de 1992. Tras celebrar consultas, los ministros encargados de la formación profesional y la educación del Commonwealth, los estados y los territorios examinarán la viabilidad y conveniencia de unas normas sobre la discapacidad en la educación conforme a la Ley sobre la Discriminación por Discapacidad.

Desocupación de los indígenas

44. La tasa de desempleo del grupo de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres fue, en 1991 (los datos más recientes de que se dispone) del 38 por ciento, en comparación con el 9 por ciento para los Australianos en general (véanse los apéndices 28 y 29). Si se excluyen los empleos, predominantemente a tiempo parcial, en el marco del Plan de Proyectos de Empleo en el Desarrollo de la Comunidad (CDEP), financiado por el Commonwealth-forma de trabajo subvencionado exclusiva de los indígenas Australianos- la tasa de desempleo sería de alrededor del 50 por ciento. En cuanto a los que están empleados fuera de los CDEP, se da una excesiva dependencia del sector público, que hace vulnerable al grupo indígena en momentos en que se producen apreciables cambios en ese sector. Los Australianos indígenas autoempleados representaban en 1994 menos del 2 por ciento de la población indígena en edad de trabajar, es decir, menos que la cuarta parte de la tasa para el resto de los Australianos.

45. La población indígena aumenta a una tasa del 3 por ciento, el doble de la correspondiente al resto de la población Australiana. Se plantea la importante necesidad de concebir políticas que, como mínimo, mantengan la situación actual

del grupo en la fuerza de trabajo y sus efectos al cabo del tiempo sobre la disparidad con las circunstancias económicas de los australianos en general.

46. La respuesta del Commonwealth es aumentar la financiación de la educación indígena, concentrándose en el mejoramiento de los resultados en materia de educación, como factor clave para lograr también mejores resultados en materia de empleo. Las reformas de los servicios de empleo que se introducirán en mayo de 1998, contendrán disposiciones especiales para asegurar que los indígenas reciban una participación equitativa en los servicios, prestados de maneras culturalmente apropiadas. El DEETYA continuará ofreciendo el programa de capacitación para aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, como complemento de las nuevas disposiciones sobre servicios de empleo basados en el mercado.

Medidas en el lugar de trabajo referentes a la productividad

47. El período de 1987-1996 registró un marcado desplazamiento del centro del sistema de relaciones laborales, de la fijación centralizada de los salarios hacia la mucho mayor importancia otorgada a la negociación en los planos del lugar de trabajo o de la empresa. Este desplazamiento reflejaba el amplio apoyo que merecía a las partes en aquellas relaciones la necesidad de enfocar la productividad en el lugar de trabajo, en el contexto de mejorar el rendimiento la industria, al quedar la economía australiana cada vez más expuesta a la competencia internacional. A finales del decenio de 1980, el principal punto de atención era conseguir una mayor flexibilidad en la aplicación de los laudos laudos laborales, tanto en el plano de toda una actividad como en el de cada lugar de trabajo, en particular mediante el proceso de reestructuración de esos laudos. No obstante, a principios del decenio de 1990, el centro de la atención se ha desplazado hacia el estímulo de la negociación en el plano de las empresas.

48. El marco de relaciones laborales introducido por la Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo de 1996 tiende a otorgar la responsabilidad primordial en las relaciones laborales a empleadores y empleados en los planos de la empresa y del lugar de trabajo. Esto brindará a las empresas la oportunidad de diseñar mecanismos que mejorarán su productividad y competitividad y resultarán en mayores remuneraciones para sus empleados. En el plano macroeconómico, apoyará al crecimiento económico y, por lo tanto, al crecimiento del empleo y el aumento de los niveles de vida. En la guía de legislación Cambios en la Ley Federal de Relaciones en el Lugar de Trabajo, se dan más detalles sobre el nuevo marco para las relaciones laborales. Se adjunta copia de la misma en el apéndice 102.

Disposiciones que garantizan la libertad de elección de empleo

49. La Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo de 1996 contiene varias disposiciones basadas en los principios de libertad de elección y libertad de asociación, y en el principio de que todos los australianos deben ser iguales ante la ley. Se resumen en las páginas 29 y 30 de la guía de legislación adjunta.

50. Estas disposiciones tienen también su reflejo en los estados. Por ejemplo, conforme a la Ley de Relaciones Laborales y del Empleo de Australia del Sur, que entró en vigor el 8 de agosto de 1994, todos los empleados y empleadores pueden elegir libremente hacerse o permanecer siendo miembros de un sindicato o

asociación. La afiliación obligatoria a un sindicato, impuesta a los empleados por un empleador o un sindicato, está actualmente prohibida.

51. Australia ha ratificado además el Convenio 111 de la OIT, sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación, de 1958. Sírvanse remitirse al informe del Gobierno a la OIT sobre este Convenio, presentado en 1991.

52. Australia ha ratificado igualmente el Convenio N° 142 de la OIT, sobre desarrollo de los recursos humanos, de 1985. Sírvanse remitirse al informe del Gobierno a la OIT sobre este Convenio, presentado en 1996. Los principales casos en que una distinción, exclusión o preferencia basada en alguna de las antes mencionadas condiciones no se considera discriminación en Australia se refieren a los requisitos inherentes a un empleo en particular. Conforme a la Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo de 1996, hay dos esferas en que los requisitos inherentes a un puesto eximen de las prescripciones legales contra la discriminación. Respecto de los acuerdos certificados, quedan exentas de la prohibición general contra la discriminación contenida en el artículo 170 LU (6) la discriminación basada en los requisitos inherentes al empleo, la discriminación en relación con el empleo en una institución religiosa o la discriminación de buena fe para evitar herir las susceptibilidades religiosas de un candidato. El artículo 170 CK (4) extiende al cese en el empleo la excepción de discriminación basada en los requisitos inherentes al puesto. (Véanse los apéndices 13 a 31 para información complementaria sobre la protección de este derecho.)

Aportaciones específicas de los estados: Australia Occidental

53. La protección de los derechos laborales individuales es un componente importante del sistema de relaciones laborales de Australia Occidental. La parte VI A de la Ley de Relaciones Laborales de 1979 consagra la libertad de asociación de los individuos. En Australia Occidental, constituye delito exigir de los trabajadores que se afilien o no que se afilien a una organización. La Ley pone fuera de la ley en Australia Occidental los "talleres cerrados". El artículo 96 de la Ley prohíbe que una persona emplee o deje de emplear a otra por estar o no afiliada a una organización. Para proteger aún más los intereses de los trabajadores, la Ley establece que se efectúen votaciones secretas durante ciertas formas prescritas de conflictos laborales. Cada uno de los trabajadores puede votar sin miedo a la intimidación sobre si hay o no que hacer huelga.

Australia del Sur

54. El Gobierno de Australia del Sur ha respondido a los niveles permanentemente elevados de desocupación juvenil en el Estado mediante una serie de iniciativas orientadas a ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo. En tres años, se han asignado casi 30 millones de fondos del Estado y de Commonwealth a una Estrategia del Empleo Juvenil. En términos más generales, se ha adoptado un enfoque oficial coordinado para elevar al máximo las oportunidades de empleo, con el fin de garantizar el acceso a esas oportunidades a personas de todas las edades. Se trata con ello también de eliminar la innecesaria duplicación de actividades que se presenta en otros niveles de gobierno.

55. Conforme a la Ley de Igualdad de Oportunidades de 1985 de Australia del Sur, se permite la discriminación en el empleo por razones de sexo cuando un sexo determinado constituye un legítimo requisito ocupacional. Análogamente, se permite la discriminación en razón de la edad. La discriminación por motivos de sexualidad es admisible en instituciones educativas u otras administradas de conformidad con los preceptos de una religión determinada.

Artículo 7

El derecho a condiciones de trabajo satisfactorias

56. Australia ha ratificado el Convenio N° 131 de la OIT, sobre la fijación de salarios mínimos, de 1970. Sírvanse remitirse al informe de Australia a la OIT sobre este Convenio, presentado en 1997.

57. La negociación y la celebración de acuerdos en el plano de la empresa son actualmente los principales medios para fijar salarios en Australia. Los "laudos" legalmente exigibles que dictan los tribunales laborales federales y estatales al resolver conflictos laborales ofrecen una red de seguridad de salarios mínimos. Hay muchos laudos federales y estatales que especifican salarios mínimos y condiciones para el empleo según las diversas clasificaciones ocupacionales de los sectores industriales.

58. Más recientemente, ha aumentado la tendencia hacia la negociación y la celebración de acuerdos, en el nuevo marco legislativo de la Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo de 1996. La Comisión Australiana de Relaciones Laborales (AIRC) ejercita sus facultades de conciliación y arbitraje conforme a esta Ley. Las principales características de la Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo de 1996, pertinentes a la fijación de salarios, son las siguientes:

- mantener el sistema de laudos para proporcionar una red de seguridad de salarios y condiciones mínimas equitativos periódicamente ajustados con arreglo a los criterios especificados en la Ley;
- velar por que los laudos se centren únicamente en los mínimos. Los salarios y condiciones reales deben determinarse, en la medida de lo posible, mediante acuerdo en el lugar de trabajo o la empresa;
- proporcionar un margen de elección y flexibilidad efectivos para la consecución de acuerdos colectivos e individuales que fijen salarios por encima del mínimo del laudo;
- circunscribir la función arbitral de la AIRC, con el fin de evitar una interacción inapropiada entre los acuerdos y los laudos y el riesgo conexo de inestabilidad salarial; y
- la necesidad de fomentar una relación más directa entre empleadores y empleados reservando una función muy reducida a la intervención de terceros no invitados.

59. La legislación de Australia del Sur sobre relaciones laborales y con los empleados creó en 1994 la primera Oficina del Defensor del Empleado de Australia para, entre otras cosas, ayudar a los empleados en la negociación laboral y someter a examen las propuestas de acuerdos de empresa.

Un sistema de salarios mínimos

60. Como antes se indicó, el sistema de laudos es el mecanismo clave para garantizar que se pague a los asalariados australianos por lo menos un salario mínimo. Los últimos datos (agosto de 1996) indican que el 80 por ciento del total de los empleados están cubiertos por laudos (un 41 por ciento de laudos federales y un 39 de laudos estatales).

61. La principal excepción al sistema de laudos se presenta en el estado de Victoria. Victoria abolió el sistema de laudos estatales en 1993 y lo sustituyó con salarios y condiciones de empleo mínimos fijados por ley. Se estableció un nuevo tribunal laboral, la Comisión de Relaciones con el Empleado de Victoria, para gestionar el sistema de salarios mínimos. Desde 1996 la AIRC se ha encargado de ajustar los salarios mínimos de Victoria.

62. Los laudos de los tribunales laborales son ejecutivos. La Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo de 1996 requiere que la AIRC vele por el establecimiento y mantenimiento de laudos que proporcionen una red de seguridad en materia de salarios y condiciones de trabajo mínimos, habida cuenta de:

- la necesidad de proporcionar normas mínimas equitativas a los empleados en el contexto de los niveles de vida que predominan en general en la comunidad australiana;
- factores económicos, inclusive niveles de productividad e inflación, y la conveniencia de alcanzar un alto nivel de empleo;
- al ajustar la red de seguridad, las necesidades de los que reciben menores pagas; y
- la necesidad de estimular la celebración de acuerdos entre empleadores y empleados en los planos del lugar de trabajo y la empresa.

63. En abril de 1997, de conformidad con estos requisitos, la AIRC abrió la vía para que se aumentaran en diez dólares todos los salarios mínimos de los laudos (todas las referencias a cantidades de dinero en el presente informe están expresadas en dólares australianos). El aumento de diez dólares puede compensarse con cualquiera de las pagas por encima del laudo. La AIRC introdujo también un salario mínimo federal general de 359,40 dólares (incluido el aumento de diez dólares). Esto indica que ninguna salario laudado puede establecer una cantidad menor. El salario mínimo federal se aplica proporcionalmente a los empleados jóvenes, a tiempo parcial o eventuales. La próxima revisión de las tarifas salariales mínimas de los laudos se producirá durante 1998.

64. Desde la transferencia de determinadas facultades de Victoria en materia de relaciones laborales al Gobierno Federal, no se ha producido en ese Estado ningún ajuste de salarios mínimos. La AIRC examina actualmente la solicitud de que se aumenten esos salarios en Victoria.

65. Como antes se expresó en términos generales, la AIRC debe tener presentes las necesidades de quienes perciben salarios bajos y otras consideraciones económicas al ajustar la red de seguridad de laudos. La ponderación por la AIRC

de esos factores concurrentes se determina a la luz de las circunstancias económicas, sociales y laborales que predominan en el momento. La AIRC se ha negado a concretar un nivel específico para "las necesidades de quienes perciben salarios bajos" por varias razones, incluida la necesidad de evitar la expectativa de ajustes automáticos de las tarifas salariales resultantes de laudo.

66. Tal como se dijo anteriormente, la AIRC fija y ajusta los salarios mínimos del laudo conforme al sistema federal de relaciones laborales. Todos los Estados, excepto Victoria, tienen tribunales laborales que desempeñan funciones análogas en sus respectivos ámbitos de competencia. Como ya se observó, Victoria ha transferido algunas de sus facultades en materia de relaciones laborales al Commonwealth y la AIRC es competente para ajustar los salarios mínimos de ese Estado.

Niveles salariales medios

67. Los Emolumentos Medios Semanales en Horario Normal de Trabajo (AWOTE), estacionalmente ajustados, para empleados adultos a jornada completa fueron de 445 dólares en febrero de 1987, 587,50 dólares en febrero de 1992 y 708,70 dólares en febrero de 1997, lo que representa un aumento medio anual de los AWOTE durante los últimos cinco o diez años del 3,8 y el 4,8 por ciento respectivamente. Los Emolumentos Medios Semanales (AWE) para todos los empleados fueron de 394,60 dólares en agosto de 1987, 506,60 dólares en febrero de 1992 y 584,30 dólares en febrero de 1997, equivalentes a un crecimiento medio anual de los AWE durante los últimos cinco y diez años del 2,9 y el 4,0 por ciento, respectivamente. Esta información procede de la Oficina de Estadística de Australia (ABS). (Véanse los apéndices 36 y 37.)

68. No hay datos fácilmente disponibles de los niveles medios de los salarios mínimos de laudo. No obstante, se pueden estimar los movimientos en los salarios de laudo mediante el Índice de los Salarios Laudados (ARPI), producido por la ABS (catálogo No. 6312.0, apéndice 33). El ARPI contiene índices de los salarios mínimos de laudo medios semanales y por horas de adultos asalariados empleados a jornada completa. Estos índices se elaboran ponderando los salarios de laudo para determinadas clasificaciones, de acuerdo con la pauta de cobertura de los empleados existente en mayo de 1985.

69. Según las series del ARPI, los salarios mínimos de laudo medios aumentaron en una tasa anual del 1,6 por ciento durante los cinco años hasta febrero de 1997, y en un 3,1 por ciento durante los diez años transcurridos hasta junio de 1997.

70. El Índice de Precios al Consumo (IPC) calculado por la ABS (Nº de catálogo 6401.0, apéndices 61a-d)) se utiliza a menudo para valorar los cambios del costo de la vida. El IPC mide los cambios trimestrales del precio de una cesta de bienes y servicios que representa una alta proporción del gasto de los hogares de asalariados metropolitanos. El IPC aumentó en un 2,2 por ciento anual durante los cinco años hasta el trimestre de septiembre de 1997, y en un 3,6 por ciento anual durante los diez años transcurridos hasta el trimestre de septiembre de 1997.

71. En términos reales (utilizando el IPC como deflador) los AWOTE aumentaron en 1,6 por ciento y 1,1 por ciento anual, mientras que los AWE crecieron un 0,7 por ciento y 0,4 por ciento anual durante los cinco años hasta febrero de 1997 y los diez años hasta febrero de 1997, respectivamente. En términos reales la serie del ARPI disminuyó un 0,7 por ciento y un 0,7 por ciento, respectivamente, durante estos dos períodos. Sin embargo, aunque los salarios de laudo reales han disminuido durante los últimos cinco y diez años, los emolumentos medios reales para los empleados peor pagados han estado aumentando desde principios del decenio de 1990. De acuerdo con el Estudio de los Emolumentos y Horas de Trabajo de los Empleados, de la ABS (No. de catálogo 6306.0), los emolumentos semanales medios reales para empleados adultos a jornada completa no directivos en el primer decil, aumentó en un 3,7 por ciento de mayo de 1991 a mayo de 1996, en comparación con un aumento del 5,4 por ciento en el segundo decil.

72. Los cambios de los salarios reales deben verse también en el contexto de apreciables adelantos producidos durante los últimos 15 años en el sistema de seguridad y bienestar social del país, entre los que figura una amplia gama de beneficios dinerarios y no dinerarios proporcionados por el Gobierno. Entre los ejemplos importantes de pagos en dinero se cuentan los beneficios de desempleo, la pensión por razones de edad y los pagos por razones familiares. Entre los beneficios no dinerarios figura el seguro médico y el sistema sanitario, el apoyo público para la educación, el alojamiento y el cuidado de los niños. Estos beneficios directos e indirectos aportan una contribución apreciable a los niveles de vida medios.

73. El sistema de salarios mínimos se supervisa eficazmente en Australia. Sírvanse remitirse al informe de Australia acerca del Convenio No. 81 de la OIT, sobre la inspección del trabajo, de 1947, que ofrece una descripción del proceso de inspección.

Igualdad de remuneración y condiciones de trabajo para la mujer

74. Australia ha ratificado el Convenio No. 100 de la OIT, sobre igualdad de remuneración, de 1951. Sírvanse remitirse al informe de Australia a la OIT sobre este Convenio, presentado en 1996.

75. En Australia, se paga a las mujeres el mismo salario por igual trabajo. Así ha ocurrido desde que la Comisión Australiana de Conciliación y Arbitraje (actualmente la Comisión Australiana de Relaciones Laborales) introdujo a principios del decenio de 1970 el principio de igualdad de paga por un trabajo de igual valor.

76. Los emolumentos reales de la mujer siguen siendo inferiores a los del hombre. Los datos trimestrales de febrero de 1997 indican que, con ajuste estacional, la relación entre mujeres y varones en cuanto a los emolumentos medios semanales en horario normal de trabajo (AWOTE) para adultos empleados a jornada completa era del 83,2 por ciento. La relación entre mujeres y varones respecto de los emolumentos medios totales por semana (incluidos los emolumentos por horas extraordinarias) para adultos empleados a jornada completa era del 79,3 por ciento Australian Bureau of Statistics Average Weekly Earnings, States and Australia, May 1997 N° de catálogo 6302.0). Varios factores influyen en las

discrepancias entre la paga de los hombres y la de las mujeres, como el hecho de que:

- las mujeres trabajan en general menos horas por semana en trabajos remunerados (los datos citados se refieren únicamente a los trabajadores a jornada completa);
- las mujeres trabajan menos horas extraordinarias;
- las mujeres tienden a estar empleadas en ocupaciones de nivel inferior a las de los hombres;
- las mujeres tienden a estar empleadas en industrias que pagan salarios inferiores; y
- la progresión de la carrera de las mujeres es mucho más probable que se vea interrumpida por la cría de hijos y otros cuidados.

77. El Informe Anual sobre Negociaciones de Empresa en Australia correspondiente a 1995, publicado por el Departamento de Relaciones Laborales en junio de 1996, mostraba un diferencial de únicamente el 0,1 por ciento entre los aumentos salariales para mujeres y hombres en acuerdos de empresa formalizados de alcance federal.

Medidas adoptadas para eliminar la discriminación

78. La Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo de 1996 contiene una serie de disposiciones referentes específicamente a la cuestión de la igualdad de paga. Estas disposiciones se examinan en el párrafo 165A del Informe de Aplicación de Australia a la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer: Plataforma de Acción, de abril de 1997. Otras disposiciones para hacer frente a la discriminación se esbozaron en los párrafos 165B, 165C y 178H de ese informe.

79. Conforme a la Ley de Relaciones Laborales y del Empleo de Australia del Sur de 1994, se ofrece protección contra la discriminación a los empleados que ejercitan la libertad de elección en cuanto a su pertenencia a un sindicato. Esta protección se aplica igualmente a sindicalistas y no sindicalistas. Además, las disposiciones de los laudos que conceden preferencia a los sindicatos son inválidas, de manera que todos los empleados pueden ejercitar la libertad de elección sin verse desfavorecidos en su empleo.

80. Entre las principales modificaciones a la Ley introducidas en 1997 figura una prohibición de decisiones discriminatorias de las empresas en el abastecimiento o la compra de bienes y servicios. La Ley había anteriormente prohibido la discriminación de las empresas en el suministro de bienes y servicios por razones de la afiliación a un sindicato o la falta de ésta de los empleados del proveedor. Constituye ahora un delito que una persona perteneciente a una empresa discrimine contra un empleado: rehusando el suministro o la compra de bienes o servicios o en las condiciones en las cuales se suministran o compran los bienes o servicios por el motivo de que los empleados del empleador sean o no miembros de una asociación.

81. El Organismo de Medidas Positivas es un órgano legal de nivel federal encargado de poner en práctica la Ley de Medidas Positivas (Igualdad de Oportunidades de Empleo para la Mujer) de 1986. Esta Ley comprende a los empleadores del sector privado con 100 o más empleados, incluidas las empresas privadas, universidades, escuelas y organizaciones comunitarias y los sindicatos obreros.

82. Se requiere de las organizaciones objeto de la Ley que desarrollen y pongan en práctica programas de medidas positivas para las mujeres e informen anualmente al Organismo sobre sus progresos. La Ley describe en líneas generales los campos en los que es necesario adoptar medidas para desarrollar programas de acción positiva.

83. Conforme a la Ley, estos campos son los siguientes, tal como se perfilan en el párrafo 1 del artículo 8:

a) La entrega a los empleados, por un funcionario superior miembro de la administración del empleador de que se trate, de una declaración en el sentido de que el empleador, de conformidad con esta Ley, ha empezado a desarrollar y poner en práctica un programa de medidas positivas en un día determinado, que es el día efectivo en relación con el empleador;

b) Encargar el desarrollo y la puesta en práctica del programa (incluido un examen permanente de éste) a una persona o a unas personas con facultades y nivel suficiente dentro de la administración del empleador de que se trate para permitir a la persona o personas desarrollar y poner en práctica correctamente el programa;

c) Consultar con cada sindicato cuyos miembros se vean afectados por la propuesta de desarrollo y puesta en práctica del programa, de conformidad con esta Ley;

d) Consultar con los empleados del empleador de que se trate, en particular con las empleadas;

e) Recoger y registrar estadísticas e información conexas referente al empleo por el empleador de que se trate, incluido el número de empleados de uno y otro sexo y los tipos de trabajo efectuados por los empleados de uno y otro sexo o una clasificación de esos trabajos;

f) Considerar políticas y examinar prácticas del empleador de que se trate, en relación con asuntos referentes al empleo, para concretar las políticas o prácticas que constituyan una discriminación contra la mujer y las pautas (determinadas estadísticamente o de otra manera) de la falta de igualdad de oportunidades respecto de las mujeres;

g) Fijar objetivos y hacer proyecciones de programa; y

h) Supervisar y evaluar la aplicación práctica del programa y evaluar el logro de esos objetivos y proyecciones.

84. En 1995 el Organismo de Medidas Positivas introdujo un nuevo tipo de informe. Este ha permitido al Organismo obtener una imagen más clara de la

igualdad de oportunidades para la mujer en los lugares de trabajo de Australia, planteando preguntas concretas sobre los criterios anteriormente mencionados. En particular, las preguntas relativas al apartado f) del párrafo 1 del artículo 8 examinan las políticas y prácticas del personal, incluido el ascenso de mujeres.

85. En 1996-1997, presentaron sus informes al Organismo 2.750 de las mayores organizaciones de Australia. Esto representa una parte apreciable de la industria australiana que comprende aproximadamente a 2.210.000 empleados. Según datos del Organismo, el 80,6 por ciento de estas organizaciones indicaron que tenían políticas y prácticas en vigor para asegurar la equidad en las oportunidades de ascenso y traslado.

86. La Ley de Medidas Positivas (Igualdad de Oportunidades de Empleo para la Mujer) de 1986, estipula que por "programa de medidas positivas", conforme al apartado a) del párrafo 1 del artículo 3, en relación con un empleador determinado, se entiende un programa destinado a garantizar que:

a) se adoptan las medidas correctas para eliminar la discriminación contra las mujeres, en relación con cuestiones de empleo, por el empleador de que se trate; y

b) el empleador de que se trate adopta medidas para fomentar la igualdad de oportunidades para la mujer en relación con el empleo.

87. En consecuencia, los empleadores responden del desarrollo y la ejecución de programas para eliminar toda desigualdad en las oportunidades de ascenso.

88. La Ley sobre Igualdad de Oportunidades de Empleo (Autoridades del Commonwealth) de 1987 expone los requisitos mínimos de los programas de igualdad de oportunidades que han de desarrollar y poner en práctica diversas autoridades federales creadas por ley (las que empleen a 40 o más personas). Disposiciones análogas en la Ley de la Función Pública de 1922 extienden estos requisitos a otros organismos del Gobierno Federal. Esta última Ley impone una obligación positiva a los Gobiernos Federales de poner en práctica programas de igualdad de oportunidades en beneficio de ciertos grupos en situación desventajosa, incluidos los protegidos por la Ley sobre la Discriminación por Razones de Sexo de 1984.

Descanso, tiempo libre y limitaciones razonables de las horas de trabajo

89. Australia ha ratificado el Convenio No. 47 de la OIT, sobre la semana de cuarenta horas, de 1935. Sírvanse remitirse al informe de Australia a la OIT sobre este Convenio, presentado en 1992. Los horarios de trabajo normales u ordinarios son prescritos en general por laudos y acuerdos federales y la legislación de los estados. Pero los horarios normales son fijados, generalmente, por los tribunales laborales. Actualmente, la semana normal real de trabajo para la gran mayoría de los trabajadores australianos varía entre las 35 y las 40 horas, según la industria.

90. Los tribunales laborales están facultados para modificar las horas de trabajo mediante un laudo o para una industria concreta. Los laudos y acuerdos federales y estatales se ocupan igualmente de otros aspectos del tiempo del empleo. Figuran entre ellos, los pagos por horas extraordinarias, el trabajo por

turnos, las interrupciones para comer y los períodos de descanso, los días libres programados, las permanencias a disposición y los reintegros al trabajo, el trabajo en fin de semana, el trabajo ilícito y el tiempo de viaje hasta el lugar de trabajo. A este respecto, los acuerdos de empresa tienden a ser más flexibles que los laudos.

91. Los parlamentos de los estados pueden promulgar leyes que regulen las horas de los empleados que trabajen en ese estado (incluidos los no comprendidos en un laudo).

92. En agosto de 1997 se hicieron una serie de importantes modificaciones de la Ley de Relaciones Laborales y del Empleo de 1994 de Australia del Sur. Para contribuir al objetivo del Gobierno de ese Estado de que el sistema de relaciones en el lugar de trabajo funcione de manera compatible con el sistema federal, la Ley contiene ahora un objetivo específico de alentar y asistir a los empleados para que equilibren su trabajo y sus responsabilidades familiares de manera eficaz mediante el desarrollo de prácticas de trabajo mutuamente beneficiosas respecto de los empleadores.

93. La incorporación de este objetivo es de importancia, porque proporciona a las autoridades laborales como la Comisión de Relaciones Laborales de Australia del Sur y el Defensor del Empleado de Australia del Sur, pruebas de la intención legislativa de estimular la innovación en asuntos laborales y de familia.

Vacaciones periódicas pagadas

94. Las vacaciones anuales suelen ser de cuatro semanas de licencia pagada, que los empleados se toman en uno o más períodos, aunque muchos laudos y acuerdos prevén derechos adicionales a vacaciones para los empleados por turnos y los que trabajan en lugares alejados. La acumulación de vacaciones es una disposición de los laudos que concede una paga adicional al empleado que tome vacaciones acumuladas (por lo común un 17,5 por ciento por encima del período de vacaciones).

95. Los empleados suelen tener derecho a entre 10 y 12 días festivos oficiales pagados al año. Por lo común, el pago de esos feriados a los trabajadores permanentes se fija en los laudos laborales. También pueden preverse sistemas de sustitución que permitan a los empleadores disminuir los efectos perturbadores de los feriados oficiales sobre su trabajo. Los sistemas de sustitución consisten generalmente en establecer un día sustitutivo cuando un día de fiesta cae en sábado o en domingo.

96. Cuando los empleados están contratados con carácter eventual, los laudos y acuerdos suelen prever una cantidad adicional de paga acumulada en sustitución, entre otras cosas, de no haber gozado de vacaciones anuales ni de licencia por enfermedad.

97. Se estima que más del 20 por ciento de los obreros y empleados no están cubiertos por laudos laborales. Se trata principalmente de empleados de dirección o a sueldo. La legislación de los estados garantiza por lo común los derechos a las vacaciones pagadas y a los días feriados oficiales y limita el máximo de horas normales que se puede trabajar. En cuanto a los empleados de

dirección o a sueldo, su contrato de empleo particular puede especificar los derechos a las horas fijadas, las vacaciones anuales y los feriados.

Cambios ocurridos durante el período a que se refiere el informe

98. El Gobierno Federal está impedido por la Constitución de legislar directamente sobre condiciones concretas de empleo, como las horas de trabajo, las vacaciones anuales y los feriados oficiales, para quienes no son sus propios empleados. Ha introducido, no obstante, cierta flexibilidad en el sistema federal de relaciones laborales. Esto ha permitido a empleadores y empleados modificar mediante acuerdo las condiciones normales del laudo. La legislación sobre relaciones laborales ha sido modificada para permitir la celebración de acuerdos colectivos no sindicales y de acuerdos individuales, así como para el reconocimiento de acuerdos officiosos.

99. En todos los casos de concertación formal, ya se trate de convenios colectivos sindicales o no sindicales o de acuerdos individuales, el empleador y los empleados pueden modificar las condiciones de los laudos laborales para cambiar las condiciones de empleo en el lugar de trabajo. Esto está sometido a un examen para que no resulte globalmente desventajoso. Significa que esos acuerdos pueden perjudicar a los empleados en relación con condiciones y cláusulas concretas de empleo siempre que, en conjunto, sus condiciones generales no empeoren. Existe actualmente una serie de acuerdos de lugares de trabajo que han modificado las disposiciones sobre la manera de regular las horas de trabajo, las vacaciones anuales y los feriados oficiales con miras a lograr mejores resultados en la productividad. Los gobiernos de los estados han introducido o piensan introducir reformas análogas en su legislación, aplicables a la celebración de acuerdos dentro de sus sistemas de relaciones laborales en el plano estatal.

100. Durante el período objeto del informe, el Gobierno del Estado de Victoria redujo el número de feriados oficiales y modificó los acuerdos para la observancia de feriados sustitutivos en ese Estado. Esto llegó a la introducción de una nueva norma por vía de laudo federal que prevé un mínimo de 11 feriados oficiales al año y la observancia de días sustitutivos. (Véanse los apéndices 32 a 37 para información complementaria sobre la protección de este derecho.)

Aportaciones específicas de los estados: Australia del Sur

101. Con objeto de proporcionar más flexibilidad a empleadores y empleados del sector privado, se modificó en 1997 la Ley de Vacaciones por Servicios Prolongados de 1987 de Australia del Sur para permitir que se celebren acuerdos individuales sobre: cobrar en dinero las vacaciones por servicios prolongados; diferir las vacaciones por servicios prolongados; conceder unas vacaciones por servicios prolongados con menos de 60 días de preaviso; y tomarse las vacaciones por servicios prolongados antes de la adquisición del derecho.

102. En Australia del Sur, la tendencia a celebrar negociaciones en el plano de las empresas se aceleró con la promulgación, en agosto de 1994, de la Ley de Relaciones Laborales y del Empleo. La Ley prevé la celebración de un acuerdo de empresa con un grupo de empleados, estén éstos o no sindicados. Conforme al sistema, todos los empleados están protegidos por una red de seguridad de condiciones de empleo mínimas. Además de dar ocasión a introducir cambios en

relación con los salarios, las condiciones de trabajo y las medidas para mejorar la productividad, como solución alternativa a los laudos para toda una industria, los acuerdos de empresa prevén además la oportunidad de reconocer los múltiples acuerdos officiosos existentes en los lugares de trabajo.

103. Esta Ley creó, asimismo, la primera Oficina del Defensor del Empleado de Australia. La finalidad del Defensor del Empleado es: ayudar a los empleados en la negociación laboral; asesorar a los empleados sobre derechos y obligaciones laborales; investigar las quejas de los empleados y los sindicatos; examinar los acuerdos de empresa propuestos; y asistir y asesorar a los empleados con base en su casa y a los trabajadores externos.

Australia Occidental

104. La Ley de Condiciones Mínimas de Empleo de 1993 otorga a todos los trabajadores de Australia Occidental un conjunto de condiciones mínimas que comprende derechos como: vacaciones anuales, licencia por enfermedad, licencia por pérdidas familiares, feriados públicos, licencia de paternidad y maternidad y un salario mínimo. Se trata sólo de condiciones mínimas. Los diversos empleadores y empleados son libres de negociar salarios superiores y vacaciones más extensas. El Gobierno de Australia Occidental examina anualmente los salarios mínimos y los ajusta en consecuencia.

105. La Ley de Acuerdos en el Lugar de Trabajo de 1993 brinda a empleadores y trabajadores la oportunidad de negociar acuerdos sobre el empleo orientados a satisfacer las necesidades de las partes en cada lugar de trabajo. Estos acuerdos, respaldados por la Ley de Condiciones Mínimas de Empleo de 1993, pueden negociarse directamente entre empleadores y trabajadores o mediante los representantes que hayan elegido. Si las partes prefieren actuar mediante representantes, la Ley exige que cada parte reconozca al representante elegido por la otra.

106. La Ley de Relaciones Laborales de 1979 prevé igualmente laudos y acuerdos laborales que especifiquen condiciones de trabajo y derechos en algunas industrias. Los laudos dejan de aplicarse a los individuos o grupos cubiertos por un acuerdo de lugar de trabajo registrado. (Véanse los apéndices 38 y 39 para información complementaria sobre la protección de este derecho.)

Artículo 8

El derecho a sindicarse y a fundar sindicatos

107. Australia ha ratificado el Convenio No. 87 de la OIT, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, de 1948. (Remítanse al informe de Australia a la OIT sobre este Convenio, presentado en 1996). Para poder registrarse conforme a los sistemas federales de relaciones laborales, un sindicato debe satisfacer ciertos requisitos legales de carácter formal. Por ejemplo, el sindicato ha de contar por lo menos con 50 miembros y estar libre de la influencia del empleador. Más adelante se dan más detalles. Cabe observar que, si bien el registro en el marco del sistema federal confiere ciertos beneficios, no es obligatorio ni constituye un requisito previo a la formación o al funcionamiento de un sindicato.

108. Para afiliarse a una organización de empleados registrada conforme a la Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo de 1996, la persona debe poder ser miembro, con arreglo a las normas de afiliación de la organización, y pagar las cuotas requeridas de los miembros de esa organización. No hay disposiciones legales especiales acerca de la creación de sindicatos por categorías particulares de trabajadores.

109. La Ley contiene amplias disposiciones sobre la libertad de asociación (parte XA de la Ley). En las páginas 29 y 30 de la guía de legislación adjunta se dan detalles sobre estas disposiciones. No existen limitaciones legales ni prácticas al ejercicio del derecho de los sindicatos a federarse y afiliarse a las organizaciones sindicales internacionales. Todos los sindicatos son libres de crear federaciones y confederaciones y afiliarse a ellas. Todos los sindicatos, federaciones y confederaciones gozan además del derecho a afiliarse a las organizaciones sindicales internacionales. Por lo tanto, los gobiernos federal y de los estados no han considerado necesario adoptar medidas legislativas o de otra índole para conferir ese derecho a los sindicatos.

Restricciones del libre funcionamiento de los sindicatos

110. Como ya se dijo, un sindicato que desee registrarse en el marco del sistema federal de relaciones laborales debe llenar ciertos requisitos fijados por la ley. Sin embargo, el registro es voluntario y no constituye condición previa para la formación o el funcionamiento de un sindicato.

111. En términos generales, los requisitos previos legales para el registro en el marco del sistema federal de relaciones laborales exigen que un sindicato sea una organización de buena fe de empleados; tener un número mínimo de miembros (la Ley redujo el número de 100 a 50 miembros); y tener unos estatutos que prevean determinados asuntos como la elección democrática de los directivos, la gestión y el control de los asuntos financieros de la organización y las condiciones y cláusulas conforme a las cuales una persona puede convertirse en miembro de la organización o dejar de serlo.

112. La Ley introdujo disposiciones para el registro de "asociaciones de empresa", es decir, asociaciones de empleados con normas de afiliación referentes a la mayoría de los empleados de una empresa. El criterio para registrarse en sindicatos de empresa difiere de los que rigen para otros tipos de asociaciones de empleados. Las disposiciones de la Ley relativas a los sindicatos de empresa se resumen en la página 31 de la guía de legislación adjunta (apéndice 102).

113. Si bien la inscripción confiere ciertos beneficios o derechos a los sindicatos (por ejemplo, personalidad jurídica; legitimación a varios efectos para actuar ante la AIRC y el Tribunal Federal de Australia; capacidad legal para ser parte en laudos y acuerdos conforme a la Ley; un alto grado de protección del ámbito de actividades de la organización), acarrea ciertas responsabilidades u obligaciones. Estas obligaciones son: cumplimiento de ciertos requisitos legales destinados a garantizar el control democrático de las organizaciones por sus miembros y la protección de los intereses de éstos, y aceptación, sin perjuicio de los derechos legales a revisión y apelación, de las decisiones de la AIRC relativas a asuntos que afecten a la organización y a sus

miembros. El no cumplimiento de laudos y órdenes de la AIRC es motivo suficiente para procurar la cancelación del registro de una organización.

114. Estas responsabilidades u obligaciones pueden considerarse como limitaciones del derecho de los sindicatos a funcionar con libertad, pero se aplican únicamente a los sindicatos registrados y, como ya se ha indicado, la inscripción no es obligatoria.

Medidas adoptadas para fomentar la libre negociación colectiva

115. Australia ha ratificado el Convenio No. 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de 1949. (Véase el informe de Australia a la OIT sobre este Convenio, presentado en 1997.) La Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo de 1996 introdujo un nuevo marco que sirve de apoyo a una relación más directa entre empleadores y empleados. La Ley hace mayor hincapié en la negociación colectiva e individual, pero mantiene una red de seguridad de salarios y condiciones mínimos equitativos (que figuran en laudos emitidos por la AIRC).

116. El 30 de junio de 1997 había 46 organizaciones de empleados inscritas en el sistema federal con arreglo a la Ley. La publicación más reciente de estadísticas sindicales oficiales, titulada Trade Union Statistics, Australia preparada por la Oficina de Estadística de Australia (ABS), muestra que al 30 de junio de 1996, había en Australia 132 sindicatos. Cabe observar que no todos los sindicatos están registrados conforme a la legislación federal o de los estados. Para evitar la duplicación, cuando un sindicato es una rama de una organización más amplia, sólo se cuentan las organizaciones mayores. Un sindicato interestatal (con miembros en más de un Estado) se cuenta sólo una vez en el total nacional. Los sindicatos con asociaciones interestatales que no sean estrictamente ramas de una organización común se cuentan como sindicatos distintos en los totales referentes a Australia.

117. Para los fines de estas estadísticas, se define un sindicato como una organización, compuesta predominantemente por empleados, cuyas principales actividades comprenden la negociación de tarifas salariales y condiciones de empleo para sus miembros. En agosto de 1996, el 31 por ciento de los 7.062.100 empleados de Australia de 15 o más años de edad, eran miembros de sindicatos (apéndice 38).

El derecho legal de huelga

118. La Ley dispone que los empleados y organizaciones de empleados pueden adoptar, con ciertas condiciones previas de procedimiento, una medida laboral protegida en apoyo y fomento de sus reivindicaciones cuando negocian con miras a una propuesta de acuerdo colectivo certificado. La medida de lucha laboral está exenta de responsabilidad con arreglo a common law o a las leyes de los estados y territorios, a menos que entrañe lesiones personales, difamación, destrucción caprichosa o irresponsable de bienes, y la ocupación, conservación o uso de bienes; o un boycott secundario. La Ley amplía el derecho a adoptar medidas de lucha sindical a las negociaciones entre un empleador y un empleado en relación con un acuerdo de lugar de trabajo de alcance nacional - forma de acuerdo que puede negociarse colectivamente, pero debe ser firmado individualmente por los empleados. En las páginas 35 a 38 de la guía de legislación adjunta se dan más

detalles sobre la disponibilidad y las limitaciones de las medidas de lucha sindical protegidas (apéndice 102).

119. Como antes se indicó, las medidas de lucha sólo pueden adoptarse cuando se negocia un acuerdo certificado para una sola empresa o un acuerdo de lugar de trabajo de ámbito nacional. No están protegidas las medidas de lucha para otros fines que no sean la negociación genuina de acuerdos. Para que las medidas se consideren medidas protegidas, deben primero satisfacerse ciertas condiciones previas de procedimiento. Estas condiciones previas se resumen en la página 21 (acuerdos de lugar de trabajo de ámbito nacional) y en las páginas 23 a 25 (acuerdos certificados) de la guía de legislación anexa.

120. Más adelante se hablará de la situación de los miembros de las fuerzas armadas, la policía y la administración del Estado. Por lo demás, la única disposición legal especial relativa al ejercicio del derecho de huelga por parte de ciertas categorías figura en la legislación acerca de los "servicios esenciales".

121. Aparte de la sección 30J y 30K de la Ley sobre los Delitos de 1914, de la que a continuación se dan detalles, no hay legislación general del Commonwealth referente al mantenimiento de "servicios esenciales", cualquiera sea su definición, durante un período de perturbación laboral. El Gobierno de Australia ha hecho suya la opinión de que los procesos a que se puede recurrir conforme a la Ley deben utilizarse para resolver conflictos laborales que afecten el mantenimiento de servicios esenciales.

122. En cuanto al derecho a constituir un sindicato de su elección y afiliarse a él, no pesa sobre los miembros de la fuerza de policía ni de la administración del Estado ninguna limitación. Los miembros de las fuerzas de policía y las personas que trabajan en la administración del Estado gozan de los mismos derechos que los demás trabajadores. Los miembros de las fuerzas armadas no son "empleados" conforme al derecho australiano por lo que no pueden inscribirse como sindicatos en el marco del sistema federal.

123. No obstante, el personal de las fuerzas armadas tiene derecho a afiliarse a asociaciones laborales no registradas, como la Federación de las Fuerzas Armadas de Australia (ArFFA). La ArFFA presenta periódicamente comunicaciones al Tribunal de Remuneración de la Fuerza de Defensa, un tribunal laboral especializado que establece la remuneración y las condiciones de empleo de las fuerzas armadas de Australia. El personal de las fuerzas armadas tiene además acceso a procedimientos internos y externos de reclamación bien establecidos.

124. El artículo 30J de la Ley sobre los Delitos de 1914 dispone que, tras una proclamación del Gobernador General de Australia de que existe en el país una grave perturbación laboral que perjudica o amenaza el comercio con otros países o entre los estados, queda prohibida la participación en una huelga o la incitación a la misma (inclusive el control de tareas) y los cierres patronales mientras la proclamación permanezca en vigor. Esta disposición no ha sido invocada desde 1951.

125. Conforme al artículo 30K de la Ley sobre los Delitos de 1914, están prohibidas la obstrucción o la obstaculización del desempeño de servicios del Gobierno australiano o del transporte de bienes y personas en el comercio

internacional mediante violencia, intimidación o boicot. No ha habido ningún procesamiento en virtud de este artículo desde hace muchos años.

Artículo 9

El derecho a la seguridad social

126. Australia se ha enfrentado en los últimos años con cambios sustanciales del mercado del trabajo y de carácter social. Esto ha provocado una desocupación importante, en particular la de larga duración, tras la recesión ocurrida a principios del decenio de 1990, a lo que se suma el envejecimiento demográfico de la población. La política para responder estas tendencias ha sido la de ajustar e individualizar los beneficios y reformas dirigidos a estimular la autoprestación y a la complementación de ingresos mediante una mayor participación de la mano de obra. Se ha hecho mayor hincapié en el "principio de la capacidad de pago" que se propone conseguir un sistema de atención social más equitativo y sostenible.

127. Entre otras respuestas figura la simplificación de programas y pagos para conseguir un mayor apoyo del público a esas disposiciones. Los cambios en la política de seguridad social son evidentes en diversas esferas, incluidos la adecuación de los pagos, la autoprestación, mayores oportunidades de empleo y una mayor simplicidad y coherencia. Más adelante se examinará cada una de estas esferas de reforma.

128. Incumbe a los estados y territorios de Australia la responsabilidad por ciertos aspectos del bienestar social como la sanidad, la vivienda pública y el seguro contra accidentes. Los beneficios por lesiones sufridas en el empleo (llamados "indemnización de los trabajadores") son suministrados a los empleados del Gobierno del Commonwealth por Comcare, un organismo independiente. Cada estado o territorio australiano responde de proteger a los trabajadores dentro de su jurisdicción.

129. Además, los Gobiernos de los estados financian una serie de concesiones que proporcionan asistencia complementaria a muchos grupos de bajos ingresos, incluidas las personas de edad, los desempleados, las personas con discapacidades, los progenitores solos, los veteranos y los que tienen personas a su cuidado. Estas concesiones constituyen una ayuda valiosa para las personas con bajos ingresos al aumentar la posibilidad de obtener muchos servicios esenciales y ayudar al logro de objetivos de justicia social.

Adecuación de los pagos de apoyo a los ingresos

130. El Gobierno está empeñado en mantener y mejorar la adecuación de los pagos para los beneficiarios de la seguridad social, a la vez que limita el nivel del gasto público. Para velar por el mantenimiento del poder adquisitivo de los pagos de la seguridad social, las tarifas de pagos están indizadas con los movimientos del Índice de Precios al Consumo (IPC). Además, el Gobierno ha legislado para garantizar que las pensiones se mantengan en el 25 por ciento del Total de Emolumentos Semanales Medios Masculinos (MTAWE). Mientras que los índices del IPC gradúan los pagos de conformidad con los aumentos de precios, el nivel relacionado con el MTAWE los complementará al asegurar que los pensionistas participen en los aumentos de los niveles de vida de la comunidad

medidos en salarios. También se beneficiarán de esta iniciativa las familias de bajos ingresos.

131. Se estudian también mejores medidas de adecuación, utilizando la metodología de los niveles presupuestarios y el marco de los niveles de vida que pueden proporcionar ideas sobre otros posibles enfoques para evaluar dicha adecuación.

132. El Gobierno ha ofrecido mayores incentivos a la autoprestación reforzando a la vez el principio de la "capacidad de pago". Su finalidad es distribuir de manera más equitativa las cargas financieras actuales y futuras en las esferas de los ingresos jubilatorios, el cuidado de personas ancianas y la sanidad.

133. Las reformas recientes del sistema de ingresos jubilatorios de Australia se orientan a ofrecer incentivos para alentar la independencia financiera, de modo que los individuos puedan alcanzar en el retiro un nivel de vida mejor del que sería posible únicamente con la pensión de vejez. Además de aumentar la cobertura de las pensiones privadas (jubilación) y el ahorro obligatorio con estímulos fiscales, mediante la Garantía de Jubilación, el Gobierno ha anunciado una serie de medidas para seguir fomentando la autoprestación. Consisten en:

- introducir un plan de bonificación de pensiones diferidas para las personas que continúan por lo menos con un empleo a tiempo parcial más allá de la edad de jubilación;
- mejorar el funcionamiento de las normas de conservación aplicables a la jubilación, inclusive un aumento por fases en la edad en la que los derechos jubilatorios son obligatoriamente conservados;
- introducir un descuento por ahorros para las personas que hagan contribuciones de afiliado no deducidas, y/o con ingresos personales netos de otros ahorros e inversiones, hasta un límite anual de 3.000 dólares;
- permitir a los pequeños empresarios que viertan en todo o en parte sus ganancias en sus empresas que puedan solicitar una exención del impuesto a las ganancias de capital sobre la venta de pequeñas empresas cuando el producto se dedique al retiro;
- eliminar la exención del examen de los recursos del interesado en la jubilación de la seguridad social para las personas con 55 o más años de edad sin experiencia reciente en la fuerza de trabajo;
- aumentar el límite de edad hasta el cual una persona puede hacer contribuciones para su jubilación;
- introducir un descuento para las contribuciones jubilatorias respecto de un cónyuge con bajos ingresos; y
- introducir un descuento en los impuestos para los retirados de bajos ingresos que se autofinancian, es decir, los que no reciben una pensión por edad.

134. Para conseguir que el sistema jubilatorio sea más equitativo, el Gobierno ha anunciado en el presupuesto de 1996-1997 un recargo impositivo sobre todas las contribuciones jubilatorias de personas con altos ingresos.

Mayores oportunidades de empleo

135. El Gobierno ha actuado para potenciar los elementos más activos de la asistencia a los desocupados. Aparte de este proceso ha habido también reformas innovadoras en el sentido de individualizar los beneficios, en reconocimiento del cambio en la participación de la mujer en la fuerza de trabajo. Recientemente, se han introducido una mayor variedad de oportunidades de empleo para personas en edad de trabajar con el fin de complementar las políticas económicas y sociales del Gobierno.

136. Desde mayo de 1998, el Gobierno está introduciendo Job Network, un mercado plenamente competitivo para servicios de empleo. Job Network se financiará destinando a él la mayoría de los recursos antes asignados a los programas para el mercado de trabajo. Job Network es una nueva red nacional de organizaciones privadas, comunitarias y públicas contratadas por el Gobierno para encontrar el trabajo adecuado a las personas sin empleo, en particular los desempleados de larga duración. Empleo Nacional, el proveedor público empresarial y sucesor del Servicio de Empleo del Commonwealth (CES), es una de las más de 300 organizaciones de Job Network. Estas organizaciones ofrecerán una asistencia más flexible y personalizada a los buscadores de empleo según el grado en que la necesiten. Las organizaciones de Job Network pasarán revista a los empleadores en busca de empleos y casarán a los diversos buscadores de empleo con las vacantes adecuadas.

137. Aunque muchos buscadores de empleo se beneficiarán de estos nuevos mecanismos para encontrar el adecuado, otros más desfavorecidos pueden necesitar formación o asistencia intensiva en la búsqueda de trabajo antes de que puedan encontrarlo y conservarlo con éxito. La asistencia en la búsqueda de trabajo proporcionará formación en técnicas tendientes a ese fin (currículos, técnicas de entrevista, presentación) a efectos de preparar a las personas sin empleo para solicitar puestos de trabajo y darles las habilidades y la confianza necesarias para desempeñarse bien en sus tratos con los empleadores. Esto se dirigirá en general a los buscadores de empleo que han permanecido desocupados durante seis a doce meses y que tienen actualmente cualificaciones laborales. Proporcionará ayuda personalizada a los buscadores de empleo que han estado desocupados durante mucho tiempo o que se hallan en situación de desventaja en el mercado laboral. Se ocupará de los obstáculos al empleo que se oponen a quienes lo buscan y los colocará en puestos de trabajo.

138. Los servicios de empleo serán más eficaces porque la mayoría de los pagos a las organizaciones de Job Network se basarán en los resultados. Es decir, que el Gobierno pagará a las organizaciones de Job Network que coloquen en un puesto a los buscadores de empleo aptos. En términos generales, un buscador de empleo apto es alguien que recibe apoyo en sus ingresos del Gobierno de Commonwealth o una persona sin empleo de 15 a 20 años de edad o cualquier persona que busque colocarse como aprendiz o capacitando. Con esto se consigue que el grueso del dinero público se dirija a quienes se hallan en situación particularmente desventajosa en su búsqueda de trabajo.

139. Para mejorar aún más los servicios destinados a los buscadores de empleo, el Gobierno ha creado Centrelink, un nuevo organismo del Commonwealth, que combinará los servicios de apoyo a los ingresos del Departamento de Seguridad Social con algunas de las funciones del CES. Toda persona sin empleo tendrá libre acceso al mucho mayor registro de vacantes al que se puede acceder mediante pantallas de contacto en las oficinas de Centrelink y en Internet. Los buscadores de empleo podrán acceder también a ordenadores, fotocopiadoras, aparatos de fax y teléfonos para ayudarles a preparar currículos y solicitar empleos.

140. Se han fomentado igualmente las oportunidades de empleo proporcionando amplios beneficios en el trabajo, como directrices flexibles que permitan el trabajo a tiempo parcial, la ampliación de las horas de trabajo voluntario, el acceso a pagos a las familias máximos para personas con bajos ingresos y la asistencia financiera al cuidado de niños. Estas iniciativas maximizan la posibilidad de elegir y las oportunidades, a la vez que mantienen una sólida red de seguridad para quienes se enfrentan con situaciones de desventaja. Entre otras medidas figuran extender el programa Empleos, Educación y Formación (JET) a progenitores solos u otros grupos de personas análogamente desfavorecidas, incluso receptores conjuntos de pagos, y permitir a los asesores de JET que compren formación preprofesional para solicitantes aptos. Entre otras medidas se cuenta la ampliación del número de plazas para becas de aprendizaje y formación en empresas de nuevas tecnologías, información y servicios.

141. Las personas pertenecientes a grupos con necesidades especiales que requieren formas especializadas de asistencia para superar obstáculos a efectos de encontrar trabajo tendrán acceso a una "asistencia intensiva para el empleo". Comprende ésta una evaluación personal de necesidades, seguida de una asistencia a su medida, como formación, asistencia en la búsqueda de empleo y subvención al salario. Se insiste además en la "obligación recíproca" por parte de quienes reciban beneficios de desempleo de buscar activamente trabajo o aprovechar oportunidades de formación. Se da a los buscadores de empleo un diario especial para estimular una búsqueda de trabajo más intensa en las primeras etapas del desempleo. Mejores procedimientos de responsabilización aumentan la integridad del programa, producen resultados más positivos en materia de empleos y fomentan un mayor apoyo de la comunidad a los desempleados.

142. El objetivo de la estrategia de Empleos, Educación y Formación (JET) es mejorar la situación financiera de los clientes aptos fomentando su entrada o reingreso en la fuerza de trabajo. Conforme a esta estrategia, a partir de marzo de 1997, se puede obtener con carácter voluntario asistencia para progenitores solos, pensionistas viudos con personas a su cargo, beneficiarios de pensiones de viudedad, progenitores solos que perciben pensiones a título de beneficios especiales (debido a la falta de la condición de residente del progenitor solo) y quienes reciben pensiones de su pareja.

143. En el marco de Job Network, el Gobierno proporcionará funcionarios de Centrelink para facilitar asistencia especializada a progenitores solos y ayudarlos a tener acceso a Job Network. El Gobierno garantizará asimismo que las asignaciones para financiación y las directrices de selección para la asistencia intensiva procuren a los progenitores solos una participación equitativa en la asistencia total. La estrategia de JET continuará suministrando información,

asesoramiento, educación, formación preprofesional y acceso al cuidado de niños a los progenitores solos elegibles.

144. La iniciativa Work for the Dole (Trabaja por la Prestación por Desocupación) se basa en el principio de la obligación recíproca - que es justo y equitativo que se pida a las personas que reciben de la comunidad prestaciones por desocupación que, a su vez, hagan una contribución a ésta. En octubre de 1997 se anunciaron 179 proyectos piloto. Los proyectos están dando colocaciones para más de 10.000 jóvenes desempleados. Existen ahora proyectos piloto en todos los estados y territorios, situándose la mayoría de los proyectos en zonas rurales y no metropolitanas con un elevado desempleo juvenil.

145. Han dado ya comienzo los primeros proyectos. Se otorga prioridad para participar en el proyecto piloto a los jóvenes comprendidos entre los 18 y los 24 años de edad que han estado sin empleo por lo menos durante seis meses. Los proyectos comprenden un 80 por ciento de participantes de este grupo. Los proyectos se proponen procurar a los participantes: nuevas cualificaciones, diversidad de tareas, retos y responsabilidades, oportunidades para trabajar en equipos y mezclarse con otras personas, y un sentimiento de orgullo por su trabajo y sus logros.

146. El Gobierno ha anunciado que el principio de la obligación recíproca se ampliará ulteriormente a partir de julio de 1998. Conforme a unas disposiciones en materia de obligación recíproca reforzadas, se pedirá a los jóvenes desempleados de entre 18 y 24 años que participen en otras actividades además de la búsqueda de empleo, después de haber percibido durante seis meses prestaciones por desocupación. Estas actividades comprenderán trabajo a tiempo parcial, trabajo voluntario, educación o capacitación o participación en un programa financiado por el Gobierno. Los programas financiados abarcarán formación en escritura y aritmética elemental para un máximo de 12.000 jóvenes con bajas calificaciones en esas disciplinas, el programa Colocación en el Trabajo, Empleo y Formación que proporciona un apoyo global a jóvenes sin hogar y otros en situación muy desventajosa Work for the Dole

147. El Gobierno ha decidido, por consiguiente, ampliar la iniciativa Work for the Dole a 25.000 plazas al año. Los nuevos proyectos se situarán principalmente en zonas con elevado desempleo juvenil. Los proyectos serán de valor para los participantes y para la comunidad. La mayoría de los participantes y los proyectos de Work for the Dole serán voluntarios, pero se pedirá a algunos buscadores de empleo que se sumen a los proyectos. Se llevará a cabo un proceso de evaluación competitiva para seleccionar a patrocinadores para los nuevos proyectos de la iniciativa que se espera se inicien en agosto de 1998.

148. Al poner en práctica el plan Work for the Dole el Gobierno ha prestado cuidadosa atención a las condiciones precisas en que ha de funcionar el plan para cerciorarse de que es compatible con las obligaciones internacionales de Australia. Sírvanse remitirse también al artículo 27 del informe de Australia de 1996 relativo a la Convención sobre los Derechos del Niño para un análisis más a fondo de esta cuestión.

149. Entre las políticas orientadas a luchar contra el fraude figura una aplicación más estricta de las medidas para comprobar si se está en activo y el aumento de las penas a las infracciones de la Ley de Seguridad Social. Con esto

se conseguirá que se preste la debida atención a los verdaderamente desocupados y que se estimulará la autoayuda y la independencia financiera. La ampliación y el mejoramiento de los programas de confrontación de datos ayudarán igualmente a reducir el fraude, aumentando el cobro de deudas y orientando con más precisión los servicios y los pagos.

150. Otras medidas, como la aplicación de una comprobación de los activos líquidos y la utilización de créditos de vacaciones no utilizados, antes de de que se pueda reclamar apoyo económico, y contar las inversiones para la jubilación como parte de los ingresos y activos de las personas con 55 o más años de edad, hará también que las personas con recursos apreciables se mantengan a sí mismas durante un tiempo antes de poder optar a las prestaciones por desocupación. Desde el 1º de julio de 1998 se pone en práctica además un Plan de Acción Nacional para Personas que Cuidan a Otras. Con él se aumenta la financiación de servicios de alivio y centros de recursos para personas con otras a su cuidado, se incrementan los días elegibles sin prestación de cuidados y los días dedicados al trabajo pagado o voluntario, la capacitación o el estudio y se amplía el pago a quienes tienen a su cuidado a niños profundamente discapacitados de menos de 16 años.

Política de familia

151. El Gobierno reconoce que proporcionar un ambiente económico y social en el que las familias puedan alcanzar sus plenas posibilidades es decisivo para mantener una sociedad fuerte, compacta y solidaria. Ha reconocido las diversas necesidades de familias que se enfrentan con diferentes etapas de la vida y las presiones para combinar un empleo remunerado con las responsabilidades de la crianza de los hijos. Se han adoptado una serie de medidas concebidas para aliviar las presiones y ampliar las posibilidades de elección en cuanto a la manera de equilibrar el trabajo con las responsabilidades del cuidado de los niños. Las reformas reconocen también el complejo papel que la mujer desempeña en la sociedad y se orientan hacia una mayor flexibilidad para las mujeres en este contexto. Si bien se introdujo una modificación de los derechos individuales en el sistema de prestaciones, atendiendo a posibles desincentivos para el trabajo, en particular para las parejas, la elegibilidad individualizada para los beneficios proporciona asimismo a las mujeres un mayor acceso a los programas relacionados con el mercado de trabajo y asistencia para sumarse a la población activa.

152. El Gobierno ha reconocido igualmente la importante contribución de los miembros de la pareja que permanecen en el hogar al cuidado de los hijos. Por ejemplo, la Prestación Parental proporciona unos ingresos aparte para el miembro de la pareja que permanece sustancialmente fuera de la población activa para cuidar de los hijos. El Descuento por Cuidado de Niños (de abril de 1998) compensa los gastos ocasionados por el cuidado de los niños cuando el padre o los padres trabajan, estudian, se forman o buscan empleo. Además, la Iniciativa del Impuesto Familiar (FTI), puesta en marcha en enero de 1997, reconoce asimismo el costo de criar a los niños y los ingresos que pierden las familias con un solo progenitor con trabajo remunerado. La FTI reducirá hasta determinado límite las obligaciones tributarias de las familias de ingresos bajos y medianos con hijos. Esto comprende una asistencia adicional para las familias con un solo aportante que tengan niños de menos de 5 años.

153. Para apoyar a las familias en su tarea de criar a los hijos, el Gobierno ha financiado el desarrollo de iniciativas de educación para una paternidad de alta calidad.

154. Se establecerá un Marco Nacional de Planificación para garantizar que el crecimiento del sector del cuidado de niños sea sostenible y satisfaga las necesidades de las familias. Entre los cambios propuestos figura la prestación a las familias de una asistencia para el cuidado de niños más lógica utilizando servicios externos de atención en horas escolares e introduciendo un tope máximo para acceder a esa asistencia en casos de cuidado de niños no relacionado con el trabajo. Estos cambios orientan mejor los pagos hacia las familias necesitadas de cuidado de niños relacionado con el trabajo y abarcan disposiciones para niños con necesidades adicionales. Se aumentan igualmente de manera sustancial los fondos dedicados en los cuatro próximos años a permitir que los niños con necesidades especiales tengan acceso a servicios de cuidado infantil de alta calidad.

155. Una gama de reformas históricas en la prestación, las estructuras y los pagos del servicio, junto con reformas administrativas, serán testigo de una nueva era en el servicio al destinatario del bienestar social, que contribuirá a que se desarrolle una empresa del sector público y del privado más innovadora y eficiente. Las reformas para conseguir un enfoque más exacto del beneficiario, una mayor flexibilidad y más responsabilidad pública acompañan a la creación del Organismo de Prestación de Servicios de Commonwealth (Centrelink), que desde 1º de julio de 1997 se ha encargado de la prestación de apoyo económico, inclusive la ayuda a los estudiantes, ayudas para el cuidado de niños y algunos servicios de empleo. Con el tiempo, se añadirán otros servicios mediante acuerdos especiales entre comprador y proveedor en los que se reflejarán las diversas responsabilidades. En efecto, se espera que Centrelink se transforme en una "tienda para todo" para una serie de servicios del Gobierno. Podrá aprovechar economías de escala, eliminando la duplicación de servicios y mejorando la rendición de cuentas.

156. Una mejor rendición de cuentas se complementará mediante una prestación de servicios más integrada y especializada, en particular para destinatarios de zonas alejadas, indígenas, migrantes recién llegados, progenitores solos, personas con discapacidad, jóvenes y personas mayores que se enfrentan con su retiro. Es asimismo evidente en varias esferas la simplificación y agilización de diversas estructuras, elegibilidad y pagos de distintos programas. Con ello se mejorará la prestación de servicios y se contribuirá a que los destinatarios comprendan los derechos, las opciones de que disponen en cuanto a actividades de pago y una administración más fluida de los pagos.

157. Como ejemplos de simplificación cabe citar que se hayan reducido de tres a una de las dependencias encargadas de prestar asistencia a las familias con gastos ocasionados por el cuidado de niños y todos los pagos por cuidado de niños se efectúen, a partir del 1º de enero de 1998, por conducto Centrelink. También se han simplificado cierto número de estructuras de los programas y beneficios. Por ejemplo, reduciendo el número de programas referentes al mercado de trabajo de 20 a cuatro (incentivos para el empleador; asistencia a la empresa y el ajuste; capacitación para el empleo, y preparación y apoyo para buscadores de trabajo) durante la transición hacia los nuevos servicios de empleo que se prevé que comenzarán el 1º de mayo de 1998.

158. La Prestación para la Juventud, que se introducirá a partir del 1º de julio de 1998, sustituirá a la mayoría de los programas de apoyo a los ingresos para a los jóvenes, incluidos los beneficios para los jóvenes desempleados menores de 21 años, los estudiantes menores de 25 y los jóvenes que satisfacen los requisitos para obtener el beneficio por enfermedad. La Prestación para la Juventud reemplazará a cinco pagos/programas distintos y reducirá el número actual de tarifas de pago de 13 a 5. La Prestación ofrecerá un sistema mejor integrado de apoyo a los ingresos que responda a los movimientos de los jóvenes entre el estudio, el desempleo y el trabajo y elimine los actuales desincentivos para que los jóvenes participen en la educación y la formación. Se propone también que, a partir del 1º de julio de 1999, todos los pagos de la seguridad social se harán en cuotas quincenales vencidas, utilizando un solo conjunto de disposiciones sobre la fecha de efectividad.

159. Desde el 20 de marzo de 1998, la Pensión para Progenitores Solos y la Prestación Parental serán sustituidas por un único pago de paternidad que reconocerá las responsabilidades de la crianza de los hijos que pesan sobre los progenitores independientemente de su estado civil. Las familias pueden además tener actualmente acceso a una información de ámbito nacional sobre los servicios aprobados de cuidado de niños, su ubicación, cuotas y calidad con la Línea Directa de Acceso a la Atención del Niño recientemente iniciada. Este servicio representa el primer servicio nacional en su género y ha merecido ya una respuesta positiva de las familias. El Gobierno trabaja además hacia la renegociación de funciones y responsabilidades de Commonwealth y de los estados y territorios en la prestación de diversos servicios. Figuran entre ellos la asistencia en materia de vivienda, objeto de un grupo de tarea de nivel superior que examina las opciones para la reforma de la vivienda.

160. Australia ha puesto igualmente en práctica varias reformas administrativas con el objetivo de prestar servicios mejor y más económicamente. Estas reformas limitarán además el abuso del sistema de seguridad social. Entre estas iniciativas se cuenta la de adoptar un enfoque de gestión empresarial para administrar los derechos a la seguridad social, el reparto de la responsabilidad y la rendición de cuentas por los servicios entre las oficinas regionales, mejor información al destinatario y una nueva redacción de la Ley de Seguridad Social y la Ley sobre la Atención del Niño de 1972.

161. Además, los cambios en los sistemas informáticos han potenciado los servicios a los destinatarios y han ayudado a detectar los pagos incorrectos y el fraude. En diciembre de 1992 entró en funcionamiento una red nacional de TeleService Centres (TSC) para servir como primer punto de contacto para los beneficiarios que así no tendrán que visitar las oficinas regionales en persona. En consecuencia, TeleService, que ha sido recientemente ampliado, contribuye a aliviar la carga de trabajo en materia de beneficiarios que pesaba sobre las oficinas del Departamento de Seguridad Social, lo que redundaba en general en la prestación de un servicio completo y eficaz.

Pagos de la seguridad social en Australia

162. El sistema de seguridad social de Australia es una parte vital de la estrategia de justicia social del Gobierno. Proporciona apoyo a los ingresos para las personas que se han jubilado, tienen una discapacidad o padecen una condición médica que les impide trabajar, carecen de empleo, tienen niños a su

cuidado o no se hallan en condiciones de cuidar de sí mismos debido a circunstancias especiales. Los pagos de la seguridad social se hacen de la siguiente manera:

- jubilados: pensión de vejez, pensión de la esposa;
- discapacitados y enfermos: pensión de apoyo a la discapacidad, complemento salarial por discapacidad, pensión de la esposa, pensión de la persona que cuida a otra, prestación por enfermedad, prestación por movilidad, prestación por discapacidad de los hijos;
- desocupados: prestación para la formación juvenil, prestación Newstart, prestación por edad madura;
- familias con hijos: prestación familiar, prestación de maternidad, prestación parental, pensión de doble orfandad, pensión para progenitores solos, programa Empleos, Educación y Formación (JET), Plan de Apoyo a los Menores, prestación de maternidad para inmunización y pago del impuesto familiar; y
- circunstancias especiales: prestación farmacéutica, prestación para el teléfono, ayuda para el alquiler, prestación para zonas alejadas, Pensión de Viudedad B, Beneficio Especial, pago de ayuda en casos de desastre, apoyo a los hogares agrícolas, atención sanitaria y tarjetas de concesión y concesiones postales para los ciegos.

163. Además, los estados aportan concesiones y beneficios sustanciales para las personas con bajos ingresos, en particular para asegurarles el acceso a servicios esenciales, por ejemplo, concesiones en materia de electricidad y agua corriente y transporte público a un costo reducido. Hay también asistencia financiera de emergencia para las personas que se encuentran en una crisis de ese orden o en una situación de extrema necesidad.

164. Desde el 4 de marzo de 1997, los nuevos migrantes a Australia han de esperar dos años antes de tener acceso a la mayoría de los pagos de la seguridad social, incluidas las prestaciones Newstart, por enfermedad, para la formación juvenil, de viudedad, de pareja, parental y por edad madura y el Beneficio Especial. No obstante, las prestaciones del Beneficio Especial están al alcance de las personas que experimenten un cambio sustancial de sus circunstancias por razones que escapen a su control. La política tiene como fin cerciorarse de que los migrantes atienden a su propio sustento durante el período inicial de su instalación en Australia, en vez de depender inmediatamente del apoyo del Commonwealth a sus ingresos. La política se aplica igualmente a todos los migrantes que llegan a Australia o a quienes se concede la residencia permanente a partir del 4 de marzo de 1997 inclusive, prescindiendo de raza, nacionalidad u orígenes étnicos. (Véanse los apéndices 41 a 44 en particular, para información complementaria sobre la protección de este derecho).

Aportaciones específicas de los estados: Victoria

165. Durante 1993/1994, Victoria produjo el informe The Price of Care en consulta con el Comité Permanente de Asesores de Commonwealth y los Estados en Asuntos Relacionados con la Mujer, donde se reconocen los costos sociales y

económicos que gravan a las mujeres con personas a su cuidado y se proponen futuras orientaciones destinadas a mejorar la situación financiera y el bienestar de esas mujeres, así como el valor de su trabajo para la comunidad. Las recomendaciones que figuran en el informe fueron aceptadas por los Ministros del Commonwealth y de los estados encargados de la condición jurídica y social de la mujer.

166. En 1995/1996, Victoria introdujo la situación de tener personas a su cuidado como motivo de discriminación en la Ley sobre Igualdad de Oportunidades de 1925, en la que se garantiza que la responsabilidad de cuidar a otra persona no será base para la discriminación. En 1996, Victoria inició la Estrategia para Personas que Cuidan a Otras, asignando 100 millones de dólares durante cuatro años para apoyar a quienes cuidan a otras personas en la comunidad, a fin de reducir la carga financiera y de trabajo de los que cuidan a personas con discapacidades o con enfermedades crónicas y mentales y a personas de edad. Los programas reconocerán y reflejarán la diversidad y los intereses comunes de los beneficiarios. Los servicios prestarán atención individual a sus necesidades específicas y velarán por que se reconozca y remunere el papel clave que desempeñan las mujeres con personas a su cuidado. Esta iniciativa fue, en parte, producto de la Conferencia de Ministros de Commonwealth y los Estados sobre el informe *The Price of Care*.

Artículo 10

Protección y asistencia para la familia

167. En Australia, el Gobierno federal desempeña una importante función en las políticas para la familia y en la financiación de programas y servicios de apoyo a las familias. La mayor parte del apoyo del Gobierno federal a las familias se proporciona, a quienes satisfacen las condiciones para beneficiarse de él, en forma de asistencia financiera por conducto del sistema de la seguridad social. Este sistema ha sido objeto de una notable reforma en los últimos dos decenios, en parte atendiendo al cambio de las estructuras familiares y a las necesidades de la economía y el mercado de trabajo.

168. Los gobiernos de los estados desempeñan también un gran papel en la protección y el apoyo para las familias. Estos programas abarcan servicios universales (por ejemplo, atención del niño), otros dirigidos a los más necesitados (orientados especialmente a impedir la ruptura de las familias y a garantizar la incolumidad de los niños), y desarrollo comunitario y apoyo a los vecindarios como medio para conseguir comunidades más fuertes, saludables y solidarias. También se prestan amplios servicios de apoyo a la juventud. Figuran entre ellos servicios universales (centrados en la educación, el empleo y la formación y actividades sociales, deportivas y culturales), así como servicios especiales dirigidos a los jóvenes en situaciones de carencia particular, por ejemplo, en conflicto con su familia, sin hogar, infractores menores de edad, que hacen un uso indebido de las drogas o del alcohol.

Asistencia de la seguridad social para las familias

169. El Departamento de Seguridad Social (DSS) presta ayuda financiera, previo examen de los recursos del interesado, a más de dos millones de familias con niños, que representan alrededor del 80 por ciento de las familias australianas con niños menores de 16 años. En 1996-1997, los gastos superaron los 12 mil

millones de dólares, lo que equivale a alrededor del 30 por ciento de los gastos totales del Departamento de Seguridad Social y el 2,3 por ciento del producto interior bruto.

170. Para los fines de efectuar pagos de la seguridad social, un joven que no haya cumplido aún los 16 años es un niño dependiente de otra persona que sea un adulto legalmente responsable (solo o conjuntamente con otra persona) de los cuidados cotidianos, el bienestar y el desarrollo del joven, y éste está al cuidado del adulto, o si el joven no es un niño dependiente de alguna otra persona conforme al párrafo a) y está total o sustancialmente al cuidado del adulto. Esto queda condicionado a la situación financiera y residencial del "niño dependiente" (Ley de Seguridad Social de 1991, artículo 5).

171. Por "familiar", en relación con una persona, se entiende: a) la pareja, padre o madre de la persona, o b) una hermana, hermano o hijo de la persona, o c) otra persona que, en opinión del Secretario (del Departamento de Seguridad Social), debe ser tratada para los fines de esta definición como uno de los parientes descritos en los párrafos a) o b) (Ley de Seguridad Social de 1991, artículo 23 1)). Igualmente, para los fines de los pagos de la seguridad social, una "pareja", en relación con una persona que es miembro de una pareja, significa el otro miembro de ésta (Ley de Seguridad Social de 1991, párrafo 1 del artículo 4).

172. Los principales pagos previstos en este programa son:

- Prestación Familiar: pagos mínimos a disposición de la mayor parte de las familias con hijos y pagos superiores para las familias con bajos ingresos. La cuantía de las Prestaciones Familiares depende de los ingresos y activos de la familia, el número y las edades de los hijos, si la familia vive alquilada privadamente o si tiene a su frente un único progenitor;
- Prestación Parental: ayuda a las familias en que un solo miembro de la pareja cuida de los hijos dependientes de ésta o de un hijo menor de 16 años sin trabajo remunerado o con un ingreso personal reducido;
- Prestación de Maternidad: pago de un tanto alzado libre de impuestos por cada hijo nacido de las familias con derecho a la prestación familiar. La Prestación de Maternidad es asimismo pagadera por un hijo nacido muerto o fallecido posteriormente por el cual el progenitor hubiese tenido derecho a la misma;
- Prestación de Maternidad para Inmunización: este pago es la segunda cuota de la Prestación de Maternidad y se pagará (a partir del 1º de enero de 1998) para alentar a los padres a inmunizar completamente a sus hijos;
- Pago del Impuesto Familiar: pago quincenal en metálico destinado a las familias con bajos ingresos, es decir, cuyos ingresos imponibles los sitúan por encima de la Prestación Familiar mínima. Tiene dos componentes: uno proporciona asistencia a las familias por cada hijo, mientras que el otro proporciona una cantidad adicional

uniforme para las familias que viven de los ingresos de una sola persona con niños menores de cinco años;

- Pensión para Progenitores Solos: pago a una persona que no es miembro de una pareja y que cuida de un niño o de niños, el más joven de los cuáles es menor de 16 años. El progenitor solo tiene también derecho a esta pensión cuando el hijo da derecho a la persona a percibir la Prestación por Discapacidad de los Hijos. Cuando corresponda, el receptor debe adoptar medidas razonables para obtener apoyo para los hijos del progenitor que no tenga la custodia. Los progenitores solos son igualmente elegibles para recibir asistencia mediante el programa Empleos, Educación y Formación; y
- Pensión de Doble orfandad: se paga a ciertos niños sin padres que los cuiden.

173. Las familias con hijos discapacitados reciben asistencia adicional, previa comprobación de la insuficiencia de los recursos, mediante la Prestación por Discapacidad de los Hijos que proporciona el Departamento de Seguridad Social, con un costo estimado de 233 millones de dólares en 1996-1997. Las familias reciben ulterior asistencia para el cuidado de los hijos mediante el Descuento en Metálico por la Atención de los Hijos (un reintegro en metálico con el que se cubre un porcentaje de los costos relacionados con el trabajo que ocasiona a las familias la atención de los hijos).

Principales reformas y orientaciones normativas en materia de pagos a las familias

174. En los últimos dos decenios se ha producido un cambio apreciable y continuo del sistema de pagos a las familias en Australia. Los principales acontecimientos en este proceso de reforma han sido:

- la utilización del sistema de la seguridad social en lugar del sistema tributario para prestar asistencia a las familias. Por ejemplo, en 1976 los descuentos impositivos lineales por hijos dependientes se convirtieron en dinero en efectivo y se combinaron con el pago de apoyo a los ingresos de la Dotación de los Hijos para formar un nuevo pago a las familias conocido como Prestación Familiar. La principal finalidad del cambio fue ayudar al gran número de familias cuyos ingresos imponibles habían sido demasiado bajos para aprovecharse plenamente de los descuentos;
- incrementos apreciables en la adecuación de los pagos a las familias, en particular las de bajos ingresos. Por ejemplo, desde el 1º de enero de 1997, la Iniciativa del Impuesto Familiar ha incrementado los ingresos de familias con hijos, hasta unos ingresos mínimos de aproximadamente 70.000 dólares y prestado asistencia adicional a progenitores solos y a otras familias con un solo aportante;
- los aumentos de la cobertura de los pagos a las familias y las ampliaciones de la elegibilidad para obtenerlos, como la

introducción, en febrero de 1996, de una Prestación de Maternidad, condicionada al previo examen de los recursos, para ayudar a sufragar los gastos ocasionados a la familia en el momento del nacimiento de un hijo o, para la mayoría de las familias, mediante la Iniciativa del Impuesto Familiar puesta en práctica en enero de 1997;

- un enfoque más preciso de los pagos a las familias, dirigiéndolos a los más necesitados de apoyo. Vinculadas con mayores niveles de asistencia prestada, en particular a las familias con bajos ingresos, ha habido una serie de decisiones para orientar los pagos hacia las familias con ingresos bajos y medianos. Esto señala un desplazamiento del concepto de la universalidad y la equidad horizontal hacia una mayor concentración en la redistribución vertical. Esta serie de medidas ha reducido progresivamente el número de familias con derecho a recibir apoyo mediante el sistema de pagos a las familias;
- una mayor integración de los diferentes pagos a las familias. Desde 1993 se ha amalgamado diversos pagos con tarifas y finalidades análogas para satisfacer mejor las necesidades de los beneficiarios y reducir el exceso de administración;
- la mayor importancia otorgada a dirigir los pagos a las familias hacia el progenitor responsable en mayor medida del cuidado de los hijos. Los pagos y las concesiones tributarias relacionadas con los hijos en familias con dos progenitores se han dirigido progresivamente del que es el principal aportante de ingresos a la familia (por lo común el varón) hacia el progenitor que mayormente cuida de los hijos de la pareja (por lo común la mujer). Este desplazamiento refleja una presunción de que es más probable que esos pagos se utilicen en beneficio de los hijos si se hacen a quien principalmente los cuida, así como una preocupación por conseguir un mayor grado de igualdad entre los sexos en la distribución de esos pagos;
- la posibilidad para las familias de un margen de elección más amplio en lo que se refiere a equilibrar el empleo y las tareas de crianza de los hijos. En el contexto de una cada vez mayor participación de la mujer en la fuerza de trabajo y un aumento del número de familias con dos fuentes de ingresos, el Gobierno ha introducido políticas orientadas a ayudar a las familias a combinar el trabajo y la crianza de los hijos. Entre estas políticas figuraron el fomento de una mayor flexibilidad en el lugar de trabajo, el apoyo a continuar proporcionando lugares y asistencia para el cuidado de los niños con el costo de los cuidados pagados, y el desarrollo de opciones más amplias para la formación en el empleo, así como un sistema de pagos las familias que apoye las decisiones de éstas respecto de sus funciones en el lugar de trabajo y en las atenciones familiares; y
- una mayor extensión de la asistencia a los progenitores solos. Por ejemplo, el programa Empleos, Educación y Formación, iniciado en

1989 para asistir en la formación de progenitores solos para su entrada o reingreso en la fuerza de trabajo.

Personas jóvenes

175. En Australia, incumbe al Gobierno del Commonwealth proporcionar pagos de apoyo a los ingresos de los miembros de la comunidad incapaces de sustentarse a sí mismos. El Gobierno ha reconocido la necesidad de que las personas jóvenes se muevan entre el estudio y el empleo (incluida la búsqueda de trabajo) o de combinar estas actividades de modos diferentes.

176. A fin de proporcionar a las personas jóvenes, un apoyo a los ingresos más flexible, a condición de que exista una legislación habilitante, el Gobierno introducirá a partir de julio de 1998 una nueva Prestación para la Juventud, condicionada al examen de los recursos, destinada a todas las personas jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 20 años, que se prolonga hasta los 25 años para los estudiantes con dedicación exclusiva. La Prestación para la Juventud proporcionará además a los jóvenes de menos de 18 años mayores incentivos para que permanezcan en la educación o la formación a jornada completa. La Prestación se arbitrará de modo que desaliente la dependencia del apoyo a los ingresos y estimule a las familias en condiciones de hacerlo a que mantengan a sus hijos.

177. Con la introducción de la Prestación para la Juventud el 1º de julio de 1998, se modificará la edad de la independencia para cierto número de pagos, antes separados, a saber, AUSTUDY Newstart, Prestación para la Formación Juvenil, Prestación por Enfermedad y la tarifa por encima de la mínima de la Prestación Familiar para estudiantes secundarios que no reciben AUSTUDY. Las personas sin empleo hasta la edad de 21 años y los estudiantes con dedicación plena hasta la edad de 25 años se considerarán como dependientes de sus padres, a menos que satisfagan una serie de criterios que demuestren su independencia. Se aplicará un examen de los recursos de sus padres para determinar la capacidad de éstos de hacerse cargo de los gastos de mantenimiento de sus hijos dependientes.

178. Las personas jóvenes enfermas, con discapacidades o que cuidan de hijos dependientes continuarán gozando de otros pagos de apoyo a los ingresos. El Gobierno es consciente de que el modelo tradicional de optar por el estudio a tiempo completo o por el empleo a tiempo completo no es ya válido para muchas personas jóvenes. Cada vez con mayor frecuencia, esas personas recurren a cursos de formación breves pero intensivos, al empleo a tiempo parcial o eventual y a diversas combinaciones del estudio con el empleo, como vías para llegar al empleo a jornada completa.

179. El Convenio de la OIT No. 156, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, de 1981, fue ratificado por Australia el 30 de marzo de 1990. Se han presentado a la OIT dos informes sobre la aplicación del Convenio, el más reciente en 1993.

180. Es poco probable que Australia ratifique, en las presentes circunstancias, el Convenio de la OIT No. 103 relativo a la protección de la maternidad (revisado), de 1952, dado que hay impedimentos apreciables para su cumplimiento, en particular por lo que se refiere a la licencia pagada de maternidad. A pesar

de ello, Australia respeta el espíritu de ese Convenio y la legislación federal sobre relaciones laborales dispone que todos los empleados comprendidos en el sistema federal, incluidos los que no estén comprendidos en laudos laborales, gocen de licencia parental. Este derecho complementa, pero no sustituye, los derechos conforme a otras disposiciones y laudos federales, del estado y los territorios. La revisión del Convenio 103 figura en el programa de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) para ser tratada en junio de 1999.

181. El Convenio de la OIT No. 138, sobre la edad mínima, de 1973, no ha sido ratificado por Australia porque existen impedimentos apreciables para el cumplimiento de sus disposiciones, en particular por lo que se refiere al requisito de una edad mínima legal para el empleo. A pesar de las dificultades para instituir el cumplimiento del Convenio, Australia atribuye gran importancia a la educación de los niños y a su salud, seguridad y moral cuando se inician en el trabajo. Las disposiciones legislativas en los estados y territorios, que prescriben la educación obligatoria hasta la edad de 15 años, el bienestar infantil y la salud y la seguridad ocupacionales, garantizan que el trabajo infantil no constituya un problema en Australia, lo que demuestra el respeto del espíritu del Convenio No. 138.

182. Australia ha ratificado los siguientes Convenios de la OIT sobre la edad mínima: No. 7, sobre la edad mínima (mar), de 1920; No.10, sobre la edad mínima (agricultura), de 1921; No. 15, sobre la edad mínima (estibadores y fogoneros), de 1921; No. 58, sobre la edad mínima (mar) revisado, de 1936; No. 112, sobre la edad mínima (pescadores), de 1959; y No. 123, sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), de 1965.

183. Australia no está sola en sus dificultades respecto del Convenio No. 138 (que ha sido ratificado sólo por 51 de los 174 Estados miembros de la OIT) y participa activamente en el desarrollo de nuevos instrumentos de la OIT que harán hincapié en la eliminación de formas extremas o explotativas del trabajo infantil. La propuesta de nuevos instrumentos se examinará en la CIT en 1998 y 1999, con miras a aprobar un Convenio y una recomendación en 1999.

184. El instrumento de la OIT referente al trabajo infantil es el Convenio de la OIT No. 138, sobre la edad mínima, de 1973. Este Convenio establece una edad mínima de entrada en el empleo y el trabajo (15 años), con exenciones limitadas para el trabajo ligero de niños de edades comprendidas entre 13 y 15 años y actuaciones artísticas. El Convenio define "empleo y trabajo" como todo trabajo realizado, conforme o no a un contrato. Esto impide la práctica de que los niños trabajen en el hogar, el negocio o la explotación agrícola de su familia. Dificultades respecto del Convenio, como las mencionadas, han impedido que Australia lo ratifique.

185. Sin embargo, se puede emplear a niños menores de 15 años en trabajo a tiempo parcial, eventual o estacional. Australia reconoce que el empleo o trabajo infantil realizado fuera del horario escolar y que no sea perjudicial para la salud o el desarrollo del niño, puede constituir una experiencia valiosa capaz de contribuir al desarrollo físico y mental del niño y a las futuras perspectivas de empleo. Los niños pueden a veces realizar labores en su hogar para la empresa de su familia (incluido el trabajo agrícola).

186. Respondiendo a las preocupaciones de la comunidad ante la posibilidad de que el apoyo a los ingresos de jóvenes sin hogar contribuyese a que algunos de ellos abandonaran prematuramente el hogar y, con ello, a la ruptura de la familia, junto con preocupaciones por el hecho de que los padres no participaban suficientemente en el proceso para evaluar las solicitudes con objeto de determinar si una persona joven tenía o no verdaderamente un hogar, el Gobierno introdujo un programa piloto de dos años destinado a aumentar el nivel de reconciliaciones familiares voluntarias.

187. Se financiaron veintiséis organismos locales para experimentar toda una gama de estrategias de intervención temprana tendientes a mejorar el nivel de participación de las personas jóvenes que solicitasen apoyo a los ingresos conforme a la tarifa aplicable a los jóvenes sin hogar en actividades de reconciliación familiar, educación, formación y otras relativas a la comunidad. Las primeras cifras demuestran que, del aproximadamente 54 por ciento de los solicitantes de apoyo a los ingresos conforme a la tarifa de los jóvenes sin hogar comprendidos en el grupo destinatario del programa, alrededor del 25 por ciento acepta su remisión al organismo piloto.

188. Normalmente, Austudy se paga según la tarifa normal, condicionada al examen de los recursos de los progenitores. Los estudiantes pueden recibir un pago independiente superior, exento del examen previo de los recursos paternos, cuando satisfacen alguno de varios criterios de independencia. Uno de estos criterios se refiere a la edad y permite que se pague según la tarifa de joven independiente cuando un estudiante tiene 25 o más años de edad. La edad de la independencia se elevó en 1997 a 25 años, reconociendo la obligación de los padres de contribuir a los gastos de educación de sus hijos cuando tienen medios para hacerlo. (Anteriormente se había rebajado progresivamente la edad de la independencia desde 25 años en 1992 a 22 en 1995 y 1996.)

189. La expresión "familia" no está expresamente definida en la legislación del Commonwealth. No obstante, la interpretación de la ley subraya el compromiso del Gobierno de apoyar a los niños, a las personas con discapacidades, a las personas de edad y a quienes los cuidan, como queda reflejado en la reforma en curso de su política de familia. Si bien la familia nuclear tradicional es la forma predominante de familia (según las tendencias en otros países occidentales), el Gobierno apoya y respeta la elección de los Australianos al definir su propia familia. Reconoce las muchas maneras en que las familias crean y guían sus vidas, incluso haciendo honor a diferencias de raza, origen étnico, cultura y religión, y fomentando la autosuficiencia y la responsabilidad social. El Instituto Australiano de Estudios de la Familia prosigue su investigación sobre la naturaleza, las necesidades y la diversidad de las familias, aportando un acervo de datos para ayudar a la elaboración de políticas de familia equitativas.

190. La mayoría de edad se alcanza generalmente a los 18 años o alrededor de esa edad. Al cumplir los 18 años, los individuos tienen derecho a votar y a comprar y consumir bebidas alcohólicas y tabaco. A los 16 años y nueve meses, tienen asimismo derecho a obtener un permiso de conducir y, a los 18 a casarse, tanto varones como mujeres (o más jóvenes, con el consentimiento apropiado). La Ley del Derecho de Familia considera que los menores de 18 años son niños. Se prevé, sin embargo, que se expidan mandamientos de sustento para personas por

encima de esa edad, cuando el individuo termina su educación o padece una discapacidad física o intelectual.

191. El casamiento se rige en Australia por la Ley del Matrimonio (1961), aprobada por el Parlamento Federal, y que se aplica sin distinción a hombres y mujeres. Existe asesoramiento prematrimonial para las parejas, que deben avisar oficialmente un mes antes su intención de casarse (aunque este plazo puede dispensarse en circunstancias excepcionales).

192. La Ley del Matrimonio prevé un régimen completo referente a la solemnización de casamientos en Australia. Normalmente, no se permite ningún casamiento a menos que las partes en el futuro matrimonio hayan llegado a la edad de 18 años. En circunstancias excepcionales, cuando una de las partes de un propuesto casamiento es menor de 18 años y ha cumplido ya los 16, el tribunal puede conceder su aprobación a que esa persona se case con otra persona determinada de más de 18 años. La Ley del Matrimonio dispone igualmente el reconocimiento de los matrimonios celebrados en el extranjero y, a este respecto, da efecto a la Convención sobre la Celebración y el Reconocimiento de la Validez de los Casamientos de La Haya.

Mantenimiento, protección y fortalecimiento de la familia

193. El Departamento de Seguridad Social administra una serie de beneficios destinados a ayudar a los padres a sufragar los costos de la crianza de los hijos y a cuidar de personas mayores y personas con discapacidades. Además, el Departamento de Sanidad y Servicios de la Familia ofrece apoyo en forma de programas orientados a asistir a las familias, a las personas mayores y personas con discapacidades y a quienes cuidan de ellos. Administra además programas especialmente diseñados para satisfacer las necesidades de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Los progenitores solos pueden conseguir esa asistencia.

194. Otras unidades familiares no tradicionales se tratan caso por caso. La salud de todas las familias australianas está protegida por el seguro de enfermedad. El Gobierno federal paga el 85 por ciento de las medicinas más a menudo solicitadas. Apoya igualmente a todas las familias con niños, asignando especial prioridad a las de ingresos bajos. Los programas para las familias y los niños son examinados y actualizados permanentemente para garantizar que se atiende de la manera más eficaz a las necesidades de las familias y los niños australianos. El Departamento de Seguridad Social administra además una serie de beneficios orientados a ayudar a los padres a sufragar los costos de la crianza de los hijos. Estos beneficios se detallan más adelante.

195. Además, el Departamento de Sanidad y Servicios de la Familia federal y los departamentos de los gobiernos de los estados prestan apoyo en forma de programas específicos para ayudar y sostener familias, a personas mayores y personas con discapacidades y a quienes los cuidan. Ambos niveles de gobierno administran programas especialmente diseñados para satisfacer las necesidades de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.

196. En los sectores públicos federal y de algunos estados, se prevé la licencia de maternidad pagada durante períodos variables para la mayoría de las empleadas. En otro caso existe la licencia sin goce de sueldo. En el sector

privado, los derechos a licencia son objeto de diversos acuerdos laborales. La licencia de maternidad, inclusive la licencia sin goce de sueldo, rige para los padres al igual que para las madres.

197. La Ley sobre la Discriminación por Razones de Sexo de 1984 tipifica como delito despedir a empleados por motivo del embarazo, posible embarazo, estado civil o cargas de familia, salvo en los casos exentos por la Ley.

198. Es obligatorio para las futuras madres ausentarse durante seis semanas antes de la fecha estimada del parto, a menos que se presente un certificado médico de aptitud. Es también obligatorio un período de recuperación de seis semanas tras el parto, a menos que se conceda una exención médica. La finalidad de estas reglamentaciones es proteger la salud y la seguridad de la madre y el niño. El seguro de enfermedad da acceso a los servicios médicos y hospitalarios a todos los australianos y a ciertas categorías de visitantes de Australia. Las prestaciones de maternidad y parentales y los beneficios de la seguridad social son medios probados de favorecer a los más necesitados de asistencia.

Comprenden:

- prestación de maternidad: un pago por una sola vez para contribuir a los costos vinculados con el nacimiento de un bebé;
- beneficios especiales: para apoyar a una mujer soltera antes y después del parto;
- pensión para progenitores solos: para apoyar a una madre o un padre solteros;
- prestación familiar: existe para la mayor parte de los padres. Su cuantía está condicionada a un examen de los recursos del interesado y relacionada con la edad de los niños;
- prestación parental: para potenciar los ingresos de un progenitor que cuide a los niños en el hogar; y
- prestación de maternidad para inmunización: para alentar a los padres a inmunizar completamente a sus hijos.

199. Nuestro sistema actual ha evolucionado a partir del pago de una Dotación de los Hijos, beneficio no condicionado al previo examen de los recursos, instituido en 1941. El apoyo a los ingresos de la madre soltera se introdujo en 1973 y se extendió a los padres solteros en 1977. Al cabo del tiempo, la asistencia ha evolucionado para reflejar diferentes circunstancias familiares y velar por que los más necesitados reciban asistencia.

200. La Ley del Derecho de Familia de 1975, en la medida en que se relaciona con asuntos que afectan a los niños y la aportación de mejores mecanismos sustitutivos de resolución de controversias, fue modificada por la Ley de Reforma del Derecho de Familia de 1995. Estas modificaciones entraron en vigor el 11 de junio de 1996. Las nuevas disposiciones contienen un artículo objetivo orientada a cerciorarse de que los niños reciben de sus progenitores una atención suficiente y correcta para ayudarles a llegar a su pleno potencial y a

asegurarse de que los padres cumplen sus obligaciones y hacen frente a sus responsabilidades relativas al bienestar y al desarrollo de sus hijos (60B1)).

201. Conforme a las nuevas disposiciones ninguno de los progenitores es único responsable con exclusión del otro a menos que lo acuerden por escrito o que el Tribunal así lo ordene. El significado de este cambio es que ninguno de los padres tiene un derecho de origen legal para adoptar decisiones en relación con el cuidado y el control del niño con exclusión del otro. El Tribunal está, empero, facultado para modificar los incidentes de la responsabilidad de los padres si esto corresponde a los mejores intereses del menor.

202. El enfoque de la nueva legislación es conforme con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño que Australia ratificó el 17 de diciembre de 1990. Sírvanse remitirse además al artículo 32 del informe de Australia de 1996 en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño. (Véanse los apéndices 45 a 54 para información complementaria sobre la protección de este derecho.)

Aportaciones específicas de los estados: Nueva Gales del Sur

203. En Nueva Gales del Sur (NGS), la parte 4 de la Ley de Relaciones Laborales de 1996 garantiza a todos los trabajadores a jornada completa y a tiempo parcial con por lo menos 12 meses de servicio continuo el derecho a 52 semanas de licencia de paternidad sin goce de sueldo. Esta protección se ofrece tanto a hombres como a mujeres en relación con el nacimiento o la adopción de un niño, si bien ambos padres no pueden tomarse al mismo tiempo la licencia de paternidad. La protección de la licencia de paternidad prevista por la Ley de Relaciones Laborales puede ser ampliada, pero no disminuida, mediante laudos laborales y acuerdos de empresa entre empleadores y empleados.

204. En NGS, las personas pueden consentir en prácticas sexuales heterosexuales o lesbianas a los 16 años de edad y en prácticas sexuales homosexuales a los 18 años. Una persona puede ser declarada culpable de un delito a los 10 años de edad. El Ministerio Público debe probar que un delincuente de 10 a 14 años de edad conocía que sus actos eran "gravemente erróneos" para que pueda ser declarado culpable.

205. En NGS la Ley de Reforma de la Educación de 1990 dispone que los niños de menos de 15 años deben asistir a la escuela y les impide que entren en la fuerza de trabajo a jornada completa. No obstante, el Ministro de Educación y Formación puede expedir certificados (artículo 25) que exoneren a ciertos niños de menos de 15 años de la asistencia a la escuela. No se impide que estos niños acepten empleos a jornada completa. El artículo 51 crea un delito de exponer a niños a peligros en el empleo (cuando se expone a riesgos el bienestar físico o emocional del niño). El artículo 52 exige que los empleadores de cierto tipo (por ejemplo, los vendedores puerta a puerta y la industria del espectáculo) sean autorizados por el Departamento de Servicios de la Comunidad para poder emplear a niños.

206. En agosto de 1997, la Comisión Real sobre el Servicio de Policía de NGS emitió su informe sobre la encuesta acerca de la pedofilia, que contenía 140 recomendaciones para la protección de los niños contra los malos tratos. El Gobierno ya ha puesto en práctica más de un tercio de esas recomendaciones:

estableció el Organismo de Observancia de la Protección del Niño para descubrir y procesar a los delincuentes sexuales contra niños y se ha comprometido a crear una Comisión del Niño para atender a las necesidades y los intereses de los menores.

Artículo 11

El derecho a un nivel de vida adecuado

207. El derecho a un nivel de vida adecuado está reconocido y apoyado en Australia por un sistema de seguridad social que protege a los más desfavorecidos en la sociedad - los desempleados, los enfermos y los ancianos, los pueblos indígenas y las personas con discapacidades. Los beneficios específicos, junto con una atención sanitaria gratuita o de bajo costo, contribuyen a asegurar que los más necesitados mantienen un nivel de vida adecuado. El empeño de Australia por mantener y mejorar los niveles de vida queda de manifiesto en los procesos legislativos, en los diversos niveles de gobierno y en las actividades coordinadas de muchos de sus departamentos.

Australianos indígenas

208. La situación sanitaria de los australianos indígenas es apreciablemente peor que la de la población en general. La población indígena sufre una incidencia superior de la enfermedad y muere a una edad más temprana que los australianos no indígenas. Esto es así respecto de casi todos los tipos de enfermedad o condición sobre los que se dispone de información. Reconociendo este hecho, el Departamento de Sanidad y Servicios de la Familia (DHFS) del Commonwealth trabaja en colaboración con los servicios sanitarios controlados por las comunidades aborígenes, la Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres y los gobiernos de los estados en estrategias coordinadas para mejorar la situación sanitaria de la población indígena.

209. La Oficina de Servicios Sanitarios para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres del DHFS ha elaborado una serie de estrategias concretas para mejorar la situación sanitaria general de la población indígena. Estas estrategias se ajustan a la prioridad del DHFS de ayudar a la población indígena a acceder al nivel general de atención primaria.

Australianos de edad avanzada y personas con discapacidades

210. Los australianos de edad y las personas con discapacidades tienen pronto acceso a un marco general de servicios de atención de alta calidad y económicos y al tratamiento médico y hospitalario subvencionado. Se han elaborado eficaces estrategias para orientar los servicios residenciales de atención más costosos hacia quienes no tienen realmente otra elección. El Programa Nacional de Atención en el Hogar y la Comunidad ofrece toda una gama de servicios, inclusive la ayuda doméstica, el cuidado personal, los servicios de alimentación, la asistencia en el transporte y la atención comunitaria comunidad, para asegurar que las personas de edad que vivan en su hogar mantengan un nivel de vida adecuado.

211. Para ayudar a las personas con discapacidades a participar en la vida de la comunidad como ciudadanos en condiciones de igualdad, el Gobierno pone en práctica un plan para garantizarles el acceso a una serie de servicios y

programas. La Ley sobre la Discriminación por Discapacidad de 1992 contiene un mecanismo para formular normas, conocidas como normas de discapacidad, en relación con el empleo, la educación, el alojamiento, la prestación de servicios e instalaciones de transporte público, y la administración de las leyes y los programas del Commonwealth respecto de las personas con una discapacidad. Desde 1995 está en marcha el desarrollo de normas. Las ventajas del enfoque "normativo" es proporcionar un medio participativo y proactivo de lograr los objetivos de la Ley sobre la Discriminación por Discapacidad de 1992, proporcionando certeza a todos los interesados, en lugar del proceso alternativo, menos seguro, ineficiente y menos equitativo, impulsado puramente por las reclamaciones.

212. El Servicio de Rehabilitación del Commonwealth ayuda a los australianos con una discapacidad a conseguir o mantener un empleo y a vivir tan independientemente como sea posible dentro de la comunidad.

El abastecimiento alimentario australiano

213. El abastecimiento alimentario de Australia es abundante y los datos sugieren que las deficiencias nutricionales deben ser poco comunes. El contenido energético del suministro alimentario australiano nunca ha sido inferior a 12,9 megajoules por día, valor que excede de la media ponderada de ingesta dietaria recomendada. Además, la ingesta australiana de proteínas excede de la cantidad mínima recomendada. Dado que las causas principales de muerte y morbilidad relacionadas con la dieta son enfermedades vinculadas con el exceso de alimentación y las fuentes alimentarias de poca calidad, el Gobierno financia la educación comunitaria para alentar a la población a que coma alimentos nutritivos. Se hace hincapié en velar por que la población esté bien informada sobre los posibles riesgos para la salud y motivada para explorar nuevas oportunidades para mejorarla.

214. Australia goza de los beneficios de continuas mejoras en estas esferas. Actualmente, se desarrolla un sistema regulatorio de los alimentos coherente en el plano nacional. Abarca una norma de higiene alimentaria coordinada en todo el Estado, con sistemas convenidos de vigilancia de los alimentos, clasificación de los riesgos y supervisión del negocio alimentario. Los nuevos dispositivos de vigilancia aligerados aumentarán la confianza del consumidor y garantizarán además que los productos alimenticios que entren en el mercado de exportación se conformen con las normas más exigentes. Aunque el sistema aumentará la protección de la salud y la seguridad públicas, al eliminar cargas reglamentarias innecesariamente complejas se logrará que la producción de alimentos siga siendo una industria competitiva y viable.

215. Australia tiene como meta unas industrias rurales eficientes y orientadas hacia el mercado, capaces de satisfacer su demanda a bajo costo, con la máxima sostenibilidad ecológica. La política rural está configurada por las actividades de investigación del Departamento de Actividades Económicas Primarias y Energía y la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO) y los organismos de los Gobiernos de los estados.

El derecho a una vivienda adecuada

216. Aunque la mayoría de la población puede alojarse por sus propios medios, las personas con bajos ingresos y los desempleados no pueden muchas veces competir en el mercado de la vivienda. En reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada para todos, es posible obtener asistencia en ese sentido. El Departamento de Seguridad Social del Gobierno Federal está encargado de las estrategias para prestar asistencia a las personas con bajos ingresos y a personas desfavorecidas en general con el fin de satisfacer sus necesidades en materia de vivienda. La mayor parte de la asistencia se presta por conducto del Acuerdo del Commonwealth con los Estados sobre la Vivienda (CSHA) y el Programa de Asistencia a los Alquileres.

217. El CSHA es un acuerdo multilateral entre el Commonwealth y cada estado o territorio, conforme al cual el Gobierno proporciona subvenciones anuales para la asistencia en materia de vivienda. El Acuerdo está incorporado a la legislación (la Ley de Asistencia en Materia de Vivienda de 1989) y se propone ayudar a cada australiano dándole acceso a una vivienda asequible, segura y apropiada para sus necesidades. En 1995-1996, el Commonwealth proporcionó 1.062 millones de dólares a los estados y territorios para la vivienda pública y asistencia conexas.

218. Asistencia a los Alquileres (RA) es un programa administrado y financiado por el Gobierno Federal mediante el sistema de seguridad social, con un costo anual superior a 1.500 millones de dólares. Se trata de un pago complementario para ayudar a sufragar el costo de la vivienda de alquiler privada que pueden reclamar las personas que reciban pensión y prestaciones y a las familias con bajos ingresos.

219. El Programa de Asistencia mediante Alojamiento Subvencionado es una de las principales respuestas del Gobierno al problema de la falta de techo. Es un programa financiado conjuntamente por el Commonwealth y los Estados que proporciona servicios de alojamiento subvencionado y otras ayudas a las personas sin hogar o con peligro inminente de llegar a quedarse sin él. Este programa tiene por fin ayudar a las personas en situación crítica a alcanzar el máximo grado de autosuficiencia e independencia. La atención se centra en el restablecimiento de los vínculos familiares, cuando sea posible, y la reintegración a la corriente principal de la sociedad. Además de ocuparse de las necesidades inmediatas de techo, el programa presta apoyo para ayudar a las personas a lograr su independencia.

220. La legislación sobre derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos es de competencia propia de cada Estado y Territorio. Si bien varían los puntos concretos de cada instrumento legislativo se refieren, en general a arrendamientos normales, administración de garantías, adecuación de los locales, mantenimiento y reparación, seguros y otros asuntos de interés para los participantes. Además, los inquilinos están protegidos por la Ley sobre la Discriminación Racial, la Ley sobre la Discriminación por Razones de Sexo y la Ley sobre la Discriminación por Discapacidad. Estas Leyes procuran que no se niegue la vivienda a las personas sobre la base de la raza, el sexo o la discapacidad.

221. El Código de la Construcción de Australia es un conjunto uniforme de requisitos técnicos para el diseño y la construcción de edificios y otras estructuras. Su objetivo básico es asegurar que se mantengan normas aceptables de resistencia estructural, seguridad en caso de incendio, salud y amenidad. Las viviendas deben estar dotadas de instalaciones para cocinar, lavar la ropa y tener instalaciones sanitarias adecuadas, alturas mínimas de techo y ser a prueba de humedad para prevenir las condiciones insalubres. Esas normas, junto con las que rigen la corrección de las conducciones y las instalaciones eléctricas protegen la salud y la seguridad de los ocupantes.

Vivienda para los australianos indígenas

222. El Departamento de Seguridad Social proporciona recursos para proveer y desarrollar la vivienda indígena mediante el Programa de Arrendamiento de Viviendas para los Aborígenes, por el que se ponen a disposición de los estados y territorios por conducto de CSHA 91 millones de dólares anuales en fondos garantizados. Aunque la aplicación concreta de los fondos varía según los estados, los mecanismos de financiación y de programación hacen una importante contribución al alojamiento específicamente indígena en general y al desarrollo de la vivienda comunitaria planificado y controlado por australianos indígenas en particular.

223. Los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres presentan una tasa de propiedad de la vivienda estadísticamente inferior (el 28 por ciento, en comparación con el 60 por ciento del resto de la población). Sus necesidades específicas en la materia han sido reconocidas en forma de un exitoso Plan de Propiedad del Hogar (36,78 millones de dólares de nuevos préstamos en 1996-1997 y una cartera total de préstamos de 240,4 millones). La Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres administra además el Programa de Vivienda e Infraestructura Comunitarias (aproximadamente 215 millones de dólares al año), cuyo fin es incrementar el número de aborígenes isleños del Estrecho de Torres con acceso a una vivienda adecuada, facilidades infraestructurales y servicios municipales esenciales compatibles con sus necesidades expresadas y adecuados a las mismas. El programa comprende corrientes de financiación regional, estatal y nacional para el suministro y mantenimiento de viviendas comunitarias e infraestructura esencial en las comunidades de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. (Véanse los apéndices 55 a 61 para información complementaria sobre la protección de este derecho.)

Aportaciones específicas de los estados: Australia del Sur

224. Australia del Sur está empeñada en un programa en curso de renovación urbana. Prosiguió la reurbanización de los suburbios septentrionales de Elizabeth y Hillcrest donde había muchos edificios de vivienda pública de antiguo estilo. Se comenzaron nuevos proyectos en las zonas rurales de Port Lincoln y Risdon Park. Se hacen estudios de viabilidad para otras zonas con objeto de regenerar comunidades y proporcionar un ambiente mejor y un mayor nivel de alojamiento y amenidad.

225. La Ley de Viviendas Cooperativas y Comunitarias de 1991 de Australia del Sur funciona como un instrumento legislativo habilitante para alentar estrategias mediante las cuáles los grupos comunitarios puedan facilitar vivienda y prestar otros servicios conexos.

Nueva Gales del Sur

226. En diciembre de 1995, el Ministro de la Vivienda de Nueva Gales del Sur (NGS) publicó un Libro Verde en el que se esbozaba una serie de estrategias para reformar la ayuda en materia de vivienda a las personas con bajos ingresos, incluido el aumento de las posibilidades de elegir opciones de ayuda para esas personas, mejorar la calidad de las existencias de vivienda pública y estimular las inversiones del sector privado en la vivienda pública.

Victoria

227. La legislación de Victoria ha creado el Grupo de Examen de la Discapacidad Intelectual, un mecanismo oficial de apelación para proteger los derechos de las personas con una discapacidad intelectual. El Grupo ofrece la posibilidad de una apelación independiente y externa para personas con una discapacidad cuando existe un agravio sobre su cualificación para obtener servicios, el contenido de su plan general de servicios, su traslado a un centro de formación residencial, la restricción de movimientos y la separación por zonas. Cuando una persona vive en una residencia segura, se prevé también un examen cada 12 meses del lugar al que ha sido destinada.

Artículo 12

El derecho al disfrute de la salud física y mental

228. Reconociendo el derecho de todos a gozar del más alto nivel alcanzable de salud física y mental, Australia desempeña un papel clave en la reforma de la política sanitaria internacional, con particular hincapié en la estrategia de la Renovación de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud. Además, para elevar al máximo la eficacia de la cooperación sanitaria internacional, nos estamos acercando a una norma internacional de sistemas reglamentarios para sustancias, productos químicos y alimentos terapéuticos.

Salud pública

229. La política de salud pública está marcada por la importancia que se da al continuo mejoramiento de la salud general de la población de Australia. El Programa de Salud Pública de Australia comprende actividades orientadas a comprender y controlar los factores determinantes de la enfermedad, promover la buena salud y reducir la exposición pública a los riesgos con que se tropieza como consecuencia del estilo de vida o del medio ambiente.

230. Los gobiernos del Commonwealth, los estados y los territorios han hecho suyos en colaboración objetivos nacionales para introducir mejoras en cinco esferas nacionales de prioridad sanitaria -prevención del cáncer, salud mental, prevención y lucha contra las lesiones, enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus. Este enfoque nacional, conocido como la iniciativa de Esferas Prioritarias Nacionales de Sanidad, procura centrar la atención pública y la política sanitaria en las esferas que más contribuyen a la incidencia de las enfermedades en la comunidad, en particular cuando esta incidencia puede ser apreciablemente reducida. Se han elegido las enfermedades y condiciones objeto de esta colaboración porque son esferas en las que pueden alcanzarse logros significativos en relación con la salud de la población de Australia.

231. El Commonwealth, todas las autoridades de estados y territorios, el Consejo Nacional de Investigación Sanitaria y Médica y el Instituto Australiano de Salud y Bienestar han establecido una Asociación Nacional de Salud Pública oficial, atendiendo a la necesidad de que exista un enfoque nacional del tema. Al representar, por primera vez en la historia de nuestra salud pública un criterio integrado, la Asociación procura elevar el perfil de la salud pública en Australia mejorando la situación sanitaria de los australianos, en particular los grupos de la población más expuestos a riesgos.

232. Las estrategias nacionales de salud pública toman en consideración aspectos culturales, sociales y económicos, ocupándose de diversas cuestiones sanitarias que afectan a la población australiana de todas las edades. Existe un cierto número de estrategias nacionales, incluidas las referidas a esferas nacionales de prioridad sanitaria (orientadas a reducir la incidencia en Australia de la muerte temprana evitable, la morbilidad, las lesiones y la discapacidad). La gran mayoría de las estrategias de salud pública se orientan a reducir la incidencia global de la enfermedad, y comprenden el continuo de la atención desde la prevención hasta el tratamiento y la gestión, y están respaldadas por pruebas basadas en una investigación adecuada.

Acceso equitativo a los servicios sanitarios

233. La financiación de la atención sanitaria y la prestación de sus servicios es una mezcla de la actividad de los sectores público y privado, cuya responsabilidad comparten el Commonwealth y los gobiernos de los estados y territorios. El gasto nacional total en sanidad se sitúa en torno a la media de países de la OCDE y, en términos generales, la comunidad goza de un elevado nivel de atención sanitaria. A fin de dirigir más eficazmente los recursos hacia donde más se necesitan y continuar mejorando los resultados sanitarios para la comunidad, Australia fortalece la base empírica de la lista de beneficios de la atención médica pública. La iniciativa garantizará a los consumidores que los procedimientos médicos nuevos y los ya existentes han sido rigurosamente evaluados para comprobar su inocuidad, eficacia y adecuación.

234. Aunque todavía no hemos llegado al equilibrio óptimo entre la financiación pública y la privada, existen servicios médicos y productos farmacéuticos de bajo costo al alcance de quienes los necesiten, mientras que hay grupos destinatarios específicos (poblaciones aborígenes y de isleños del Estrecho de Torres, personas de la tercera edad y personas con una discapacidad) que pueden acceder a servicios expresamente adecuados a sus necesidades. Conforme a un Memorando de Entendimiento con la Comisión para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres (ATSIC), existe el compromiso de velar por que todas las esferas sanitarias se ajusten a las necesidades de esas poblaciones. Las poblaciones indígenas se hallan en una situación sanitaria estadísticamente inferior al resto de la población, por lo que se elaboran y aplican iniciativas con objeto de reducir las condiciones y enfermedades específicas que predominan entre ellas. En particular, el Plan de Acción Nacional para la Diabetes tiene por fin el diagnóstico temprano de la diabetes en las comunidades indígenas y migrantes. Se han creado asociaciones entre la comunidad aborígen, los estados, los territorios y la ATSIC orientadas a asegurar que todas las partes trabajen conjuntamente con el fin de mejorar la planificación y la prestación de los servicios generales y los desarrollados específicamente para las poblaciones aborígenes y de isleños del Estrecho de Torres.

La Estrategia Nacional de Salud Mental

235. La Estrategia es un compromiso de los Gobiernos de los estados, los territorios y el Commonwealth para mejorar las vidas de las personas afectadas de una enfermedad mental. Se orienta a promover la salud mental de la comunidad australiana e impedir el desarrollo de problemas y desórdenes de salud mental. Las orientaciones de la política de salud mental se han alejado de "soluciones" arcaicas de la enfermedad mental, como la separación y la institucionalización y hacia el fomento de un sistema de tratamiento y apoyo con base en la comunidad.

236. La coherencia de la legislación sobre salud mental es parte integrante del proceso de reforma de la sanidad mental de Australia. Se ha confeccionado legislación modelo sobre la salud mental bajo los auspicios del Grupo de Trabajo Asesor del Consejo Nacional de Salud Mental del Ministerio de Sanidad australiano, para ayudar a los estados y territorios a alcanzar el objetivo de elaborar una legislación coherente. En definitiva, la estrategia procura comprometer a todos los miembros de la comunidad en una asociación para eliminar los malos tratos, la injusticia, la incomprensión, la ignorancia, la estigmatización y la discriminación que rodean a la enfermedad mental, de modo que no se toleren abusos de los derechos humanos de las personas afectadas.

237. Un Plan de Acción para el Bienestar Emocional y Social de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres, de 20 millones de dólares, responde a la elevada y no satisfecha necesidad de atención a la salud mental en las comunidades indígenas. Se concentra en el asesoramiento en casos de trauma y duelo, iniciativas de formación, el desarrollo de servicios de salud mental de base cultural y un programa sobre el suicidio juvenil, y realiza investigaciones acerca de los factores que repercuten en la salud mental y emocional de las poblaciones indígenas.

238. La Estrategia Nacional sobre el Suicidio Juvenil determina los enfoques acordes con las mejores prácticas para definir los riesgos de suicidio y para desarrollar el apoyo y la intervención eficaces para los jóvenes afectados. Dado que éstos constituyen una alta proporción de la población juvenil en zonas rurales, el Gobierno financia servicios de asesoramiento en zonas rurales y apartadas y proporciona actividades que ayudan a los jóvenes y a sus familias a superar crisis.

239. Dada la alta proporción de refugiados por razones humanitarias que han padecido abusos contra los derechos humanos, Australia ha establecido un Programa de Asistencia a Supervivientes de la Tortura y el Trauma, con un servicio disponible en todas las ciudades capitales.

240. Del mismo modo que otras naciones, Australia está investigando mejores medios para reducir el mal uso de las drogas ilícitas y el alcohol, en particular en relación con los jóvenes. La Estrategia Nacional en materia de Drogas reconoce la complejidad de las cuestiones relacionadas con los estupefacientes y adopta un enfoque amplio, que insiste en la cooperación entre organismos encargados de hacer cumplir la ley, sectores sanitarios, instituciones educativas, industria privada y organizaciones no gubernamentales. En 1997, el Consejo de Gobiernos Australianos decidió que la Estrategia Nacional contra las Drogas Ilícitas Tough on Drugs' (Duros con las drogas) será la siguiente fase de la nueva estrategia nacional en esta materia que se aplicará

hasta el año 2002. La consignación de otros 189,1 millones de dólares equilibra los esfuerzos por interceptar a los traficantes de droga con recursos para la educación, el tratamiento de los consumidores y la investigación. La Estrategia Nacional en Materia de Drogas continuará concentrándose en los daños causados por todas las drogas, incluidos el alcohol y el tabaco.

Salud de la mujer

241. Australia es uno de los pocos países que tienen una Política Nacional de Salud de la Mujer. La política se desarrolló a partir de consultas con individuos y organizaciones que representan a más de un millón de mujeres en todo el país, y tiene por fin mejorar la salud y el bienestar femeninos en todos los grupos de edad. La estrategia precisa las cuestiones sanitarias específicas de la mujer - salud reproductiva, salud de las mujeres que envejecen, violencia contra la mujer, necesidades sanitarias de las mujeres que cuidan a otras personas, salud mental y emocional, ocupación, salud y seguridad y efectos sobre la salud de los estereotipos sobre el papel de cada sexo. Se ha establecido una gama de servicios de atención sanitaria primaria, con lo que se consigue que cantidades apreciables de mujeres rurales e indígenas, así como de mujeres con diferentes antecedentes culturales, puedan obtener acceso a los cuidados apropiados. Están firmemente asentadas iniciativas orientadas a atender a las necesidades sanitarias especiales de la mujer, como los programas para la detección anticipada del cáncer de los pechos y la matriz. Como reflejo de nuestro compromiso con el derecho de todos los ciudadanos a gozar de buena salud, las campañas se ajustan a las necesidades de una población pluricultural.

242. En el Presupuesto Federal de 1995-1996, se asignó financiación por algo más de tres millones de dólares durante cinco años a un Programa Nacional de Educación sobre la Mutilación Genital Femenina. Este Programa tiene por fin proporcionar una intervención culturalmente apropiada tendiente a impedir la ocurrencia de la mutilación genital femenina en este país y prestar asistencia a las mujeres y muchachas que viven en Australia y que ya hayan sido sometidas a esta práctica. Se dirige a personas de comunidades que practican tradicionalmente esa mutilación y que viven actualmente en Australia (procedentes de más de 28 países) y a los trabajadores sanitarios y de la comunidad que prestan servicios a estos países.

243. Tras el Año Internacional de la Familia, el Gobierno examina de cerca cuestiones necesitadas de seguimiento. Hasta el momento, hemos instituido una Estrategia Nacional para la Prevención de los Malos Tratos y el Abandono de Menores y un Programa de Acción Nacional en respuesta a la Declaración Mundial de las Naciones Unidas sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño. Un resultado práctico de esta iniciativa es la financiación sustancial de la educación para la paternidad. Los Servicios de la Familia y el Niño, de concierto con los interesados claves, trabaja en sentido estratégico para reducir la incidencia de los malos tratos y el abandono de menoreess, los jóvenes sin techo y la violencia doméstica. Se hace asimismo hincapié en la necesidad de opciones más variadas para las parturientas, con centros de atención del parto que ofrezcan toda una gama de alternativas a lo que algunas mujeres estiman como procesos de asistencia en el parto médicamente invasores. Una colaboración entre programas ha añadido nueve servicios de partos más para las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres. A fin de elevar al máximo las posibilidades de vida y salud de cada niño, el Gobierno ha adoptado enérgicas medidas para

estimular la inmunización contra enfermedades infantiles prevenibles y financian una Campaña de Concienciación sobre la Lactancia Natural.

Australianos de edad avanzada

244. A medida que la población envejece, existe un imperativo cada vez más fuerte de asegurar que las personas mayores tengan acceso a la atención sanitaria y que se mantenga su calidad de vida. Conjuntamente con los Gobiernos de los estados y territorios y las organizaciones no gubernamentales, Australia desarrolla un enfoque nacional para mantener y mejorar la salud de las personas de edad avanzada. Reconociendo que la vida independiente aumenta la dignidad de esas personas, el Gobierno presta asistencia a los australianos de más edad para que vivan en sus propios hogares tanto como sea posible, y apoya a quienes los cuidan en la atención que les prestan.

Australianos con discapacidad

245. Los Gobiernos federal y de los estados financian programas que fomentan la participación en el trabajo y la vida de la comunidad de personas con discapacidades. Se presta gran atención a las necesidades de las familias y las personas que cuidan de discapacitados. Como reconocimiento de los beneficios para la salud de una participación activa en la sociedad, los servicios de empleo para discapacitados proporcionan formación y tácticas para conseguir trabajo a quienes las necesiten.

Salud rural

246. La Estrategia Nacional de Salud Rural de Australia establece un marco para garantizar un acceso sostenido y mejorado a los servicios sanitarios desde zonas rurales y apartadas - crítico en uno de los continentes menos densamente poblados. La estrategia, iniciativa conjunta de Commonwealth, los estados, los territorios y el sector comunitario de la salud rural, contiene una serie de medidas para mejorar la contratación y la retención de profesionales de la salud rural, incluidos médicos rurales, enfermeros, trabajadores sanitarios conexos y trabajadores sanitarios indígenas. Apoya el desarrollo y dotación de recursos de programas que permitan el acceso a la gama más amplia posible de los servicios sanitarios necesarios. En zonas apartadas, los australianos acceden a los servicios y profesionales sanitarios mediante el transporte sanitario, como el Royal Flying Doctor Service y otros organismos de rescate médico y sanitario, así como con la nueva tecnología, como la celebración de videoconferencias y el uso de la transmisión de información electrónica. Se fomentan a nivel nacional nuevos modelos y medios para prestar servicios sanitarios a los australianos rurales o que viven en zonas apartadas.

247. Aunque existe una amplia oferta de médicos generales en Australia (1 a 800 es la proporción de médicos generales con respecto a la población), hay algunas zonas rurales con un acceso muy limitado a los servicios médicos. Para hacer frente a esta desigualdad, el Gobierno desarrolla una serie de iniciativas para alentar a los médicos a que practiquen en zonas rurales. Por ejemplo, el Programa de Incentivos Rurales, que ofrece un paquete de estímulos (incluida la formación especializada), trata de atraer y mantener a médicos generales en comunidades alejadas. Australia es un vasto continente y en consecuencia, muchas personas viven considerablemente aisladas de los grandes centros urbanos.

248. Varios gobiernos de estados y territorios asignan recursos apreciables para poner a prueba un sistema de "telemedicina" - una iniciativa de atención sanitaria que utiliza comunicaciones asistidas por tecnología para facilitar servicios en localidades remotas. En Victoria, las iniciativas en materia de educación, formación e investigación comprenden la promoción de enfoques pluridisciplinarios para contratar y retener a profesionales de la sanidad rural, la educación y formación especializada para satisfacer las necesidades urgentes y crónicas de atención de los habitantes del campo y tecnologías de telesalud e Internet.

La Estrategia Nacional en relación con el VIH/SIDA

249. Australia goza de muy buena reputación por los buenos resultados conseguidos en la lucha contra la propagación del VIH/SIDA. Las políticas seguidas estimulan la educación y la conciencia en la materia, y se basan en desarrollar, fomentar, valorizar y reforzar las asociaciones sanitarias en todo el país. La Estrategia Nacional de Salud para los Australianos Indígenas, basada en el análisis de los datos de la salud pública, hace hincapié en que el mejoramiento de la salud sexual de las poblaciones aborígenes y de isleños del Estrecho de Torres no es primariamente un asunto de cambio de la conducta sexual; en vez de ello, depende de la prestación de asistencia sanitaria primaria apropiada y completa. La Estrategia esboza medidas para fortalecer la capacidad de los servicios primarios para ejecutar programas dirigidos a toda la población en la esfera de la salud sexual y mejorar los servicios de educación y tratamiento, cuidado y apoyo para las personas que viven con VIH/SIDA. Existe el propósito de que el Plan de Incentivos Rurales ayude también en lo que se refiere al desequilibrio en la situación sanitaria de los indígenas.

Higiene ambiental e industrial

250. Se mantiene atentamente la vigilancia sanitaria ambiental para proteger a la comunidad de la exposición a productos químicos y bacterias nocivos. Aunque se han hecho valiosos trabajos para mejorar la calidad del aire, el agua, el suelo y los productos químicos, no es posible derivar evaluaciones cuantitativas de la prevención de enfermedades conseguida con esta labor, dada la falta de datos suficientes sobre la morbilidad y la mortalidad atribuible a estas causas. La Ley de Salud y Seguridad Ocupacional aspira a proteger a los trabajadores de condiciones de trabajo peligrosas e insalubres y se referza mediante campañas públicas de sensibilización centradas en la seguridad en el lugar de trabajo. Véanse además los artículos 6, 18, 24 y 24 del informe de Australia de 1996 acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño. (Véanse en particular los apéndices 62 a 68 para información complementaria sobre la protección de este derecho.)

Aportaciones específicas de los estados: Nueva Gales del Sur

251. Nueva Gales del Sur (NGS) ha elaborado una Estrategia de Información sobre la Salud de los Indígenas para aumentar la base de datos del Estado acerca de la utilización por la población aborígen de los servicios sanitarios y desarrolla, conjuntamente con el Commonwealth, indicadores de rendimiento para ayudar a mejorar la prestación de servicios a la población aborígen. También se han hecho públicas una estrategia de salud mental y una estrategia de salud familiar de los aborígenes.

252. NGS experimenta también actualmente el Proyecto de Infraestructura Sanitaria Ambiental, cuya finalidad es una prestación coordinada de los servicios gubernamentales (Commonwealth, estado y gobierno local) para elevar los niveles de sanidad ambiental en ciertas comunidades de aborígenes. Se han llevado a cabo amplias consultas con estas comunidades y se han diseñado proyectos para satisfacer las necesidades así concretadas. Se han añadido igualmente programas de formación para aumentar el empleo y proporcionar a las comunidades las calificaciones necesarias para mantener las viviendas y la infraestructura.

253. En 1997 el Gobierno de NGS introdujo importantes modificaciones a la Ley de Salud Mental para permitir una intervención más temprana cuando una persona afectada de una enfermedad mental esté necesitada de cuidados. Las modificaciones abarcan una definición revisada de la "persona mentalmente enferma" necesitada de cuidados, para que abarque a una persona que se enfrenta no sólo con riesgos físicos sino también con perjuicios financieros, y daños a parientes cercanos y a la reputación. Otras medidas comprenden cambios en el Programa de Visitadores Oficiales para asegurarse de que responde a las necesidades de las personas afectadas de una enfermedad mental.

254. Estos cambios se han hecho tras largas consultas con la comunidad, grupos de consumidores y profesionales, para mejorar los servicios destinados las personas con enfermedades mentales. El Gobierno de NGS reconoce que el marco legislativo y los servicios de salud mental deben trabajar conjuntamente para hacer frente a las necesidades de esas personas. Además de importantes reformas legislativas, la financiación recurrente de servicios de salud mental se ha incrementado en otros 27 millones de dólares desde marzo de 1995. El Gobierno continuará trabajando para lograr que las personas con enfermedades mentales en todo NGS dispongan de servicios y cuidados coordinados.

255. NGS ha consignado 3,4 millones de dólares para practicar ensayos innovativos de telemedicina en zonas regionales de NGS, incluidas Wilcannia, Wagga, Albury y Tamworth. Los proyectos intentan aumentar el intercambio de información entre médicos regionales y de ciudad y mejorar el acceso a servicios especializados en Sydney, y cubrir los campos de la psiquiatría, la radiología, la patología, la pediatría, la oftalmología y la obstetricia.

Victoria

256. La Estrategia Nacional de Salud Rural de Australia establece un marco para garantizar un acceso sostenido y mejorado a los servicios sanitarios desde zonas rurales y apartadas - crítico en uno de los continentes menos densamente poblados. La estrategia, iniciativa conjunta de Commonwealth, los estados, los territorios y el sector comunitario de la salud rural, contiene una serie de medidas para mejorar la contratación y la retención de profesionales de la salud rural, incluidos médicos rurales, enfermeros, trabajadores sanitarios conexos y trabajadores sanitarios indígenas. Apoya el desarrollo y dotación de recursos de programas que permitan el acceso a la gama más amplia posible de los servicios sanitarios necesarios.

257. En zonas apartadas, los australianos acceden a los servicios y profesionales sanitarios mediante el transporte sanitario, como Abyal Flying Doctor Service y otros organismos de rescate médico y sanitario, así como

con la nueva tecnología, como la celebración de videoconferencias y el uso de la transmisión de información electrónica. Se fomentan a nivel nacional nuevos modelos y medios para prestar servicios sanitarios a los australianos rurales o que viven en zonas apartadas.

258. En Victoria, las iniciativas en materia de educación, formación e investigación comprenden la promoción de enfoques pluridisciplinarios para contratar y retener a profesionales de la sanidad rural, la educación y formación especializada para satisfacer las necesidades urgentes y crónicas de atención de los habitantes del campo y tecnologías de telesalud e Internet. Mediante los viajes de los pacientes, el rescate y los servicios de visitas de especialistas, el Estado apoya el acceso a los servicios que atienden a los derechos de los habitantes de Victoria al más alto nivel alcanzable de salud física y mental.

259. Mediante la de Sanidad Rural y los Programas de Servicios con Finalidades Múltiples, se ponen en funcionamiento modelos de servicio local más flexibles que permitan a las comunidades rurales y sus hospitales y demás servicios sanitarios satisfacer las necesidades locales. Una gama más amplia de servicios comunitarios y domésticos está sustituyendo el enfoque único tradicional sanitario basado en el internamiento, con la integración de cada comunidad rural de cierta importancia en la red VicOne, punto de acceso común a los servicios sanitarios y la información sobre asuntos de esa índole para todos los organismos del gobierno y el sector privado .

260. El Proyecto de Ley sobre los Delitos (Mutilación Genital Femenina) fue aprobado en la Asamblea Legislativa de Victoria el 31 de octubre de 1996, con apoyo de ambos partidos. La Ley entró en vigor el 26 de noviembre de 1996. El Gobierno de Victoria cree que la educación es, junto con la legislación, el mejor enfoque para erradicar la práctica.

261. Al redactar esta legislación, el Gobierno, por intermedio de un grupo de trabajo del Consejo de Mujeres de Victoria y el Centro Ecuménico para las Migraciones, celebró amplias consultas con las comunidades afectadas. La postura legislativa apoyada por el Gobierno se ajusta a los consejos de la Organización Mundial de la Salud de que la legislación ha de fijar la norma inequívoca de que todas las formas de mutilación genital femenina son incorrectas.

262. Un Grupo Interdepartamental sobre la Mutilación Genital Femenina, convocado por la Oficina de Asuntos relativos a la Mujer de Victoria, ha estado coordinando estrategias en los diversos departamentos gubernamentales y otros órganos pertinentes acerca de las necesidades de las comunidades afectadas. Como un aspecto de la estrategia educativa y fuente para las sesiones de información a la comunidad, se ha elaborado material de información que refleja un enfoque del conjunto del gobierno sobre la mutilación genital femenina destinado a profesionales y proveedores de servicios que trabajen dentro de las comunidades afectadas.

263. Durante 1997, un funcionario del proyecto Koori trabajó durante seis meses con la Oficina de Asuntos relativos a la Mujer de Victoria como parte de una iniciativa conjunta con los Asuntos Aborígenes de Victoria, para investigar si era posible mejorar el acceso a los servicios gubernamentales para las mujeres koori en la Victoria rural y regional. Se han celebrado consultas con las

comunidades en dos regiones para proporcionar recomendaciones con miras a un mejor acceso a los servicios, consultas que continuarán en resto del estado durante 1998.

Artículo 13

El derecho a la educación

264. La educación primaria es obligatoria en Australia y gratuita en todas las escuelas públicas. Tres cuartas partes de la población en edad escolar están matriculadas en estas últimas. Se cobran derechos de escolaridad por la asistencia a escuelas privadas, aunque algunas eximen de ellas o las reducen a las familias con bajos ingresos que desean para sus hijos una educación de base religiosa. La legislación de los estados y territorios exige que todos los niños entre las edades de 6 y 15 años (16 en Tasmania) asistan a una escuela pública o privada o seguir algún otro programa de enseñanza aprobado oficialmente.

265. El Consejo Ministerial de Empleo, Educación, Formación y Asuntos de la Juventud es el foro ministerial federal y de los estados para la colaboración nacional en la tarea de elaborar y aplicar políticas de educación y formación. Las Metas Comunes y Convenidas para la Instrucción en Australia proporcionan un marco para la cooperación entre los estados, los territorios y el Gobierno del Commonwealth. Los gastos totales en educación procedentes de todas las fuentes alcanzaron en 1994-1995 un total de 5.485 millones de dólares, de los cuales los gastos totales gubernamentales (federales y de los estados) sumaron 2.594 millones.

266. La responsabilidad primordial por la construcción de edificios escolares incumbe a los Gobiernos de los Estados y las autoridades de la educación privada. El Gobierno federal aporta recursos para complementar los esfuerzos de estas autoridades mediante el Programa de Subvenciones de Capital, cuyo fin específico es mejorar los resultados educacionales en escuelas que atienden a alumnos desfavorecidos en materia de educación. Para 1996, se consignó una cantidad de 326 millones de dólares en el marco de este programa. De esta cifra, se asignaron 211 millones a los proyectos escolares del Gobierno y 115 millones a los proyectos privados.

267. La financiación del Commonwealth para las escuelas pública se otorga mediante subvenciones de asistencia financiera sin condiciones y mediante las subvenciones generales para gastos ordinarios. El Gobierno del Commonwealth proporciona financiación recurrente a los sistemas públicos, los sistemas privados y las escuelas privadas para asistirlos en los gastos ordinarios de la educación escolar. Esto ayuda a ofrecer a los alumnos programas educacionales orientados hacia el logro de las prioridades del Commonwealth para la escolarización. En 1996, se asignaron alrededor de 2.649 millones conforme al programa. De esa cifra alrededor de 937 millones se asignaron a escuelas públicas y aproximadamente 1.712 millones a escuelas privadas.

268. El Gobierno Federal está empeñado en aumentar las oportunidades para que los padres elijan ya una educación de calidad para todos los niños australianos, sea su escuela pública (abierta a todos prescindiendo de antecedentes, discapacidad o ubicación) o del sector privado. Tanto los sectores público como el privado son cada vez más diversos. El Commonwealth estimula esta tendencia, que permite a las escuelas responder eficazmente a las necesidades de sus

alumnos y comunidades, y da su aliento novedades en los sistemas escolares de los estados y territorios y en el sector privado, lo que amplía el margen de elección de los padres.

269. Se apoyan las políticas que fomentan la posibilidad de escoger como medios para mejorar los resultados de la enseñanza. Los padres australianos pueden optar dentro de tres tipos de elección: la enseñanza pública y la privada; dentro del sistema de educación público; y dentro del sistema de educación privado.

270. El Gobierno Federal ha demostrado su compromiso a favor de la posibilidad de elegir aboliendo las restricciones impuestas a la financiación y a la planificación públicas de nuevas escuelas privadas. Desde 1997, el principal requisito de elegibilidad para que una escuela privada reciba financiación general recurrente es que esté reconocida por el estado o el territorio.

Grupos desfavorecidos

271. El Commonwealth reconoce que hay algunos estudiantes con necesidades particulares que requieren ayuda y recursos adicionales para desarrollar plenamente sus posibilidades. La esfera de prioridad de Necesidades Especiales de Aprendizaje presta apoyo para mejorar y ampliar la participación en la enseñanza de los niños de comunidades rurales aisladas, hijos de migrantes recién llegados que precisan de una instrucción intensiva en el idioma inglés, estudiantes que aprenden inglés como segunda lengua y niños con discapacidades.

272. Una serie de programas de educación a distancia dan acceso a la educación a los niños en zonas apartadas de Australia, sin que tengan que abandonar sus hogares. El Commonwealth procura mejorar la participación y los resultados en la educación de jóvenes con discapacidades prestándoles asistencia, orientada hacia escuelas, organizaciones, grupos de comunidades y organizaciones no escolares. La integración de los alumnos con discapacidades en clases y escuelas ordinarias sigue constituyendo una alta prioridad de Commonwealth.

273. Es a menudo difícil y caro proporcionar educación a poblaciones dispersas y de reducidas dimensiones, separadas por grandes estancias. Se puede proporcionar escolarización a las comunidades de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres que viven en asentamientos dispersos y alejados mediante un maestro visitante o con otros métodos, como la educación a distancia. En estas comunidades, las tasas de participación en la escolarización y las de resultados son por lo común inferiores a las de la población general. En estas comunidades apartadas, puede que no resulte fácil impartir la escolarización secundaria y que los alumnos tengan que desplazarse a un centro más importante. En algunas comunidades de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres se imparte educación bilingüe. Para muchos niños, el inglés puede ser su segundo o tercer idioma y no es el principal utilizado en la comunidad.

274. En 1994, un grupo nacional de referencia presentó sus prioridades de actuación en un informe titulado "Examen nacional de la educación para los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres". Los objetivos de rendimiento anual se dirigirán a esas prioridades acordadas en el Consejo Ministerial de Empleo, Educación, Formación y Asuntos de la Juventud (MCEETYA) reunido en diciembre de 1995. El MCEETYA acordó que la educación y la formación para los

australianos indígenas se convirtiera en prioridad nacional y que los esfuerzos de todos los gobiernos debían lograr continuos avances significativos para acercar los resultados educacionales de los australianos indígenas a los de los no indígenas. Los Ministros convinieron en que las siguientes constituyen prioridades nacionales:

- hacer que los resultados de los australianos indígenas sean análogos a los de los no indígenas;
- fijar objetivos de lectura y escritura, aritmética elemental y empleo;
- hacer que los padres indígenas participen en la educación de sus hijos;
- mejorar los resultados de la educación preescolar;
- ampliar el empleo y la formación seguros de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres en todos los niveles, en particular para los Trabajadores Indígenas en la Educación (AIEWs);
- velar por un desarrollo profesional adecuado del personal que participa en la educación indígena;
- desarrollar y ampliar programas escolares culturalmente amplios;
- hacer participar a los australianos indígenas en la adopción de decisiones en materia de educación;
- obtener resultados análogos en lectura y escritura y aritmética elemental para la población indígena; y
- ocuparse del desarrollo de competencias con fundamentos sólidos.

275. El Departamento de Educación, Formación y Empleo de Australia del Sur (DETE) hace suya la Estrategia Nacional de 1996 para la Educación de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres (1996-2001). La Estrategia se ha utilizado como marco para construir un proyecto de Plan del DETE para la Educación de los Indígenas. Entre las cuestiones críticas que constituyen prioridades clave de la educación aborígen en Australia del Sur, figura el aumento de los niveles de competencia, rendimiento y aprovechamiento de los alumnos aborígenes en lectura y escritura, aritmética elemental y estudios aborígenes y culturales.

Tasas de retención

276. La enseñanza secundaria se puede obtener amplia y gratuitamente en Australia. Como ocurre con la primaria, se imparte en escuelas públicas y privadas. Algo más del 71 por ciento de los alumnos australianos continúan actualmente hasta finalizar el grado 12°. Aunque esto representa un descenso con respecto al máximo de 77 por ciento alcanzado en 1992, sigue constituyendo una gran mejora de las tasas de retención del decenio de 1970 y principios del de

1980 (en 1976 la tasa de retención hasta el grado 12° era del 35 por ciento y en 1986 del 49 por ciento).

277. Los alumnos indígenas, aquéllos con antecedentes socioeconómicos inferiores y los de zonas rurales y alejadas tienden a presentar tasas de retención hasta el grado 12° inferiores a las de sus coetáneos. En 1996, la tasa de retención hasta el grado 12° de los alumnos indígenas era del 29 por ciento. En el mismo año, alrededor del 59 por ciento de los alumnos con antecedentes socioeconómicos inferiores se estimaba que habían terminado el grado 12°, en comparación con el 76 por ciento de los que tenían antecedentes socioeconómicos superiores. Se estima que alrededor del 60 por ciento de los alumnos rurales y el 51 por ciento de los que viven en zonas apartadas han terminado el grado 12°, en comparación con el 68 por ciento de los alumnos de ambientes urbanos. Todas estas tasas han disminuido durante los últimos años al compás de la disminución general de la retención hasta el final de la escuela secundaria.

278. Además de proporcionar programas y asistencia financiera para los desfavorecidos, el Gobierno tiene en funcionamiento cierto número de iniciativas orientadas a detener esta disminución. Comprenden políticas relacionadas con la expansión de la educación profesional en escuelas y el mejoramiento de las capacidades en materia de lectura y escritura y aritmética en los primeros años de la escolarización. Para los alumnos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, el objetivo nacional de un 65 por ciento de retención para el decenio de 1990 es más difícil de alcanzar, ya que aproximadamente sólo el 22 por ciento de sus alumnos alcanzaron el grado 12° en 1989. La colaboración entre las autoridades federales y las de los estados ha producido programas con miras a aumentar la retención hasta el grado 12° incrementando el número de indígenas que participan en la adopción de decisiones en materia educacional, mejorando los resultados, la participación y el acceso y cerciorándose de que los alumnos indígenas estén enterados de las opciones de que disponen.

279. Más de 13.000 alumnos indígenas recibieron asistencia tutorial complementaria en 1996 en el marco de ATAS. Esta cifra no abarca los alumnos que reciben asistencia por conducto de los 837 Centros de Trabajos Domiciliarios ni los alumnos indígenas que asisten a instituciones de educación superior financiados globalmente. En 1996, funcionaban en las escuelas locales primarias y secundarias más de 3.000 Comités de ASSPA que representaban a unos 81.000 alumnos indígenas de las escuelas. El programa ASSPA ha sido ahora ampliado al sector preescolar.

La Iniciativa de Estudios Abiertos

280. La Red de Educación de Australia (EdNA) es una iniciativa australiana orientada a facilitar que se imparta una educación rentable a todas las partes del mundo educativo en Australia. La EdNA presta un servicio que permitirá a alumnos y maestros de todos los niveles de educación acceder a la información y compartirla en Australia y en todo el mundo. Pueden obtenerla gratuitamente todos los que tengan acceso a Internet. (Se puede encontrar EdNA en <http://www.edna.edu.au>.)

281. La EdNA facilita también una guía de servicios disponibles en Internet. Cada sector del mundo educativo desarrolla su parte para satisfacer las necesidades de su grupo particular de destinatarios. La Guía es altamente

innovadora y flexible, es de uso sencillo y dispone de posibilidades de ayuda. La EdNA es un proceso de cooperación y consulta entre representantes de todos los sectores del mundo educativo incluidos los gobiernos de Commonwealth, los estados y los territorios, las escuelas privadas, el sector de la educación y la formación profesional, el sector de la educación superior y los sectores de la educación de adultos y educación comunitaria. Tiene por fin maximizar los beneficios de la tecnología de la información para todos los sectores de la educación australiana y evitar la superposición y duplicación entre los diversos sectores y sistemas.

282. Además del sitio de Internet, hay otros aspectos igualmente importantes del proceso EdNA que se proponen conseguir retribución para todo el mundo de la educación. Por ejemplo, un comité con representantes de todos los estados y territorios, de todos los sectores, elaboró un Análisis de Requisitos Empresariales. En él se expone toda la gama de servicios que los educadores consideran conveniente para que puedan llegar a ser prestados por conducto de la EdNA.

Educación y formación profesional

283. En 1996, más de 1,35 millones de estudiantes seguían programas de educación y formación profesional impartida merced a fondos públicos combinados con su suministro mediante pago por parte de proveedores públicos; el 83 por ciento de los receptores de educación y formación profesional obtenían su capacitación del sistema público de Educación Técnica y Postescolar (TAFE), el 15 por ciento de proveedores de educación comunitaria y el 2 por ciento de proveedores privados. Cada vez se imparte más educación y formación profesional en el lugar de trabajo y a los estudiantes del sector de la escuela secundaria. Con el crecimiento del mercado de la formación, aumenta el número de proveedores privados, que más que duplica los 2.500 que operaban en 1996.

284. En 1996, el 36 por ciento de la actividad formativa se refería a programas profesionales y paraprofesionales, el 23 por ciento a programas operativos o de oficina, el 19 por ciento a programas de oficios y el 22 por ciento a programas generales o no especificados. El sector escolar representa la mayoría de las personas que participan en la educación hasta la edad de 17 años inclusive. Desde los 18 a los 24 años, hay un permanente crecimiento del porcentaje que no participa en la educación del 32 al 79 por ciento. Para todas las edades entre 16 y 24 años, la participación en la educación y formación profesional es más elevada que la participación en la educación superior. En 1996, el 47 por ciento de los estudiantes de educación y formación profesional eran mujeres.

285. El aumento de la participación de personas de grupos de destinatarios desfavorecidos es un elemento estratégico permanente en la persecución de las metas nacionales de educación y formación. La participación de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en la educación y formación profesional aumentó del 2,1 por ciento en 1995 a alrededor del 2,4 por ciento en 1996. Esto debe compararse con la población indígena del 2 por ciento de la población total. Los hechos demuestran que las personas que no proceden de un entorno de habla inglesa participan por lo menos en un plano de igualdad en la educación y formación profesional en comparación con la proporción (el 13,9 por ciento) que representan en la población en general. Las personas de zonas rurales y aisladas tienen una tasa de participación (7,9 por ciento y 0,3 por ciento

respectivamente) más alta que la correspondiente a las ciudades capitales y otras zonas metropolitanas (el 6,6 y el 6,7 por ciento, respectivamente).

286. Se ha puesto cada más interés en la gradual aplicación de Nuevos Aprendizajes para introducir más flexibilidades, nuevos servicios de apoyo y ampliar la gama de sectores industriales que ofrecen formación y aprendizaje.

287. Desde 1996, el Gobierno Australiano, como parte de amplias reformas en el sector de la formación, ha centrado su atención en las reformas de la educación profesional en el sector escolar. En el marco de los Nuevos Aprendizajes, los alumnos de las escuelas podrán combinar sus estudios orientados a obtener un certificado superior de educación secundaria con una educación y formación profesional acreditada y reconocida en todo el país. El objetivo de la reforma es hacer que la formación empresarial resulte atractiva para una gama mucho más amplia de empresas. Esto ampliará en gran medida las oportunidades de empleo y de carrera de los jóvenes y aumentará la competitividad internacional de las empresas australianas incrementando las cualificaciones de su fuerza de trabajo.

288. Los Nuevos Aprendizajes aprovechan los puntos fuertes de las modalidades de formación existentes a la vez que abordan sus rigideces y defectos. La finalidad es ampliar las oportunidades de formación haciendo avanzar las becas de formación y aprendizaje más allá de las ocupaciones tradicionales hacia nuevas industrias, con el fin de aprovechar el crecimiento y el potencial de empleo. Los Nuevos Aprendizajes se apoyan en un conjunto completo de reformas de la educación y formación profesional que simplificarán y mejorarán el sistema de cualificaciones y normas nacionales, y conseguirán que las empresas puedan obtener rápidamente una formación para los empleados que hará aumentar su productividad y rentabilidad.

289. Son rasgos importantes del nuevo sistema:

- la inclusión de una formación estructurada que conduzca a posibles resultados que alcancen el Marco de Cualificaciones Australiano (AQF), niveles 5 y 6, en que los programas entrañan un elemento de empleo;
- una mayor participación de las Empresas de Formación en Grupo;
- mejores rutas de la escuela al trabajo y mayores oportunidades para los estudiantes de comenzar aprendizajes y formaciones mientras están aún en la escuela;
- introducir un Marco Nacional de Formación Profesional que prevea normas nacionales de competencia y calificaciones nacionales, apoyadas en mecanismos para asegurar la calidad que garanticen los resultados cualitativos;
- desarrollo de paquetes de formación flexibles y personalizados sobre la base de normas nacionales de competencia, directrices de evaluación y cualificaciones nacionales debidamente aprobadas;
- desarrollo de una estructura coherente en el plano nacional para los acuerdos de formación que se centrará más en la adquisición de

competencias y en los que figurarán procesos simplificados de aprobación y supervisión;

- el establecimiento de autoridades de aprobación conforme a la Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo de 1996, para modificar la proporción entre el tiempo dedicado a la formación y el dedicado a la producción en las formaciones y aprendizajes para adaptarse a las necesidades del empleador y del aprendiz o capacitando; y
- la introducción de la elección por el usuario en la mayoría de los estados y territorios. Con ello podrá el empleador, de acuerdo con el aprendiz/capacitando, elegir el proveedor de formación que prefieran y determinar el contenido y el modo de prestación que hagan la formación fuera del empleo más pertinente a sus necesidades concretas.

290. Además de las reformas iniciadas a partir de 1996, debe observarse que el trabajo en las escuelas empezó en 1993 con programas piloto desarrollados como parte del Sistema Australiano de Formación Profesional Certificada.

291. En Australia del Sur, se introdujo en 1996 una importante estrategia llamada "Ready, Set, Go" ("Preparados, en posición, adelante") que se propone proporcionar a todos los estudiantes las cualificaciones y aptitudes necesarias para estar "preparados" para trabajar, mediante la enseñanza de competencias claves y educación empresarial; estar "en posición" para trabajar mediante el apropiado asesoramiento sobre perspectivas profesionales y recursos para planificarlas; y estar en condiciones de ir "adelante" hacia el empleo en razón del desarrollo de su confianza y experiencia mediante la participación en ocupaciones laborales de calidad y programas de educación comunitaria y profesional.

Resultados en materia de lectura y escritura y aritmética elemental

292. La elaboración de marcos para los planes de estudio en las escuelas australianas en cinco esferas de aprendizaje previamente convenidas ha ayudado a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, aportando un lenguaje común para informar sobre el aprovechamiento del alumno. El Gobierno reconoce también la importante función que desempeñan los padres en el aprendizaje de sus propios hijos. El Consejo Australiano de Padres se fundó para llevar a cabo un proyecto de investigación denominado Colaboración para un Aprendizaje Exitoso - el Factor Padres. Los objetivos de la investigación eran poner de relieve hasta qué punto los padres influyen sobre el aprendizaje de sus propios hijos, examinar las actitudes y maneras en que los padres pueden maximizar los resultados de sus hijos en materia de lectura y escritura en los primeros años de la escolarización y configurar la asociación cooperativa entre escuela, maestros y padres para el mejor aprovechamiento de los hijos de éstos.

293. Además, el Proyecto Nacional de los Años Medios de Enseñanza desarrollará una estrategia nacional para los años medios de escolarización relativa a las prácticas en apoyo del estudiante, la organización escolar y el desarrollo profesional. La reciente ampliación de varios programas escolares del Commonwealth en el Programa de Resultados de Calidad tiene por objeto mejorar ulteriormente los resultados mediante proyectos estratégicos que sirvan de apoyo

a los objetivos claves del Gobierno de conseguir mejores resultados para los alumnos de las escuelas. Entre las esferas en que se centra la atención, figura la evaluación y la elaboración de informes sobre la base de los resultados en las diversas las temáticas claves del aprendizaje, el perfeccionamiento y profesionalismo de maestros y directores, la organización y reforma de las escuelas, la atención tutorial y el desarrollo personal del alumno, la participación de los padres, la educación cívica y cuestiones transcurriculares como lectura y escritura, aritmética elemental y tecnología de la información.

294. Se presentan dificultades cuando se trata de prestar servicios educativos a comunidades aisladas de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, en particular a los grupos que se han separado de comunidades mayores para regresar a sus tierras tradicionales. La Política Nacional de Educación de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres se orienta hacia las necesidades educativas de todas esas personas, incluidas las que viven en comunidades apartadas.

295. En colaboración entre los ministros de educación de Commonwealth, los estados y los territorios, se ha terminado recientemente Igualdad entre los Sexos: Un Marco para las Escuelas Australianas para asesorar con miras a mejorar los resultados educativos de chicas y chicos en las escuelas australianas. El Marco propone amplias esferas de acción a los sistemas y sectores de los estados y territorios. Se basa en cinco orientaciones estratégicas de la actividad. Son ellas: comprender el proceso de construcción de la identidad de los sexos; plan de estudios, enseñanza y aprendizaje; violencia y cultura escolar; caminos postescolares; y apoyo a los cambios.

296. La encuesta realizada en 1994 por el Comité Permanente de la Cámara de Representantes sobre Empleo, Educación y Formación sobre la violencia en las escuelas australianas investigó la naturaleza, los efectos y la incidencia de la violencia en dichas escuelas. Como consecuencia del informe, Commonwealth financió foros estatales y territoriales para concretar la mejor manera de proceder desde el punto de vista escolar para hacer frente a la violencia en las escuelas de Australia.

297. El Commonwealth trabaja en estrecho contacto con los gobiernos de los estados y territorios para mejorar los resultados de aprendizaje de los alumnos en materia de lectura y escritura y aritmética elemental. En marzo de 1997, los ministros de educación del Commonwealth, los estados y los territorios acordaron nuevas metas en esas asignaturas: que todos los niños que terminasen la escuela primaria supiesen contar y pudiesen leer y escribir con corrección en un nivel apropiado.

298. Los gobiernos del Commonwealth, los estados y los territorios aprobaron además un plan nacional para apoyar las metas en materia de lectura y escritura y aritmética elemental. En resumen, el Plan Nacional prevé una evaluación y determinación anticipadas de los estudiantes en situación de riesgo, una intervención temprana, una evaluación regular con referencia a niveles nacionales convenidos, la presentación de informes de ámbito nacional sobre el aprovechamiento de los alumnos y el reconocimiento de la importancia del desarrollo profesional para obtener mejores resultados en las metas antes expresadas.

299. El Plan Nacional comprende, en concreto:

- la evaluación completa de todos los alumnos por parte de los profesores lo antes posible durante los primeros años de la escolarización con el fin de hacer frente adecuadamente a sus necesidades en materia de lectura y escritura y aritmética elemental, y determinar qué alumnos corren el riesgo de no progresar suficientemente hacia los objetivos convenidos;
- una intervención lo más temprana posible para hacer frente a las necesidades de todos los estudiantes que se determine que están expuestos a ese riesgo;
- la concreción de niveles nacionales de lectura y escritura y aritmética elemental (en los años 3, 5, 7 y 9);
- la evaluación de los alumnos en relación con el nivel de tercer año en cuanto a su capacidad de contar, leer y escribir correctamente, a partir de 1998 (y con referencia al nivel de quinto año lo antes posible), utilizando procedimientos rigurosos de evaluación de ámbito estatal y procurando añadir lo antes posible la capacidad de hablar, oír y observar;
- el progreso de los sistemas y autoridades escolares hacia una presentación de informes de ámbito nacional sobre los logros de los estudiantes en materia de aritmética elemental, lectura y escritura y ortografía con referencia a los niveles de tercer y quinto grados para cada año, empezando en 1999 sobre los resultados de 1998, con datos comparables entre los diversos estados y territorios;
- el acuerdo de proporcionar perfeccionamiento profesional en apoyo de los elementos claves del Plan Nacional;
- la consignación de 7 millones de dólares con cargo al rubro de Estrategias y Proyectos Nacionales del Programa de Alfabetización del Commonwealth específicamente con fines de desarrollo profesional; y
- la consignación de 7,5 millones de dólares durante cuatro años a la Red de Centros de Educación, de los que una parte importante se vinculará al desarrollo profesional de los maestros para apoyar el Plan Nacional.

300. Son motivo de considerable preocupación los bajos niveles de participación de los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en los sistemas educativos australianos más allá de los años obligatorios. La desventaja social y económica de los indígenas, junto con unos planes de estudio inadecuados, han tenido como consecuencia bajas tasas de retención hasta el grado 12º de los alumnos escolares indígenas. Un mayor reconocimiento de estos factores por el Gobierno Federal y los de los estados y territorios ha llevado a que, a partir de fines del decenio de 1960, se adoptasen diversas disposiciones especiales en materia de educación. Se ha producido un progreso apreciable en la elaboración de programas educativos más apropiados. Una importante respuesta programática ha

sido la prestación de apoyo a los ingresos para alumnos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres mediante ABSTUDY.

Programas de alfabetización para grupos desfavorecidos

301. El Commonwealth introdujo en 1996 el Programa de Alfabetización - Subvenciones a las Escuelas para Fomentar la Alfabetización como iniciativa para mejorar de manera medible los resultados en materia de lectura y escritura y aritmética elemental de alumnos con antecedentes educativos desfavorables. Se han destinado fondos para esos estudiantes. Se trata de alumnos cuyos resultados escolares están expuestos a riesgos imputables a factores como la dificultad en el desarrollo de un conocimiento del inglés escrito y aptitudes aritméticas, un antecedente propio de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, antecedentes socioeconómicos de bajo nivel, dificultades familiares o personales, movilidad residencial y ubicación geográfica. La financiación apoya además estrategias y programas de perfeccionamiento profesional para maestros con el fin de mejorar el aprovechamiento en materia de lectura y escritura y aritmética elemental.

302. El Gobierno del Commonwealth trabaja en cooperación con los estados y territorios para conseguir mejores resultados escolares para todos los estudiantes australianos. Los Programas sobre Necesidades en Materia de Alfabetización, Idiomas y Enseñanza Especial, financiados por el Gobierno Federal, prestan apoyo a alumnos de grupos actualmente desfavorecidos respecto de su acceso a la educación o que precisan de apoyo adicional para elevar al máximo sus resultados escolares. El Commonwealth proporciona una serie de medidas específicas de apoyo a los ingresos, acceso a préstamos y pagos postergados según ingresos de una parte de los costos de educación universitaria (sin aplicar ningún tipo de interés a la deuda), con objeto de facilitar el acceso a la educación secundaria y superior de todos los australianos.

303. La esfera prioritaria de los idiomas de los programas para las escuelas del Commonwealth comprende la Estrategia Nacional de Idiomas y Estudios Asiáticos en Escuelas Australianas (NALSAS). Abarca además otros dos programas de idiomas, a saber, Idiomas de Comunidades e Idiomas Prioritarios. Los objetivos de esos programas son promover la expansión y el mejoramiento del aprendizaje de idiomas distintos del inglés (mediante los programas de idiomas de comunidades e idiomas prioritarios), y fomentar la participación y la calidad en la enseñanza y el aprendizaje de idiomas y estudios asiáticos (mediante la Estrategia NALSAS).

Alfabetización de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres

304. Los problemas referentes a los conocimientos en materia de lectura y escritura y aritmética elemental son mucho más serios para los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres que para otros sectores de la población adulta. Un gran número de esos adultos no pudieron acceder durante su juventud a toda la gama de oportunidades de la educación escolar. Sin esas oportunidades la población aborígen y los isleños del Estrecho de Torres no han podido llegar a adquirir las capacidades académicas y técnicas que proporcionan los cursos de carácter general en los niveles de educación técnica y ulterior. Para las personas que viven en comunidades apartadas, el acceso al sistema educativo occidental completo puede constituir sólo un acontecimiento reciente. Esta herencia ha tenido como resultado que las necesidades educativas de muchos

aborígenes e isleños del Estrecho de Torres adultos tengan una dimensión totalmente diferente de las del resto de la comunidad australiana. Mejorar estos niveles de alfabetización es una de las prioridades nacionales fijadas por el MCEETYA. El examen nacional de la educación para los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres de octubre de 1994, enumeraba como prioridades los conocimientos de lectura y escritura y aritmética elemental y el fomento de la cultura de esas poblaciones. Los gobiernos de Commonwealth, los estados y los territorios han acordado que, en el contexto nacional, la adecuación cultural del plan de estudios es tema merecedor de atención.

El derecho a la educación superior

305. Las instituciones postsecundarias de Australia abarcan toda la gama de necesidades educativas. Estas instituciones comprenden institutos de educación superior e institutos de educación y formación profesional (en relación con el artículo 6 se da información sobre la educación y la formación profesional). Existen instituciones de educación superior en cada uno de los seis estados, el Territorio de la Capital de Australia y el Territorio del Norte. Durante el período 1982-1993, hubo un incremento significativo de la demanda de educación superior en Australia, que se manifestó en un aumento de las matriculaciones y de las tasas de participación.

306. En 1997 había más de 419.720 unidades equivalentes a un estudiante a tiempo completo financiadas por el Gobierno Federal. Esto representa una expansión de aproximadamente el 25 por ciento desde 1990 del número de plazas financiadas por el Commonwealth. Además se permitirá a las universidades que admitan un número limitado de estudiantes australianos que paguen íntegramente sus tasas por encima de la aportación financiada por el Commonwealth. La libertad de percibir de los estudiantes australianos tasas por cursos universitarios representa un gran cambio de orientación en el sistema de educación superior australiano.

307. En 1989 se introdujo el Plan de Contribución a la Educación Superior (HECS) para ayudar a financiar la ampliación y el desarrollo del sistema de educación superior. Se diseñó para obtener una contribución financiera de los estudiantes, sin que ello entrañase disuadirlos de los estudios universitarios. Conforme al Plan, no se exige de los estudiantes ninguna aportación hasta que sus ingresos alcancen un nivel mínimo. La tasa de reembolso, cobrado por conducto de la Oficina Impositiva Australiana, se basa en un porcentaje de los ingresos y varía del 3 al 6 por ciento, según los ingresos. Se otorga un descuento si los estudiantes pagan toda esta contribución, o por lo menos 500 dólares, desde el principio, pero la mayoría de ellos prefieren postergarla en su mayor parte. El nivel mínimo de la contribución representa el 37 por ciento de la tasa media de financiación de los cursos. Hay tres niveles de contribución con, por ejemplo, unidades generales de filosofía y letras en el nivel más bajo y derecho y medicina en el más alto. Lo obtenido mediante el HECS se devuelve al sistema de educación superior.

308. El Gobierno apoya tanto la equidad como la diversidad en el sistema de educación superior. Su empeño por lograr un sistema diverso y adaptable y su obligación de garantizar equitativamente el acceso a la educación superior fue subrayado con la aportación en el presupuesto de 1992 de 52 millones de dólares en apoyo de la Iniciativa de Estudios Abiertos. El punto clave de esta

iniciativa era la creación de un Organismo de Estudios Abiertos (OLA), empresa privada propiedad de varias universidades. El OLA ofrece principalmente cursos de pregrado, pero se puede obtener un número cada vez mayor de cursos TAFE y se ofrecen también cursos graduados y de transición. No hay requisitos de entrada para los estudios del OLA; hay cuatro períodos de estudio al año y se utiliza la televisión y la radio para algunas unidades. Hay también una flexibilidad cada vez mayor en cuestiones como la transferencia de evaluaciones y créditos. Esta iniciativa ha estimulado el desarrollo de material de estudios en línea y servicios de apoyo en línea. En 1996, había más de 8.000 estudiantes matriculados en los cursos del OLA.

309. También se proporciona acceso a la educación superior a estudiantes australianos y extranjeros, mediante cursos de estudios externos (corrientemente denominados educación a distancia). Muchas universidades imparten cursos selectos mediante campus ampliados en centros regionales. Esto lo hacen normalmente instituciones que ofrecen los primeros uno o dos años de programas escogidos en centros regionales, posiblemente en cooperación con otros proveedores del mismo nivel. Aproximadamente el 13 por ciento de los estudiantes universitarios están matriculados como alumnos externos.

Centros cooperativos multimedia (CMC)

310. El Programa CMC tiene por fin apoyar el desarrollo de una industria multimedia competitiva y con éxito internacional. Esto puede lograrse sosteniendo enfoques colaborativos para satisfacer sus necesidades de mano de obra cualificada y actuando como un recurso para la industria en general. El Commonwealth aportará aproximadamente 24,75 millones de dólares durante tres años, en la primera fase, para establecer seis centros multimedia.

311. Los CMC son organismos con personalidad jurídica formados por consorcios de organizaciones de los sectores de la educación, la industria y los ambientes artísticos y culturales. La función de los CMC es fomentar el desarrollo de vínculos de colaboración entre educación y formación, empresa y ambientes creativos. Los Centros apoyan la formación de personal cualificado y añaden otros beneficios a los que entraña la producción y distribución de multimedia. La finalidad última del Programa es garantizar la fuerte presencia de contenido australiano en esa industria.

312. Los CMC serán objeto de examen en 1998. Si este examen indica que los diversos CMC han ayudado sustancialmente al desarrollo de la industria multimedia, podrá aprobarse una financiación por un período de hasta otros cuatro años en el marco de un acuerdo renegociado con Commonwealth.

Apoyo al estudiante y becas

313. Los estudiantes en situación desventajosa pueden obtener asistencia financiera, previo examen de sus recursos, para alentarlos a terminar la educación secundaria y pasar a estudios superiores. Los estudiantes cualificados para recibir esta asistencia tienen además la opción de cambiar en todo o en parte su beneficio por una cantidad doble con carácter de préstamo. El reembolso de los préstamos debe empezar dentro de los cinco años siguientes. Los estudiantes aborígenes e isleños del Estrecho de Torres pueden optar a un programa de asistencia separado que proporciona una prestación de manutención,

previo examen de sus recursos, y cierto número de prestaciones complementarias sometidas o no a previo examen de los recursos del interesado.

314. También se proporciona asistencia a alumnos de la enseñanza primaria y secundaria que no pueden razonablemente acceder todos los días a una escuela pública que ofrezca educación a su nivel por vivir en una zona alejada o porque un hijo tiene una discapacidad y debe asistir a una escuela especial a cierta distancia del hogar de la familia.

315. El Commonwealth sigue una política de asistir a los grupos desfavorecidos en relación con el acceso y el ulterior progreso hacia la educación superior. Figuran entre esos grupos los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, personas con discapacidades, personas con antecedentes socioeconómicos desventajosos, mujeres en esferas no tradicionales y estudios de posgrado, personas de zonas rurales y aisladas y personas que proceden de medios que no son de habla inglesa. Cada año se asignan más de 5 millones de dólares mediante el Programa de Equidad para la Educación Superior con el fin de estimular iniciativas como mecanismos alternativos de entrada, cursos de adaptación y complementarios y sistemas novedosos de apoyo. Desde 1990 se ha solicitado a las universidades que fijen metas para las tasas de participación, las cuales han sido alcanzadas en su mayor parte.

316. Existe también financiación especial para ayudar a los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Las universidades reciben una financiación de apoyo de alrededor de 21,7 millones de dólares al año para ayudarlas a sufragar los costos adicionales que les ocasiona el ofrecer programas de adaptación, mecanismos especiales de entrada, apoyo tutorial y otros servicios de apoyo, generalmente prestado por conducto de Dependencias de Educación Aborigen en el campus universitario. Existen también planes de asistencia especial a los estudiantes que proporcionan ayuda financiera a los estudiantes desfavorecidos en ese aspecto, los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres y los geográficamente aislados e impedidos. En 1995, el Gobierno ayudó a unos 539.380 estudiantes a un costo de más de 1.600 millones de dólares. Se requiere de todas las universidades que desarrollen estrategias de educación aborigen como parte de su documentación de planificación general y rendición de cuentas.

317. Además, desde 1991 se han reservado fondos destinados a estudiantes de la educación superior con discapacidades. La finalidad general de estos proyectos es estimular la celebración de acuerdos entre instituciones y, mediante una labor cooperativa, el desarrollo de maneras económicas de prestar servicios de apoyo a los estudiantes con discapacidades. Se espera igualmente que las universidades cumplan toda la legislación estatal y federal pertinente, incluida la Ley sobre la Discriminación por Discapacidad de 1992. El cumplimiento de la Ley entraña la prestación de apoyo educativo apropiado a los estudiantes con discapacidades, potenciando su acceso a la educación superior.

318. Australia participa activamente en el proyecto de Indicadores de los Sistemas Educativos (INES) de la OCDE. Desde el comienzo del proyecto Australia ha facilitado datos para la principal compilación estadística, así como para otros fines y ha participado regularmente en las reuniones del Grupo Técnico y otras. Australia es asimismo miembro de la Red B del INES, que elabora indicadores de los destinos de los estudiantes y en 1997 se sumó a la Junta de países participantes en la Red A sobre Resultados Educativos. Australia ha

desempeñado además un papel destacado en la revisión de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (ISCED), que desempeña una importante función, al facilitar la comparación de datos internacionales referentes a la educación.

Estudiantes extranjeros

319. Muchas universidades australianas cuentan también con apreciables matriculaciones de estudiantes extranjeros - más de 53.000 en 1996. Algunos de estos estudiantes siguen sus cursos en Australia mientras que otros aprovechan los cursos ofrecidos por universidades australianas en sus países de origen. Estos cursos se ofrecen a cambio del pago íntegro de las tasas universitarias, aunque existen también becas. Hay todos los años 300 becas de investigación para graduados para adquirir maestrías y doctorados mediante la investigación.

320. Una parte de las plazas financiadas por el Commonwealth está a disposición de estudiantes graduados. Se pueden conseguir, de manera competitiva, en diversas fuentes, becas para estudios de posgrado, que permiten obtener grados de trabajo de curso y de investigación del nivel de maestría o doctorado. Las mismas universidades proporcionan aproximadamente 2.500 becas de formación para graduados. Existen en 1998 aproximadamente 6.000 becas obtenibles mediante una serie de opciones del Gobierno, incluidas 1.595 mediante los Premios Australianos para Graduados. Hay 21.500 becas que ofrecen exención del HECS en 1998. Desde principios del decenio de 1990, el Commonwealth ha permitido a las universidades que perciban tasas para los cursos de graduados distintos del Diploma Graduado de Educación. Los cursos de pago para posgraduados representan aproximadamente el 25 por ciento de la masa total de graduados. Véanse los artículos 28 y 29 del informe de Australia de 1996 acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño.

321. Para ayudar a los estudiantes en la transición hacia la educación superior, en Australia del Sur se ofrece un programa de asesoramiento profesional para estudiantes que reciben sus resultados y tratan de interpretarlos para determinar sus preferencias en materia de educación superior. El programa lo financian el Departamento de Educación, Formación y Empleo; la Junta de Evaluación de Estudiantes Secundarios Superiores de Australia del Sur; y el Centro de Admisiones a la Educación Superior de Australia del Sur del sector de escuelas privadas. (Véanse los apéndices 69 a 85 para información complementaria sobre la protección de este derecho.)

Artículo 15

El derecho a participar en la vida cultural; el derecho a gozar de los beneficios de la tecnología y sus aplicaciones

322. El Gobierno australiano apoya al mundo de las artes de Australia y refuerza la oportunidad de que los australianos participen en la vida cultural, proporcionando la siguiente asistencia:

- asistencia financiera completa para individuos y organizaciones dedicados a la literatura, la música, la artes escénicas y las artes visuales, así como las artes indígenas y étnicas, por conducto del Consejo de Australia y los departamentos de artes de los estados;

- compra directa de obras de arte para su posterior arrendamiento por el Gobierno y organizaciones del sector privado en Australia y en las oficinas diplomáticas australianas en el extranjero, por conducto de Artbank;
- pagos a escritores australianos conforme al fondo del Derecho de Préstamo Público en reconocimiento de que se pierden ingresos como consecuencia de la múltiple utilización de los libros de las bibliotecas públicas;
- apoyo directo a la compañía nacional de ópera y las orquestas en beneficio de sus producciones;
- coordinación de actividades para apoyar los amplios intercambios culturales y actividades de vinculación de Australia;
- el programa nacional de giras de las artes escénicas Playing Australia, que financia las giras dentro de Australia de programas de alta calidad de artes escénicas, atendiendo a la demanda de la audiencia;
- giras de exposiciones de alta calidad del patrimonio artístico, científicas, de artes visuales, de oficios y de material cultural aborígen y de los isleños del Estrecho de Torres, en particular a la Australia regional, mediante Visions of Australia;
- apoyo a los festivales regionales y locales para la presentación de actividades culturales de calidad que subrayan o realzan el tema del festival o fomentan la imagen cultural de la comunidad local;
- apoyo a instituciones nacionales especializadas de formación artística, incluso el Instituto Nacional de Arte Dramático, la Escuela Australiana de Ballet, la Escuela de Cinematografía, Televisión y Radiodifusión de Australia, la Asociación Nacional para el Desarrollo de las Aptitudes de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres, la Academia Nacional Australiana de Música, la Orquesta Juvenil Australiana y el Flying Fruit Fly Circus;
- mejoramiento del acceso a la información sobre todas las subvenciones y servicios de apoyo, programas empresariales y de exportación para la industria disponibles en los tres niveles de gobierno, fondos y fundaciones privados, organizaciones artísticas locales, por conducto de ArtsInfo - un servicio gratuito de información telefónica y remisión y sitio de Internet (<http://www.artsinfo.net.au>);
- incentivos fiscales a las donaciones para organizaciones e instituciones culturales;
- uso de tecnología digital y nuevos medios para facilitar un acceso más amplio a la información cultural australiana - son programas particulares Australia's Cultural Network(www.acn.net.au), Australia on CD y la Biblioteca Multimedia de Artes Escénicas;

- investigación y recolección de datos sobre una amplia gama de temas incluido el empleo en el sector cultural, gastos oficiales en cultura, patrocinio de empresas y encuestas específicas de la industria, por conducto del Grupo de Trabajo Estadístico del Consejo de Ministros de Cultura;
- mediante el plan Arts Indemnity Australia el Gobierno australiano asegura las exhibiciones artísticas itinerantes de alto valor e importancia nacional e internacional, promoviendo así el acceso de los australianos y los visitantes extranjeros a estas experiencias culturales únicas.

Cinematografía y televisión

323. El Gobierno hizo pública su estrategia de apoyo a la industria cinematográfica y televisiva en noviembre de 1997. Con esto se atendía a un amplio examen de la asistencia que el Commonwealth presta a estas industrias - realizado por el Sr. David Gonski - presentado al Gobierno en febrero de 1997. La estrategia del Gobierno continúa proporcionando un marco integrado de apoyo a la industria, inclusive:

- formación avanzada mediante la Escuela de Cinematografía, Televisión y Radiodifusión de Australia;
- desarrollo profesional, de guiones, del control de la audiencia y mercado de la industria mediante la Comisión Cinematográfica de Australia;
- financiación de la producción por conducto de la Sociedad de Financiación de la Industria Cinematográfica Australiana;
- archivo mediante el Archivo Nacional de Cinematografía y Grabaciones Sonoras; y
- deducciones fiscales para las películas australianas calificadas merced a la división 10BA de la Ley Federal de Determinación del Impuesto sobre la Renta de 1936.

324. El Gobierno presta igualmente un apoyo específico a los sectores de la industria afectados de una escasez permanente de mercado, pero con fuertes imperativos culturales. Este apoyo se realiza mediante subvenciones anuales a dos organismos especializados - Film Australia (para la programación de documentales) y la Fundación Australiana de Televisión para Niños (para la televisión infantil).

325. La estrategia del Gobierno abarcaba además la introducción de una nueva concesión tributaria - la concesión referida a las Empresas Licenciadas de Inversiones en la Cinematografía (FLIC) - como programa piloto bienal a partir de 1998-1999. El plan FLIC permitirá una deducción fiscal del 100 por ciento para las inversiones en empresas licenciadas por el Gobierno, a fin de apoyar la producción cinematográfica y televisiva.

326. Las emisoras comerciales se financian principalmente con la publicidad. La legislación reglamenta la titularidad y el control de las estaciones y requiere también la difusión de ciertos mínimos de programación australiana, incluso programación para niños. Esto permite a los servicios de radiodifusión ayudar a desarrollar y reflejar un sentido de identidad, carácter y diversidad cultural australianos.

327. Los objetivos de la Ley de Servicios de Radiodifusión de 1992 (BSA) abarcan: estimular a los proveedores de servicios de radiodifusión a que respeten las normas de la comunidad en el material de la programación que ofrecen, alentar a que se ofrezcan medios para plantear quejas acerca de los servicios de radiodifusión y velar por que los proveedores de servicios de radiodifusión otorguen una alta prioridad a la protección de los niños contra su exposición al material que pudiera resultarles dañino.

328. La BSA ofrece un marco, en sustancia, de autorregulación con respecto a los contenidos, basado en los códigos de práctica elaborados por cada sector de la industria de la radiodifusión. La observancia de los códigos es objeto de vigilancia por parte de un órgano legal independiente, la Autoridad Australiana de Radiodifusión (ABA), facultada para investigar quejas e imponer sanciones.

329. El Código de Práctica de la Industria de la Televisión Comercial fue promulgado en agosto de 1993 por la Federación de Emisoras Comerciales de Televisión de Australia. El Código se ocupa de la clasificación y ubicación de programas y anuncios, y la presentación de programas de noticias y temas de actualidad. También prevé un procedimiento para tramitar las quejas por infracción del Código. Este ha sido recientemente revisado tras una información pública y la ABA evaluará el Código revisado frente a los criterios legales para cerciorarse de que el Código proporcione salvaguardias adecuadas a la comunidad; que la mayoría de los proveedores de servicios de radiodifusión hayan aprobado el Código y que los miembros del público hayan tenido oportunidad suficiente para formular sus observaciones al respecto.

330. El Código de la Federación de Radiodifusores Australianos (FARB) fue registrado por la ABA en 1993. Cubre la difusión de programas de conformidad con las normas de la comunidad, el fomento de la exactitud y la equidad en las noticias y programas sobre asuntos de actualidad y prescribe los niveles de contenido mínimo de música australiana en la radio.

Radiodifusión pública

331. La Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC) y el Servicio Especial de Radiodifusión (SBS) son autoridades independientes creadas por sus respectivas leyes. El Gobierno determina el nivel de financiación presupuestaria para cada organización pero no asume ninguna responsabilidad editorial o de programación.

332. La ABC y el SBS se financian con consignaciones parlamentarias trienales. El SBS percibe también ingresos de la publicidad, por un total de 12 millones de dólares al año. La ABC no está autorizada a aceptar publicidad en sus servicios nacionales de radiodifusión y hay un fuerte apoyo público para que esta prohibición legal continúe en vigor. En cambio, la ABC obtiene ingresos mediante una red de tiendas y otras empresas comerciales. El papel y las funciones de la

ABC y del SBS se exponen en sus respectivas cartas fundacionales, que forman parte de su legislación habilitante - la Ley de la Corporación Australiana de Radiodifusión de 1983 y la Ley del Servicio Especial de Radiodifusión de 1991. Hay 132 servicios licenciados de radio locales que funcionan en toda Australia. Estos servicios de carácter no lucrativo ponen el acento en la participación de la comunidad, el acceso a las minorías y grupos con intereses especiales y el fomento de la industria musical australiana. Se financian mediante la Community Broadcasting Foundation Ltd, empresa creada por la industria para asignar fondos al sector de las comunidades locales.

333. El servicio de radiodifusión de zonas apartadas (RABS) comprende la ABC, el SBS y tres servicios comerciales de televisión a gran distancia (RCTS -uno en Australia occidental, otro en Australia central y el tercero en Australia septentrional). Proporcionan servicios de televisión vía satélite a unos 800.000 australianos en zonas fuera del alcance de los servicios terrestres normales. También se suministran servicios asociados de radio vía satélite en estas zonas. Se han establecido instalaciones de retransmisión en las poblaciones más importantes.

334. Los servicios de la ABC y el SBS se financian con cargo a su consignación normal en el presupuesto del Commonwealth. Los operadores de RCTS han recibido subvenciones del Commonwealth y (en algunos casos) de los estados para ayudarles a establecer los servicios. El Commonwealth financia también subvenciones a los hogares actualmente con recepción directa vía satélite y a las comunidades indígenas y de autoayuda en zonas alejadas para ayudarles en la actual conversión del equipo de recepción analógica al digital.

335. La televisión pagada comenzó en Australia en 1995, y se estiman en 500.000 los hogares suscritos a uno de los cuatro principales distribuidores. En apoyo de los objetivos de la política cultural australiana, se exige de los licenciatarios de televisión pagada que aseguren que por lo menos el 10 por ciento de los gastos de programación anuales de los canales de televisión de pago predominantemente dramáticos se gasta en nuevos programas dramáticos australianos. El 1 de julio de 1997 se terminó un examen del contenido australiano de la televisión de pago, como lo requería la legislación, y el Gobierno estudia los resultados del examen.

336. Organismos de difusión abierta y por suscripción proporcionan una serie de servicios con destinatarios específicos, que funcionan conforme a un sistema de licencias por categorías.

337. El Commonwealth tiene poderes limitados y menos directos sobre los periódicos. No obstante, se pueden presentar quejas al Consejo de la Prensa Australiana que es un órgano financiado privadamente y autorregulado.

Patrimonio nacional

338. El Gobierno del Commonwealth ha anunciado que durante los próximos tres años se construirá el Museo Nacional de Australia que será abierto al público en enero de 2001. El Museo Nacional será el buque insignia del Commonwealth en las celebraciones del centenario de la Federación. Los tres temas nucleares del Museo Nacional: las culturas y el legado aborígen y de los isleños del Estrecho de Torres, la historia y la sociedad australianas desde 1788 y la interacción de

la población con el medio ambiente australiano, serán integrados y reflejados en los programas del Museo.

339. El Gobierno sostiene la Biblioteca Nacional de Australia, el principal recurso documental del mundo para aprender sobre Australia y los australianos y entenderlos. La Biblioteca Nacional sirve de guía al sistema nacional de bibliotecas y servicios de información.

340. La Galería Nacional de Australia desarrolla, conserva y proporciona acceso a la colección nacional de obras de arte, incluida una importante colección de arte aborigen y del Estrecho de Torres. En marzo de 1998 se inauguró una ampliación de la Galería Nacional de Australia, construida con ayuda de fondos del Gobierno del Commonwealth, para alojar grandes exposiciones temporales.

341. El Consejo de Gobiernos Australianos reunido el 7 de noviembre de 1997, dio en principio su acuerdo a la racionalización de los acuerdos vigentes entre el Commonwealth y los estados para la protección de los lugares de importancia cultural mediante el desarrollo de una estrategia nacional de cooperación sobre los lugares del patrimonio nacional.

342. El Consejo de Colecciones del Patrimonio, presidido por el Commonwealth, coordina los criterios nacionales para cuidar de las colecciones del patrimonio cultural de Australia y hacerlas más fácilmente accesibles. El Consejo es un modelo de lo que puede lograrse con la colaboración entre los gobiernos y un sector del patrimonio. Los gobiernos y el sector museístico contribuyen todos ellos a los programas del Consejo y fijan conjuntamente las prioridades para la acción. El Commonwealth aporta 300.000 dólares al año y los gobiernos de los estados y territorios y los museos un total de 450.000 dólares al año.

343. Entre los logros del Consejo hasta la fecha figura Australian Museums On Line (AMOL), un sitio de Internet para las colecciones del patrimonio cultural australiano, que desempeña un papel importante en el incremento del acceso a los museos nacionales, regionales y locales de Australia y a sus colecciones. En el sitio de Web se encuentran detalles de casi 1.000 museos en toda Australia, junto con registros detallados de 40 colecciones. La dirección de AMOL en Internet es <http://www.nma.gov.au/amol/>.

344. Entre 1993 y 1996, el predecesor del Consejo llevó a cabo el Programa Nacional de Conservación, que comprendía talleres de formación para la conservación en toda Australia, un programa de internos para conservadores indígenas o personas procedentes de medios que no son de habla inglesa, proyectos piloto regionales de conservación y un programa de sensibilización del público. En 1997 el Consejo elaboró y publicó las Política y Estrategia nacionales de Conservación y Preservación de las Colecciones del Patrimonio de Australia. La política y la estrategia se pondrán en práctica colaborando para desarrollar un enfoque nacional orientado a ayudar a los museos nacionales y locales a cuidar y documentar mejor sus colecciones de modo que la nación entienda más claramente la ubicación y el significado de su patrimonio cultural. El Consejo publicará además en 1998 el Paquete Nacional de Formación y Recursos en materia de Conservación para guiar a las instituciones en la gestión y el cuidado de sus colecciones.

Propiedad intelectual

345. El Gobierno se ha comprometido a crear un régimen de derecho de autor que equilibre los derechos de sus titulares y los de los creadores a recibir una remuneración apropiada por su inversión en habilidad y recursos, con los derechos de los usuarios a acceder en condiciones razonables al material objeto de derecho de autor. Recientemente se han anunciado varias importantes reformas y otras se hallan actualmente en curso.

346. La legislación que se halla actualmente a consideración del Senado introducirá el primer régimen de derechos morales de Australia. Modificará asimismo las disposiciones relativas al derecho de autor de los periodistas empleados, permitiendo a los editores de medios de comunicación explorar la utilización de nuevas tecnologías.

347. Pronto estarán a disposición de los consumidores australianos discos compactos más baratos tras el anuncio del Gobierno de que levantará las restricciones paralelas a la importación de registros fonográficos. Se han introducido textos legislativos en la Cámara de Representantes para poner en práctica esta reforma.

348. El Gobierno está empeñado en actualizar nuestro régimen de derecho de autor para satisfacer los retos que plantean las nuevas tecnologías y aprovechar nuevas oportunidades. En julio de 1997 se publicó un documento de debate titulado Copyright Reform and the Digital Agenda en el que se pedía a la industria y a la comunidad que formulara observaciones sobre las orientaciones futuras del régimen de derecho de autor de Australia.

349. Los nuevos derechos propuestos en el documento comprenderían la utilización de material de derecho de autor en servicios interactivos en línea vía Internet y permitiría igualmente a Australia cumplir sus obligaciones internacionales conforme a los dos nuevos tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ultimados en Ginebra el año pasado.

350. El Gobierno continúa investigando posibles reformas de las actuales leyes sobre la propiedad industrial de Australia con miras a hacerlas más apropiadas a la naturaleza especial de la propiedad intelectual y cultural de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.

Ciencia y tecnología

351. El Departamento de Industria, Ciencia y Turismo financia varias instalaciones públicas de investigación - la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO), la Organización Australiana de Ciencia y Tecnología Nucleares (ANSTO) y el Instituto Australiano de Ciencias Marinas (AIMS). El análisis indica que hay pocas inversiones en investigación y desarrollo por parte de las empresas y la industria australianas y que los conocimientos científicos generados por las instituciones públicas se absorben con lentitud. Entre los obstáculos que se oponen a la comercialización de la investigación del sector público figura la falta de conciencia de su importancia, una "brecha cultural" entre investigadores y el mundo de la empresa y el pequeño tamaño de las empresas australianas.

352. Questacon, el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología, desempeña también una función clave en la sensibilización del público ante la ciencia y la tecnología. Questacon desarrolla y administra una amplia gama de exposiciones interactivas y programas para el público, con particular empeño en alcanzar a las comunidades regionales y apartadas en toda Australia.

353. Se han iniciado varios programas para tratar de fortalecer los vínculos entre la investigación y su comercialización y otras aplicaciones. Desde 1988 los organismos de investigación gubernamentales han tenido que buscar parte de su financiación en fuentes externas. Esto ha aumentado el nivel de contacto y comunicación efectiva entre industria e investigadores y ha orientado las actividades de los organismos hacia esferas donde hay indicios de apoyo por parte del mercado o de la comunidad. El programa de Centros Cooperativos de Investigaciones (CRC) entraña la colaboración de la industria, las universidades y los organismos gubernamentales en proyectos de investigación a largo plazo. Se subraya en especial la participación de los usuarios de la investigación en la labor de los centros.

354. Los centros pueden recibir del Gobierno la financiación de hasta un 50 por ciento de sus costos totales de explotación. Los costos restantes deben sufragarlos las organizaciones participantes. Se concede financiación con carácter competitivo, aplicando criterios de selección establecidos. Al final del período 1995-1996, había en funcionamiento 62 CRC. Además de los que tienen objetivos comerciales, algunos CRC concentran su atención en los resultados para la salud y el medio ambiente.

355. AusIndustry es una iniciativa de los Gobiernos Federal, de los estados y de los territorios dirigida a ayudar a las empresas a que sean internacionalmente más competitivas. AusIndustry ejecuta programas para apoyar la investigación y el desarrollo (I+D) en las empresas, incluidas subvenciones competitivas para I+D y un plan de deducciones tributarias a la I+D. La Junta de Industria, Investigación y Desarrollo (IR&D) supervisa sus programas de subvenciones y préstamos y su plan de deducciones tributarias. La Ley de la IR&D de 1986 constituye la base legislativa para el funcionamiento de la Junta. El artículo 39F de la Ley de la IR&D permite a cualquier grupo de personas que lo soliciten inscribirse como un organismo australiano de investigación, a los efectos de desarrollar actividades de I+D en nombre de empresas registradas que llenen los requisitos exigidos. La inscripción permite a las compañías calificadas invocar una deducción fiscal para las actividades de I+D. El artículo 39H de la Ley declara que el registro de organismos de investigación debe estar disponible para su inspección y que en el informe anual de la Junta debe hacerse una lista de organismos de investigación registrados y las clases de actividad relacionadas con su inscripción.

356. En 1989 se creó el Programa de Sensibilización en materia de Ciencia y la Tecnología, con el objetivo de aumentar la conciencia y la comprensión de la función central que desempeñan la ciencia y la tecnología en el bienestar económico y social de Australia. La visión última del Programa es una nación cuyos ciudadanos estén bien informados sobre cuestiones de ciencia y tecnología y cuyos jóvenes consideren seriamente la posibilidad de prolongar su educación formal en ciencia, ingeniería y tecnología después de los años obligatorios de enseñanza. Son grupos destinatarios del Programa los jóvenes, las mujeres, los medios de comunicación, los dirigentes de la industria y los científicos.

El Programa se ha concebido como una secuencia interrelacionada de actividades, cada una con grupos destinatarios particulares, derivadas de una estrategia general con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entre las actividades que se apoyan figuran la participación de los estudiantes en las Olimpiadas internacionales de ciencia y matemáticas, y el apoyo prestado a los libros de texto científicos confeccionados en Australia y materiales didácticos para alumnos de las enseñanzas primaria y secundaria.

357. La Organización Australiana de la Propiedad Industrial (AIPO) se encarga de administrar la Ley de Patentes de 1990, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1995 y la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1906. Investigaciones recientes realizadas por la AIPO han demostrado que muchos australianos no se dan cuenta de los importantes beneficios y ganancias comerciales que pueden obtener protegiendo y administrando correctamente su propiedad intelectual. Para aumentar la conciencia al respecto, AIPO estableció en 1995 una sección de comercialización y promociones. Entre las iniciativas más recientes figura la producción de material en inglés sencillo, el suministro de información y servicios en la página de Internet de la AIPO, un programa dirigido al sector de la pequeña empresa, participación en exposiciones y seminarios, la producción de un CD-Rom en el que se explique cómo utilizar el sistema de patentes y una serie de audiocassetts con entrevistas sobre el uso del sistema de propiedad intelectual.

358. Una iniciativa orientada en particular hacia los derechos de los pueblos indígenas ha sido la producción de dos segmentos de vídeo que se incluyeron en un programa de magacín distribuido entre unas 1.300 comunidades de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. El segundo de los segmentos se centraba en una propuesta de que se confeccionase una marca de certificación, para usarla como etiqueta de autenticidad del trabajo de los indígenas australianos.

Contactos y cooperación internacionales

359. Australia fomenta la cooperación con científicos y académicos de todo el mundo. El Gobierno Australiano administra acuerdos bilaterales y otros arreglos de cooperación científica y tecnológica con alrededor de 25 países. Proporciona asistencia financiera a los científicos y académicos australianos que cooperan internacionalmente, mediante una amplia gama de programas administrados por diversos Departamentos.

360. El Programa Internacional de Ciencia y Tecnología (ISTP) del Departamento de Industria, Ciencia y Turismo, aporta aproximadamente 5,6 millones de dólares al año para ayudar a los investigadores australianos a sufragar los costos de sus viajes al extranjero y las dietas correspondientes. En algunos casos, el ISTP ayuda además a los investigadores de países en desarrollo a realizar actividades cooperativas en Australia. La red del Departamento en el extranjero integrada por consejeros de industria, ciencia y tecnología ayuda a los científicos y académicos del exterior a obtener información sobre el sistema australiano de ciencia y tecnología y a establecer vínculos con sus homólogos australianos.

361. Sírvanse ver también los artículos 30 y 31 del informe de Australia de 1996 conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 27 del informe de Australia conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos. (Véanse los apéndices 86 a 100 para información complementaria sobre la protección de este derecho.)

Aportaciones específicas de los estados: Nueva Gales del Sur

362. El Gobierno de Nueva Gales del Sur (NGS) ofrece, por conducto del Ministerio para las Artes, donativos de apoyo a las artes. El objetivo del Ministerio es desarrollar, preservar y potenciar la vida artística y el patrimonio cultural del estado mediante la administración de programas e iniciativas especiales.

363. El Gobierno de NGS está empeñado en preservar y potenciar la identidad cultural local de la industria cinematográfica y televisiva. El Gobierno creó la Oficina de Cinematografía y Televisión de NGS para auxiliar y promover la industria del cine y la televisión. La Oficina de Cinematografía y Televisión de NGS desempeña un importante papel financiando la elaboración de guiones y las inversiones para la producción. La Oficina administra asimismo el Fondo para jóvenes cineastas y el Fondo Cinematográfico de carácter rotativo, a la vez que proporciona asesoramiento en el enlace para el arriendo de películas y apoyo a la cultura cinematográfica.

Australia Occidental

364. La Ley del Patrimonio Cultural Aborigen de 1972 de Australia Occidental, administrada por el Departamento de Asuntos Aborígenes (AAD), se promulgó para proteger el patrimonio cultural aborigen. La Ley prevé el establecimiento del Comité de la Cultura Material Aborigen que asesora sobre todas las cuestiones referentes al patrimonio cultural en el Estado. El AAD se encarga igualmente de administrar la siguiente legislación:

- la Ley de la Autoridad de Planificación de Asuntos Aborígenes, que obedece al propósito de fomentar el bienestar de la población aborigen en Australia Occidental y tomar en consideración sus opiniones en relación con la elaboración de políticas y la prestación de servicios gubernamentales del Estado a la población aborigen; y
- la Ley de Comunidades Aborígenes de 1979, que permite a las comunidades controlarse y administrarse ellas mismas expidiendo ordenanzas, en particular las relativas a la ley y el orden en el seno de la comunidad.

365. Además, el AAD efectúa la planificación y coordinación oficial con otros organismos de prestación de servicios gubernamentales en lo que se refiere a los servicios a la población aborigen.

ANEXO *

Principales instrumentos de la legislación australiana federal
y de los estados contra la discriminación

Federales

Ley de la Función Pública de 1922
Ley sobre la Discriminación Racial de 1975
Ley del Ombudsman de 1976
Ley de Libertad de Información de 1982
Ley sobre la Discriminación por Razones de Sexo de 1984
Ley de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de 1986
Ley del Inspector General de Inteligencia y Seguridad de 1986
Ley de Medidas Positivas (Igualdad de Oportunidades de Empleo para la Mujer) de 1986
Ley de Servicios para la Discapacidad de 1986
Ley sobre Igualdad de Oportunidades de Empleo (Autoridades del Commonwealth de 1987
Ley sobre la Protección de la Vida Privada de 1988
Ley sobre la Discriminación por Discapacidad de 1992
Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo de 1996

Territorio de la Capital Australiana (TCA)

Ley del Ombudsman de 1989
Ley contra la Discriminación de 1991
Ley de Tutela y Curatela de 1991
Ley del Abogado de la Comunidad de 1991
Ley de Servicios para la Discapacidad de 1991
Ley de Quejas contra los Servicios Comunitarios y Sanitarios de 1993

Nueva Gales del Sur (NGS)

Ley del Ombudsman de 1974
Ley contra la Discriminación de 1977
Ley de Relaciones Laborales de 1996

Territorio del Norte (TN)

Ley del Ombudsman (Territorio del Norte) de 1978
Ley contra la Discriminación de 1992

Queensland (Qld)

Ley de Justicia Penal de 1989
Ley contra la Discriminación de 1991
Ley de la Comisión de Derechos Humanos de 1991
Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo Público de 1992
Ley de Relaciones en el Lugar de Trabajo de 1996

* Todos los demás anexos y apéndices mencionados en el presente informe pueden consultarse en la secretaría del Comité.

Australia del Sur (AM)

Ley del Ombudsman de 1972
Ley de Igualdad de Oportunidades de 1984
Ley sobre la Policía (Quejas y Procedimientos Disciplinarios) de 1985
Ley de Viviendas Cooperativas y Comunitarias de 1991
Ley de Libertad de Información de 1991
Ley de Tutela y Curatela de 1993
Ley de Salud Mental de 1993
Ley de Relaciones Laborales y del Empleo de 1994
Ley de Fondos para la Vivienda de 1995
Ley de Arrendamientos Residenciales de 1995
Ley de Gestión del Sector Público de 1995
Ley de Licencia por Servicios Prolongados de 1997

Tasmania (Tas)

Ley del Ombudsman del Pueblo de 1978
Ley de Libertad de Información de 1991
Ley sobre la Discriminación por Razones de Sexo de 1994
Ley de Tutela y Curatela de 1995
Ley de Reclamaciones Sanitarias de 1995
Ley sobre los Niños, los Jóvenes y sus Familias de 1997
Ley de Justicia Juvenil de 1997

Victoria (Vic)

Ley del Ombudsman de 1973
Ley de Libertad de Información de 1982
Ley de Servicios para Personas Intellectualmente Discapacitadas de 1986
Ley de Salud Mental de 1986
Ley sobre las Personas Intellectualmente Discapacitadas de 1986
Ley de la Junta de Tutela y Curatela de 1986
Ley de Servicios para la Discapacidad de 1991
Ley de Igualdad de Oportunidades de 1995
Ley de Delitos (Mutilación Genital Femenina) de 1996

Australia Occidental (AØ)

Ley de Relaciones Laborales de 1979
Ley de Igualdad de Oportunidades de 1984
Ley de Acuerdos en el Lugar de Trabajo de 1993
Ley de Gestión del Sector Público de 1994
